

45ª REUNION — Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA
(ESPECIAL) — DICIEMBRE 29 Y 30 DE 1987

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Eduardo Alberto Duhalde y Jorge Reinaldo Vanossi

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ADAMO, Carlos
ALASINO, Augusto José M.
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBOÑOZ, Antonio
ALENDE, Oscar Eduardo
ALESSANDRO, Julio Darío
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Angel
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl Angel
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARAMBURU, José Pedro
ARAMOUNI, Alberto
ARCIENAGA, Normando
ARGAÑARAS, Heraldo Andrés
ARGAÑABAZ, Ricardo
ARMAGNAGUE, Juan Fernando
AUYERO, Carlos
AVILA, Mario Efraín
AVILA GALLO, Exequiel José B.
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BALANDA, Mariano Pedro
BALL LIMA, Guillermo Alberto
BARBEITO, Juan Carlos
BAUZA, Eduardo
BELLO, Carlos
BERCOVICH RODRÍGUEZ, Raúl
BIANCIOOTTO, Luis Fidel
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BOGADO, Floro Eleuterio
BONIFASI, Antonio Luis
BORDA, Osvaldo
BOTELLA, Orosia Inés
BOTTA, Felipe Esteban

BREST, Diego Francisco
BUDINO, Eduardo Horacio
BULACIO, Julio Segundo
CACERES, Luis Alberto
CAMBARERI, Horacio Vicente
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CAPPELLERI, Pascual
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASAS, David Jorge
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CAVALLO, Domingo Felipe
CLERICI, Federico
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
CRUCHAGA, Melchor Bené
CURI, Oscar Horacio
CURTO, Hugo Omar
D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
DALMAU, Héctor Horacio
D'AMBROSIO, Angel Mario
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ BANCALARI, José María
DI CAPRIO, Marcos Antonio
DIGÓN, Roberto Secundino
DUHALDE, Eduardo Alberto
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FAPPIANO, Oscar Luján
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ de QUARRACINO, Matilde

FERREYRA, Benito Orlando
FOLLONI, Jorge Oscar
FREYTES, Carlos Guido
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GERARDUZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GUIDI, Emilio Esteban
GUZMÁN, María Cristina
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HUARTE, Horacio Hugo
IBARBIA, José María
INGARAMO, Emilio Felipe
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JAROSLAVSKY, César
KRAEMER, Bernhard
LEMA MACHADO, Jorge
LESTELLE, Eugenio Alberto
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, José Remigio
LOZA, Zésar Augusto
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MANRIQUE, Luis Alberto
MANZANO, José Luis
MARÍN, Rubén Hugo
MARTÍNEZ, Gabriel Adolfo
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MÉNDEZ DOYLE de BARRIO, María L.
MERINO, Eubaldo

MILANO, Raúl Mario
 MONJARDÍN de MASCI, Ruth
 MONSERRAT, Miguel Pedro
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOREYRA, Omar Demetrio
 MOSCA, Carlos Miguel A.
 MUGNOLO, Francisco Miguel
 MULQUI, Hugo Gustavo
 MUTTIS, Enrique Rodolfo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto A.
 NERI, Aldo Carlos
 NUIN, Mauricio Paulino
 ORGAZ, Alfredo
 ORIETA, Gaspar Baltazar
 ORTIZ, Pedro Carlos
 OSOVNIKAR, Luis Eduardo
 PAMPURO, José Juan B.
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PAZ, Fernando Enrique
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERA OCAMPO, Tomás Carlos
 PEREZ, René
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 POSSE, Osvaldo Hugo
 PRONE, Alberto Josué
 PUEBLA, Ariel
 PUERTA, Federico Ramón
 PUGLIESE, Juan Carlos
 RAMOS, Daniel Omar
 RAMOS, José Carlos
 RAPACINI, Rubén Abel
 RAUBER, Cleto
 REINALDO, Luis Aníbal
 REQUEJO, Roberto Vicente
 RIUTORT de FLORES, Olga E.
 RODRIGO, Juan
 RODRIGO, Osvaldo
 RODRIGUEZ, Jesús
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 ROY, Irma
 RUCKAUF, Carlos Federico
 SALDUNA, Bernardo Ignacio R.
 SALTO, Roberto Juan
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCASSANI, Benito Gandhi E.
 SILVA, Carlos Oscar
 SILVA, Roberto Pascual

SIRACUSANO, Héctor
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCH, José María
 SOTELO, Rafael Rubén
 STAVALE, Juan Carlos
 STORANI, Conrado Hugo
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBBRIN, Marcelo
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TOMA, Miguel Ángel
 TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo
 TORRES, Manuel
 TRIACA, Alberto Jorge
 VACA, Eduardo Pedro
 VALERGA, Carlos María
 VANOLI, Enrique Néstor
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco
 VILLEGAS, Juan Orlando
 YOUNG, Jorge Eduardo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZOCCOLA, Eleo Pablo
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

CANTOR, Rubén
 MATZKIN, Jorge Rubén

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABDALA, Luis Oscar¹
 BRIZUELA, Delfor Augusto¹
 DE LA SOTA, José Manuel¹
 DI TELLA, Guido¹
 GAY, Armando Luis¹
 LAMBERTO, Oscar Santiago¹
 LARRABURU, Dámaso¹
 TORRESAGASTI, Adolfo¹
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos¹
 VEGA ACIAR, José Omar¹

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara

AUSENTES, SIN AVISO:

ADAIME, Felipe Teófilo
 ALDERETE, Carlos Alberto
 ARANDA, Saturnino Dantti
 AVALOS, Ignacio Joaquín
 BADRAN, Julio
 BARRENO, Rómulo Víctor
 CARDO, Manuel
 CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
 CARRIGNANO, Raúl Eduardo
 CARMONA, Jorge
 CARRIZO, Víctor Eduardo
 CASTILLO, José Luis
 CEVALLO, Eduardo Rubén P.
 COLLANTES, Genaro Aurelio
 COSTANTINI, Primo Antonio
 DEL RÍO, Eduardo Alfredo
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
 GROSSO, Carlos Alfredo
 IGLESIAS, Herminio
 JUEZ PEREZ, Antonio
 LENCINA, Luis Ascensión
 LUDER, Ítalo Argentino
 MANZUR, Alejandro
 MIRANDA, Julio Antonio
 PACCE, Daniel Víctorio
 PAERBA, Luis Ambrosio
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMÍREZ, Ernesto Jorge
 RIQUEZ, Félix
 RODRIGUEZ, José
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Julio
 ROMERO, Roberto
 ROSALES, Carlos Eduardo
 ROSSO, Carlos José
 SELLA, Orlando Enrique
 TAPARELLI, Juan Carlos
 TORRES, Carlos Martín
 ULLOA, Roberto Augusto
 USIN, Domingo Segundo

ELECTO NO INCORPORADO:

MANRIQUE, Francisco Guillermo

SUMARIO

1. Continúa la consideración del proyecto de ley del señor diputado Toma y otros por el que se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional (2.349-D-87). (Pág. 4740)
2. Moción de orden del señor diputado Alsogaray de que el proyecto al que se refiere el número 1 de este sumario sea enviado a comisión. Es rechazada. (Pág. 4744.)
3. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 4748)
4. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4749.)
5. Consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen medidas destinadas

a una mejor regulación de la actividad vitivinícola (S.-P.E.-87). (Pág. 4799.)

6. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 4802.)

B. Inserción. (Pág. 4808.)

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de diciembre de 1987, a las 15 y 18:

1

BASES JURIDICAS, ORGANICAS Y FUNCIONALES PARA LA PREPARACION, EJECUCION Y CONTROL DE LA DEFENSA NACIONAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión. Prosigue la consideración en general del pro-

yecto de ley del señor diputado Toma y otros, por el que se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional (expediente 2.349-D.-87)¹.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: hace poco leía que el mundo político de Occidente ha sido invadido por la abstracción, manifestada por medio de referencias elípticas a los problemas. Esto ha ido generando en la opinión pública un descreimiento cada vez mayor acerca del quehacer político y de las instituciones, descreimiento que en los Estados Unidos de América ha provocado un 50 por ciento de abstenciones en las últimas consultas electorales.

Considero que en muchas oportunidades también nosotros hemos caído en lo elíptico a lo largo del importante debate que se está dando en esta Cámara. Estamos discutiendo un proyecto de ley de defensa en un país dado y en una fecha determinada: no se trata del proyecto de ley de defensa para Suecia, sino para la República Argentina de 1987, es decir, para un país que hace cuatro años vivió el drama más profundo de su historia desde la organización nacional.

Es cierto que existen contradicciones entre las palabras del diputado Alfonsín y las del presidente Alfonsín, y diferencias entre las declaraciones del general Perón y la postura de la bancada peronista, porque entre las palabras de aquel entonces y las de ahora medió nada menos que el lapso transcurrido entre 1976 y 1983, el tiempo del imperio de la fuerza y el desprecio por la vida. Esto ha hecho reflexionar a muchos argentinos; a otros les ha dejado heridas muy profundas. Tratamos este proyecto de ley en medio de esta realidad, en una etapa difícil de transición hacia la democracia.

Muchos pensaron que el simple acto electoral de 1983 iba a poner fin a un período de autoritarismo y que comenzaría a funcionar en pleno la democracia. No fue así. Se inició el período de la transición. En esta sociedad todavía existen muchos elementos de autoritarismo y la democracia se tiene que ir afianzando en una etapa sumamente difícil, contradictoria, transitoria.

No creo que este proyecto sea en abstracto el más perfecto ni que deba regir para siempre; es la mejor ley de defensa que ha obtenido este consenso positivo y superador en la Argentina

de 1987. También en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se sancionaron leyes y principios que nos parecen contrarios al derecho: por ejemplo, la legislación austríaca que prohíbe la existencia de determinados partidos políticos. Esto parece algo antidemocrático. Les parece así a quienes leen la legislación en su gabinete y no han vivido los dolores de la ocupación nazi; pero para quienes vivieron aquellos dolores y aquel tiempo fue una normativa lógica que se ajustó correctamente a su marco histórico.

En esta Cámara quedan delineadas dos grandes posturas. Una infinitamente mayoritaria: la de quienes pensamos que se ha gobernado mal, que se ha reprimido mal, que no es aceptable el terrorismo de Estado. Como bien lo dijo el señor diputado Zubiri, aquí incluso se hizo el alarde y la justificación de la tortura, del vejamen de la persona humana. La postura de quienes creemos que todo esto es inadmisiblemente contrasta con la de quienes piensan que lo acontecido es susceptible de explicación y justificación en razón de que el terrorismo de unos marginados justifica el terrorismo de Estado.

Quienes piensan que se ha actuado bien, creen que se puede posibilitar la reiteración de esos hechos. Quienes pensamos que se ha actuado mal, consideramos que es necesario poner una limitación en este tema de la seguridad interior, no en cualquier país y en cualquier época sino en la Argentina de 1987, con su experiencia, sus dolores y sus esperanzas. En esta Argentina correctamente se limita el accionar de sus fuerzas armadas a la defensa de la agresión externa, distinguiendo el campo de la defensa exterior y el de la seguridad interior. De esta forma podemos recomenzar un nuevo tiempo, una etapa real y concreta, en una tierra que tiene su experiencia dolorosa también real y concreta.

Por consiguiente, no se trata de hacer juegos de palabras ni de pretender encontrar contradicciones, viendo si se puede aislar a una provincia o si puede caer en paracaídas la agresión. No son ésas las variantes estudiadas. Se está analizando la forma de reglar la actuación de las fuerzas armadas de nuestro país, las que han tenido durante años un mando nefasto que ha quedado grabado en la sensibilidad y en la conciencia de la inmensa mayoría de los argentinos.

Nosotros queremos decir aquí que apoyamos este proyecto de ley, fruto del consenso. Creemos que se han escuchado en este recinto expresiones dolidas, que también a veces nos precipitan en el terreno de la exageración. Lo digo con todo respeto.

Creo que ese accionar absolutamente erróneo de los mandos de nuestras fuerzas armadas entre

¹ Véase el texto del proyecto de ley y de sus fundamentos en el Diario de Sesiones del 28 y 29 de diciembre de 1987, página 4685.

1976 y 1983 ha determinado que se reabra, por ejemplo, el debate sobre el servicio militar. Nosotros estamos a favor del servicio militar obligatorio, como parte de un servicio social. Creemos en la integración democrática de nuestras fuerzas armadas y que todo ciudadano tiene el derecho y el deber de acudir en defensa de la Nación.

Queremos crear un servicio social con hombres y mujeres, que en parte tengan como finalidad servir en nuestras fuerzas armadas.

Asimismo, la sensación que hemos padecido nos lleva a hacer una ponderación exagerada del profesionalismo en nuestras fuerzas armadas. Ya en 1905 Palacios había alertado desde estas bancas sobre el problema del tecnicismo y sobre la necesidad de vincular al pueblo con el problema de la defensa, para que dejemos de creer que a través de la técnica y de la sofisticación se puede manejar a las fuerzas armadas y orientar la defensa de la Nación.

No pongamos el carro delante de los caballos; aprendamos de nuestra historia. Por ejemplo, cuando San Martín tuvo que fabricar cañones no pidió un crédito para contratar tecnología y superar el poderío de las fuerzas españolas; buscó entre nosotros alguien que supiera hacer fundiciones. Así es como encontró a fray Luis Beltrán, que se arremangó la sotana y se puso a trabajar para que tuviéramos nuestros cañones. Muchos habrán explotado, pero otros dieron resultado. De esta forma, libramos con éxito la batalla por nuestra independencia, creyendo en la decisión y en la justicia de la defensa.

Nosotros tenemos un concepto propio de la defensa nacional, que abarca al conjunto del pueblo y a sus instituciones. En ese sentido, las fuerzas armadas son las instituciones básicas de la defensa nacional. Una potencial agresión debe ser repelida por el conjunto de la Nación con todos los medios a su alcance. Debe existir una participación activa de todo el pueblo, no como defendido sino como defensor, no como simple receptor de órdenes sino como un conjunto profundamente implicado en las decisiones de la defensa nacional. Esta es la base de nuestro futuro sistema de defensa, el único posible en un mundo que se caracteriza por la presencia de grandes potencias, con enormes aparatos militares, y por la voluntad de los pueblos para obtener su derecho a la autodeterminación.

El problema de la defensa nacional incumbe a todos; ella debe ser autónoma e independiente, descartándose cualquier actitud agresiva y ex-

Estas definiciones, lamentablemente, no están en el texto de la ley, no obstante lo cual seguiremos luchando por nuestro objetivo.

En el día de ayer, el señor diputado Conrado Storani se refirió al significado de la palabra pueblo. Nosotros aprendimos el papel decisivo del pueblo en el rechazo de las invasiones inglesas; ese pueblo que prefirió repeler la agresión con sus fuerzas a las telas de muselina que estaban en las bodegas de los buques ingleses, como lo consigna Walter Scott. Nosotros aprendimos el valor del pueblo que nos muestra la enseñanza de Belgrano en el éxodo de Jujuy; aprendimos también del valor del pueblo en la organización que produjo el gobernador de Cuyo, el general José de San Martín.

No debemos olvidar las hazañas de los héroes que simbolizan al pueblo en el quehacer militar, como fueron Cabral, el tambor de Tacuarí, las mujeres de Ayohuma, los tres sargentos de Tambo Nuevo, Falucho.

Por eso, creemos que las enseñanzas de nuestra historia, determinan que la tropa es invencible cuando pueblo y ejército unidos llevan hacia adelante objetivos comunes. Allí reside la invencibilidad de los pueblos que han luchado contra la agresión exterior para conservar su derecho a la autodeterminación. Por ello, cuando debemos decidir en los mandos, preferimos quedarnos con el "tropero", que conoce a la tropa y puede conducirla, y a quien ésta respeta.

Por otro lado, cuando hablamos del problema del terrorismo, siempre asistimos a la caza de brujas. Durante parte del debate de ayer pareció desprenderse que la existencia del marxismo justifica la tortura, la violación y el ultraje; que el hecho de que exista un marginado que coloca una bomba justifica que violemos a su madre o a su hija. Esto no lo aprendimos en la escuela del derecho, ni en el derecho penal, ni en la penología ni en la escuela de la corrección, por la que se recupera a los hombres para la cosa útil; lo aprendimos en el odio, en el imperio de la fuerza. El señor presidente sabe muy bien que en todos aquellos ámbitos donde nosotros hemos tenido una larga actuación —como en las universidades— no brota el terrorismo; ello, porque organizamos la participación democrática y damos a todas posibilidades para que se exterioricen, quedando los marginados reducidos a su mínima expresión.

Cuando hablamos de terror no debemos ponerle banderas, porque el terror lo infunden los marginados y los títeres de una y otra superpotencia. No nos olvidemos de Letelier, Prat, Olof Palme, el obispo Romero y los batallones de la muerte. Nosotros repudiamos todo terror,

y lo hacemos con nuestras manos, sin armas, sin torturas y con la ley. Por eso, la acción contra el terrorismo triunfa cuando se lo combate con la ley. Aquel que toma del enemigo sus propias tácticas termina por ser derrotado por la opinión pública, tal como lo demuestran las enseñanzas de nuestra historia reciente.

Nosotros, los socialistas, tenemos un largo quehacer en materia de defensa. Asimismo, contamos con poder de convocatoria porque creemos tanto en la milicia como en la participación popular. En 1905, Alfredo Palacios abogó en esta Cámara por un ejército de sistema democrático, por la milicia ciudadana, para que fuera verdad en nuestro país lo que el general Brunet afirmaba de Suiza cuando expresaba, elogiándola, que había conseguido que todos sus ciudadanos fueran soldados, sin que éstos hubiesen privado a la Nación de uno solo de sus ciudadanos.

Palacios repudiaba un ejército de clases y más de clase gobernante, que creaba el divorcio entre las fuerzas armadas y el pueblo y cavaba un abismo infranqueable entre la comunidad y el ejército organizado para su defensa y garantía. Dijo Alfredo Palacios: "Es menester que exista una unión indestructible de civiles y militares para defender a la patria. Todo lo que conspiraba contra ella era una energía disolutiva, que conducía a la guerra civil y atentaba contra la vida de la Nación".

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Jorge Reinaldo Vanossi.

Sr. Estévez Boero. — En 1943, siendo Alfredo Palacios presidente de la Universidad Nacional de La Plata, se concreta en el seno de esa casa de estudios la cátedra de Defensa Nacional, donde se invita a exponer a oficiales superiores del Ejército y de la Armada. En aquella oportunidad dijo el doctor Palacios que "la fuerza de una nación reside primordialmente en el valor de sus tradiciones —estamos hablando de la tradición que crea—, en la fuerza de sus ideales y en la unión de civiles y militares para defender la patria. La patria debe estar unida como un engranaje que vuela sin desmembrarse. Quien pretenda separarse corre el peligro de perderse en la soledad infinita".

Nosotros hemos escrito, y lo reiteramos, que la unidad de las fuerzas armadas y del pueblo es imprescindible. Al margen de las disidencias que podamos haber tenido en la historia, en dos oportunidades se logró una fusión total —prácticamente absoluta— entre el poder político y las fuerzas armadas. Una de ellas se produjo durante el primer gobierno del general Roca,

y la otra cuando el general Perón asumió la presidencia de la República por primera vez. En esta última oportunidad, al margen de los juicios y los sistemas, el país alcanzó distintos logros, saltó hacia adelante y concretó posiciones, lo que habla de lo positivo de esta unidad.

Aquí también se ha hablado de toda una situación de las fuerzas armadas que parece destinada a convencer a sus integrantes de que son ellos las víctimas de la democracia. Se ha hablado de los bajos sueldos que perciben del Estado, de los cuarteles, del alto costo de los repuestos y de la paralización de determinados mecanismos afectados a la defensa.

Todo eso es cierto; éste es el país del año 1987. Es el país que recibimos, con su deuda externa; es el país que se destrozó; es el país donde cerca de un millón de argentinos han emigrado porque creen que aquí no existen las condiciones espirituales y materiales para lograr sus objetivos. Pero éste también es el país que vamos a recomponer solamente en democracia, y únicamente en democracia las fuerzas armadas —a las que deseamos integradas en el quehacer de la Nación en todos sus aspectos— van a poder volver a desarrollarse y sus hombres podrán usar con gusto y satisfacción sus uniformes en los lugares públicos. Volveremos a alentar a nuestros hijos en la vocación de integrar el brazo armado de la Nación; los argentinos podremos mirarnos de frente si aceptamos las condiciones en las que estamos viviendo. Debemos realizar una autocrítica para saber cuál es la responsabilidad que a cada uno compete en la realidad en que nos encontramos.

Nuestro país ha tenido un profundo déficit en el desarrollo de la ciencia vinculada con la defensa. Es bien sabido que en las universidades del mundo se estudia defensa; hay especialidades sobre esa materia; hay generaciones de civiles que han estudiado el tema. Sin embargo, en nuestro país, del que todos somos responsables, tenemos un gran déficit sobre el particular; éste se extiende hasta nuestros días, pero no nace con la democracia.

Todos sabemos que tenemos una organización de fuerzas armadas que debe ser perfeccionada. Es conocido que quienes las comandan institucionalmente no tienen capacidad de manda; se trata de los jefes de los estados mayores cuya función, por su naturaleza, es diferente. Esta es la realidad de la que iremos saliendo si es que nos empeñamos en modificarla.

Desde hace muchos años en el país se pretende cosechar el resentimiento; por suerte, cada

véz son menos los recolectores de resentimiento y prácticamente ya no existen.

También se ha hablado aquí de un matrimonio. Me alegro de ello, porque el matrimonio es la base de la familia, así como el diálogo entre los grandes bloques es imprescindible para salir adelante. El reconocimiento de las mayorías y minorías en cuanto a los derechos y obligaciones hace también a la esencia de la democracia. Habrá desprolijidades, pero eso no atañe al fondo de la cuestión.

El consenso, si bien no ha resuelto los problemas de salarios, pensiones, créditos y tasas de interés, es el hecho más positivo que ha sucedido en 1987. Además, es el comienzo de una salida, porque, sin el consenso de las mayorías nacionales no puede haber solución para la crisis y la desintegración de nuestro país. De esto estamos absolutamente convencidos. Por esta razón hemos de defender ese consenso, pues nosotros —los que nos quedamos en nuestro país de noche y de día— consideramos que es imprescindible para que la Argentina, nuestra patria, pueda salir adelante.

Es necesario seguir trabajando por ese consenso y en el diálogo, aunque muchas veces no se trace una línea recta; habrá marchas y contramarchas; existirán consenso y disenso. Unos convocarán al consenso para ampliar sus bases de sustentación o para ganar tiempo; otros concurrirán a la mesa del consenso porque no se animan a dar la espalda a la opinión pública frente a un país mayoritario que exige el acuerdo. Que esto lo juzgue Dios en el más allá.

Los argentinos de 1987 estamos convencidos de que solamente de la mesa del consenso saldrá la solución adecuada y por eso la apoyamos. Creemos que éste debe ser el comienzo de un nuevo tiempo.

Sabemos que siguen vigentes aquella sentencia del primer gobernante electo por el voto popular en nuestro país, la existencia de una causa nacional y popular y el régimen con raíces oligárquicas y extranjerizantes. Debemos desarrollar la organización de quienes, sin vinculaciones con la dependencia y el privilegio, crean en la posibilidad de construir un nuevo país.

Es necesario dar lugar a un nuevo bloque histórico, una nueva democracia profundamente participativa, y debemos hacerlo quienes creemos en el pueblo porque allí reside la garantía de aquella.

Por las razones expuestas, apoyamos este proyecto de ley que se ajusta a la realidad de nuestro país, es decir, a nuestros dolores y esperanzas. 1987. (Aplausos.)

2

MOCION

Sr. Presidente (Vanossi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: los numerosos alegatos que hemos escuchado sobre nuestras propias maneras de pensar nos llevan a la conclusión de que este proyecto de ley debe ser revisado antes de ser votado en esta Cámara. Por lo tanto, formulo moción de orden para que el asunto vuelva a comisión, y en caso de que esta moción sea rechazada mantengo mi propósito de seguir con la exposición a efectos de expresar nuestro desacuerdo con la iniciativa.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia aclara que el proyecto en consideración no cuenta con despacho de comisión; al menos, con despacho de todas las comisiones a las que corresponde su estudio. De modo que la moción del señor diputado Alsogaray debería interpretarse en el sentido de que el asunto sea enviado a comisión.

Está en consideración la moción de orden formulada por el señor diputado por la Capital.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: la bancada de la Unión Cívica Radical se opone a la moción formulada por el señor diputado Alsogaray. Durante el día de ayer hemos estado en este recinto largas horas debatiendo en general este proyecto; incluso el bloque al que pertenece el señor diputado Alsogaray expuso su posición sobre este tema. Al respecto considero que habría sido más justo que la moción se hubiera presentado en ese momento, cuando había número suficiente en el recinto para que la Cámara decidiera cómo resolver esta situación. Sin embargo, ella se formula ahora, en momentos en que la mayor parte de los legisladores recién está ingresando en el recinto en razón de que sabían que había un cuarto intermedio.

Estimo que esta actitud es una forma de cercenar el tratamiento de este proyecto de ley, por lo cual solicito al señor diputado Alsogaray que retire la moción de orden.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: antes de formular esta moción la hemos meditado y, como de costumbre, procedemos con toda seriedad.

En todo caso, hay una forma de resolver el problema: se llama para votar y cuando los señores diputados lleguen al recinto rechazarán la moción, por lo que seguiremos adelante; pero no es lógico sesionar de la manera en que lo estamos haciendo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: desco apoyar los conceptos vertidos por el señor diputado preopinante, pues no es serio que un proyecto de ley de tal trascendencia para el futuro argentino se considere por la Cámara en las condiciones en que lo está haciendo en estos momentos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Díaz. — Señor presidente: creo que no es justo que se hagan afirmaciones como las que acabamos de escuchar respecto de que esta iniciativa no se está tratando con seriedad. Este es un asunto que se está estudiando desde hace tiempo por diferentes comisiones de esta Honorable Cámara y hasta el momento ha sido analizado con un número poco acostumbrado de diputados presentes en el recinto. En este momento ha disminuido la cantidad de legisladores pues hasta hace unos instantes se ha estado trabajando en las comisiones, lo que se suma al hecho de que la reiniciación de la sesión estaba prevista para una hora temprana respecto del horario habitual. De cualquier manera, tampoco es serio que a esta altura del año y frente a una importante cantidad de asuntos que todavía resta considerar, se acuda a un método inconveniente, que tiende pura y exclusivamente a provocar la interrupción de esta sesión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Alsogaray. — Señor presidente: en primer término debo señalar que el bloque de la mayoría ya había sido avisado sobre esta posición que estamos adoptando, porque realmente creemos que esta iniciativa reviste tal importancia que justifica que la Cámara sesione con la mayor cantidad posible de señores diputados. En cuanto a que algunos de ellos están trabajando en comisión, recuerdo que el reglamento de la Honorable Cámara dispone que las comisiones no deben funcionar mientras el plenario está sesionando. Por lo tanto, se debería pedir que se suspendieran las reuniones de comisión y que los señores legisladores vengan al recinto a votar la moción presentada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aramburu. — Señor presidente: por razones políticas, prácticas y éticas me voy a oponer a la moción formulada por el señor diputado Alsogaray.

Debemos ser absolutamente francos y totalmente auténticos en las manifestaciones que hacemos en estas circunstancias especiales que están atravesando el Parlamento y el país. Como he dicho en varias oportunidades, no creo que sean convenientes los sistemas que hemos estado utilizando en el último tiempo para resolver una profunda, difícil, profusa e importante legislación en la República Argentina. Pero también he dicho, y tengo la obligación de repetirlo y reconocerlo nuevamente —porque así lo siento íntimamente—, que las mayorías, de las que no formo parte porque el país así lo ha determinado, tienen el derecho a realizar estas asociaciones de tipo político procesal en razón de lo que ellas entienden que son los intereses legítimos que el pueblo les confió.

No participo de ese sistema porque no estoy de acuerdo; no me parece el mejor, pero lo reconozco como un derecho de las mayorías. A partir de aquí es necesario que el país sepa —aun desde esta reunión en minoría— que no es exacto que este proyecto no se ha tratado, estudiado, discutido y analizado desde hace ya cuatro años; además, yo diría que forma parte de las propuestas políticas de todos los partidos.

La razón por la cual hoy no están presentes todos los diputados que deberían estar para votar es muy simple. Todos conocemos el funcionamiento de este Parlamento. Hemos tenido en nuestras manos —no en este momento pero sí en el día de ayer— una lista de oradores en la que estaban anotados para dar su opinión con respecto a este proyecto más de veinte distinguidos señores diputados. Esto significa que si cada uno de ellos hiciera uso de la palabra, ya sea en su calidad de presidentes de bloque o en forma individual como legisladores, este debate se extendería por muchas horas más. Creo que éste es el motivo por el cual muchos señores diputados no están presentes, puesto que sabían que ésta no sería la oportunidad de votar. No obstante, pienso que su obligación es escuchar las opiniones de todos los señores diputados.

Por lo expuesto, me opongo a la moción de que el proyecto vuelva a comisión. Entiendo que el tema ha sido suficientemente estudiado y debatido en profundidad.

La explicación que doy en nombre de los señores diputados ausentes es simple: no están aquí en este momento porque, teniendo en cuen-

ta el número de anotados para hacer uso de la palabra, deben pasar muchas horas antes de que corresponda pasar a votar. Además, quiero señalar que esta reunión comenzó en el día de ayer y contó con la especial atención de un número importante de diputados que estuvieron escuchando las manifestaciones de los bloques más numerosos que componen la Cámara.

Por todo ello, y porque entiendo que el país necesita un conjunto de leyes que en este momento se están discutiendo en el nivel de los bloques mayoritarios, creo que no debemos levantar la sesión utilizando el argumento de que el proyecto no está suficientemente estudiado y como todos tenemos una opinión comprometida debe volver a comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: entiendo que esta moción, más allá de lo que implica, responde al deseo de que la Cámara de Diputados comience a trabajar como efectivamente debe hacerlo.

No es novedad que en debates sobre temas de esta naturaleza largas exposiciones sean escuchadas sólo por un reducido número de legisladores presentes. Lo que ocurre es que este asunto —al igual que otros— ha sido discutido durante los días recientes en forma exhaustiva en ámbitos ajenos al Congreso —tales como la mesa del consenso y el Ministerio de Defensa— entre los sectores políticos con mayor capacidad de decisión.

De esa forma sólo se viene al Congreso a pronunciar veinte o treinta discursos para el Diario de Sesiones y homologar luego una decisión política transformándola en legislativa. Esa no es la manera adecuada en que deben funcionar las instituciones.

No tendría inconveniente en solicitar al autor de la moción que la retirase si ello contribuyera en alguna medida al desenvolvimiento más eficaz de la Cámara; pero creo que con dicha moción se persigue el objetivo que he señalado. Me refiero al hecho de comenzar a trabajar seriamente para que algún día las sesiones comiencen cuando deban comenzar, para que los legisladores estemos en nuestras bancas y en nuestros despachos cuando corresponda, para que no nos distraigan otras ocupaciones y para que la tarea legislativa sea la primordial.

En estos últimos días tuvieron lugar una serie de episodios que realmente nos disgustaron. La semana pasada nos retiramos del recinto ante una moción que sólo buscaba precipitar una votación. Fue una moción sin antecedentes en esta

Cámara en el presente período constitucional. Esto ocurrió luego de largas semanas de discusión entre los dos partidos mayoritarios. Ahora bien, ¿dónde están los diputados del justicialismo? Sus bancas están vacías.

Con esta moción que se acaba de formular se pretende que el Congreso de la Nación comience a funcionar como debe hacerlo. Creo que debemos tomar una decisión de esta naturaleza para asumir el compromiso en forma conjunta. Aquí, donde se habla tanto de consenso y de compromiso, debemos sentarnos en nuestras bancas y cumplir con nuestra obligación elemental de diputados de la Nación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Guidi. — Señor presidente: en nombre del bloque del Movimiento Popular Jujeño deseo manifestar nuestro acuerdo para que este proyecto sea girado a comisión. Para fundar nuestra posición no abundaré en tecnicismos ni en argumentos de tipo jurídico, porque ya han sido expuestos en esta Honorable Cámara; simplemente deseo señalar que consideramos que esta iniciativa es perfectible y, además, es necesario que produzcan dictamen las comisiones que aún no lo han hecho.

No lo hacemos con el ánimo de que el proyecto quede en un cajón cerrado ni tampoco para que fracase la sesión por falta de quórum. Proponemos que la Cámara continúe deliberando, que escuchemos al resto de los oradores y posteriormente, ya con mayor número, tomemos una determinación como la comentada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: sin muchas esperanzas en cuanto a la posibilidad de reunir el número necesario para votar, quiero seguir transitando el camino —cómodo para muchos— que propuso el señor diputado Aramburu: el de la franqueza y la autenticidad, que es la única forma de guardarnos respeto.

Creo que esta moción, que deliberadamente procura el levantamiento de la sesión, habida cuenta de la eventual imposibilidad de reunir número para votar, tiene la misma identidad política —y la legitimidad que reconozco— de aquella otra que tan airadas protestas levantó cuando días atrás, siendo las cuatro y media de la madrugada y habiendo diecisiete señores diputados anotados en la lista de oradores, tuvimos la necesidad de elegir entre sancionar una ley o escuchar diecisiete discursos que, sin duda, habrían sido brillantes y aportado mucho al debate.

Quiere decir que aquellas airadas protestas ahora vienen a tener su exacta correlación en una actitud igualmente política que procura el levantamiento de esta sesión para impedir no sólo la sanción del proyecto de ley en consideración sino también que la Cámara continúe deliberando mientras aguarda las decisiones que deben tomarse en el Honorable Senado, ya sobre fines del año 1987.

Sabido es que en el Senado se están analizando las mismas e importantes cuestiones que tratamos días atrás en este recinto —las medidas impositivas y el régimen de coparticipación federal—, así como el proyecto de ley de asociaciones profesionales, algunos de los cuales quizá sean girados nuevamente a esta Cámara.

El acuerdo público entre los dos partidos mayoritarios determina estos pasos que posibilitarán que lleguemos a fin de año con la intención de darle al país un importante conjunto de leyes necesarias para que el Estado no vea trabado su accionar y para que todos podamos seguir desenvolviéndonos dentro de la normalidad a la que podemos aspirar en medio de esta crisis.

Por ello considero que al invocar esta suerte de perfeccionismo parlamentario —que no deja de ser históricamente novedoso en algunas voces—, este celo por el funcionamiento del cuerpo, cuando se sabe que hay diez señores diputados anotados en la lista de oradores y que la Cámara podría continuar perfectamente el debate en general como una muestra de respeto hacia los diputados que se han hecho presentes en el recinto con ese propósito, se está perfilando claramente una maniobra política contra la que nuestra bancada no se levantará airadamente en protesta. Simplemente, admitiremos que se trata de un recurso político; pero conviene que así lo puntualicemos, porque bajo determinadas circunstancias y en el libre juego de la práctica parlamentaria las minorías pueden ejercer también esos derechos, que cuando son privativos de las mayorías se los denuncia por lesionar los de las minorías. Así sucede cuando un pequeño grupo de diputados puede detener la labor parlamentaria mediante el simple recurso de presentar una moción que se sabe no podrá ser votada en este momento por falta de número, aunque tal vez sí pueda serlo dentro de dos horas, cuando previsiblemente estén por finalizar las exposiciones los diputados que integran la lista de oradores y haya mayor número de legisladores ocupando sus bancas.

En cuanto a esas expresiones de aspiración a la perfección que algunos señores diputados han

vertido con énfasis, las recojo como una manifestación de voluntad que, ciertamente, no coincide con una política de obstrucción de la misma tarea que se quiere exaltar.

Lo que se está procurando en este momento es evitar que el país obtenga las leyes que necesita. Ese es el claro sentido político de la moción presentada; así debemos entenderla y asumirla, incluso como experiencia para las mayorías, porque siempre ha ocurrido que cuando las mayorías se divorcian las minorías se cuelan por las rendijas y vienen las dictaduras.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González (E. A.) — Señor presidente: creo que esta Cámara está en deuda con el pueblo argentino. Me disculpo ante los diputados más antiguos, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, por esta aparente crítica proveniente de quien hace sólo unas pocas semanas se incorporó a este cuerpo como diputado de la Nación; pero la verdad es que esa deuda existe.

Paradójicamente, esa deuda no se pagará aumentándola, porque si le debemos cosas al pueblo tenemos que empezar por producir lo que no hicimos antes. El pueblo está esperando que esta Cámara trate importantes leyes en lo poco que resta de este año. La moción que se ha presentado implicaría, en caso de no poder votarse por falta de quórum, que tenga que levantarse la sesión y no puedan aprobarse importantes iniciativas.

Manifiesto en este sentido la oposición del bloque demócrata cristiano al tratamiento de esta moción en el presente debate, la cual si bien es un recurso político reglamentario, acarrearía dejar a la Nación con el grave problema de que no se apruebe hoy este proyecto de ley de defensa ni otras importantes iniciativas que en este momento están a consideración del Honorable Senado. ¿Vamos a dejar a las asociaciones profesionales de trabajadores sin la ley que rija su funcionamiento? ¿Seguiremos manteniendo las leyes de la dictadura en materia de asociaciones profesionales? Yo pregunto, señor presidente, si ésta no es una jugada de carambola.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: he escuchado expresiones de prácticamente todos los sectores políticos presentes en este momento en el recinto; algunas absolutamente antojadizas al preten-

der que no se trate la moción, y otras encaminadas al rechazo de la vuelta a comisión. Estamos un poco acostumbrados a estos vaivenes que se dan con el reglamento o en contra del reglamento. Hemos sufrido en más de una ocasión el manejo de quien es lúcido con el reglamento o de quien no lo conoce y por eso lo aplica arbitrariamente.

Esta moción de vuelta a comisión tiene una diferencia sustancial con la moción mordaza de cierre del debate. La moción de cierre del debate enmudece lisa y llanamente la expresión de quienes quedan anotados en la lista sin la posibilidad de hacer uso de la palabra. La moción de vuelta a comisión involucra meramente un retroceso en el trámite o una dilación que permite en el futuro la amplia participación de todos los sectores políticos que componen este honorable cuerpo, así como el estudio racional de este proyecto de ley, el cual, al igual que el paquete impositivo y el proyecto de ley de coparticipación federal —esperado durante cuatro años por el pueblo argentino—, ha venido a esta Honorable Cámara sobre el final del año, en sesiones extraordinarias, sobre el mismo inicio de la sesión destinada a su consideración. Después de toda esta demora escuchamos como si existiera una conjura tácita entre algunos sectores, que hacen el panegírico de la necesidad de sancionar urgentemente este proyecto de ley.

La urgencia o la emergencia capaz de justificar el tratamiento apresurado de una iniciativa sólo puede provenir de una circunstancia súbita, de un hecho no pensado o imprevisto, de un hecho ajeno a la voluntad de los legisladores. Pero si la posibilidad de tratamiento o no de un proyecto de ley depende de la voluntad de los señores diputados, poco pueden valer estas expresiones que buscan resaltar la importancia y trascendencia del momento que estamos viviendo, en cuanto a que no podemos dejar al país sin esta ley de defensa, como si no estuviésemos sin ella desde hace muchísimo tiempo. Pero nuestra Constitución Nacional tiene una cláusula operativa que faculta al poder político a recurrir a las fuerzas armadas en caso de urgencia.

De todas formas lo que no es válido, y por ende lo rechazo, son las expresiones de aparente racionalidad y seriedad legislativa. Esto es, ¿cómo vamos a dejar de tratar este proyecto de ley, en estos momentos, si el país lo está reclamando? ¿Desde cuándo, señor presidente? ¿Ahora, al final del año, cuando se están yendo los diputados porque hasta tienen dificultad para conseguir pasajes para retornar a sus hogares? ¿Ahora hablamos de urgencia? ¿Es razonable y lógico

co que tratemos rápidamente un proyecto de esta naturaleza que ha de servir para la protección de la soberanía argentina y de su paz interior?

De igual modo fueron tratados otros tantos proyectos de ley, aunque desgraciadamente el examen y tratamiento por parte de los hombres sabios tuvo lugar fuera de este recinto.

Los proyectos vienen totalmente deglutidos; vienen aquí para obtener el visto de legitimidad que necesitan, porque de otra forma hasta podrían haber recurrido a un decreto del Poder Ejecutivo o a una resolución ministerial, como se procedió con el cambio de la moneda y en muchas oportunidades con la fijación de su valor.

No se ha respetado la ley, ni tampoco la Constitución...

Sr. Presidente (Pugliese). — Ha vencido el término reglamentario del que dispone, señor diputado.

Se llamará para votar.

—Se llama para votar.

—A la hora 16 y 45:

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por la Capital de que el proyecto de ley que considera la Honorable Cámara sea enviado a comisión.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda rechazada la moción.

3

MOCION

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: hago moción de que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta la hora 20.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 20.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 16 y 47.

—A la hora 20 y 45:

4

**BASES JURIDICAS, ORGANICAS Y FUNCIONALES
PARA LA PREPARACION, EJECUCION
Y CONTROL DE LA DEFENSA NACIONAL**
(Continuación)

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general del proyecto de ley del señor diputado Toma y otros por el que se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: en primer término, formularé unas preguntas: ¿por qué estamos tratando el proyecto de ley de defensa bajo la presión de una inexplicable urgencia, apremiados por el tiempo, en sesión especial durante el período de sesiones extraordinarias, recurriendo al tratamiento sobre tablas porque no se cumplieron los plazos reglamentarios para la consideración de los despachos de comisión, y sin haber contado con el tiempo necesario para que los diputados que no pertenecemos a la Comisión de Defensa Nacional nos enteráramos de su contenido, debiendo mencionar además que el proyecto ni siquiera fue leído en la citada comisión? ¿Por qué estamos tratando de esta manera una norma orgánica permanente y trascendente que debe regir la vida de las fuerzas armadas por largo tiempo en el país?

Creo que se está procediendo de esta forma porque en realidad el tema que nos preocupa —y sobre todo al Poder Ejecutivo— es el problema político que implica la cuestión militar y no el proyecto de ley de defensa. Lo atinente al plano militar todavía no está resuelto; encierra peligros potenciales y mantiene en jaque al Poder Ejecutivo, a los dirigentes políticos y a los comandos supremos de las fuerzas armadas. Esta es la realidad. Quienes crean que votando apresuradamente esta iniciativa se resuelve la cuestión militar incurrir en un profundo error que puede llegar a ser trágico, pues el proyecto que estamos considerando es apenas un capítulo de ese problema y seguramente no el más importante.

Existen otras cuestiones —que inexorablemente habrá que examinar en alguna oportunidad próxima— que dominan y afectan la escena política del país. Considerar el proyecto de ley de defensa en la forma en que lo estamos haciendo constituye un escapismo —disculpen el barbarismo— que nos estamos ocupando de lo

accesorio del problema militar, procurando eludir el aspecto fundamental que nadie parece querer comenzar a tratar.

La cuestión principal, que es verdaderamente crucial, radica en establecer definitivamente si las fuerzas armadas, en razón de la metodología aplicada en la guerra antisubversiva, han agredido intolerablemente a la sociedad civil, mereciendo los militares —genéricamente hablando— los calificativos de asesinos o genocidas, o si, por el contrario, lucharon y triunfaron frente al terrorismo y la guerrilla salvando a la sociedad civil de caer en manos de un totalitarismo marxista o nacional-socialista, y de esta forma preservaron también a las instituciones de la República. Este es el problema crucial.

En el primer caso, todo lo actuado por las fuerzas armadas —no sólo algunos hechos aislados que nadie defiende— merecería la más severa de las repulsas; sería aberrante y perverso. En el segundo, estos calificativos sólo podrían ser aplicados a determinados abusos y extralimitaciones que pueden ser perfectamente identificados y fueron cometidos por algunos de los miembros de las fuerzas armadas. Aquellos integrantes de las fuerzas armadas —que constituyen la inmensa mayoría— que no hubieran cometido verdaderos crímenes violando las leyes de la guerra —no las leyes de tiempos de paz— quedarían al margen de los citados calificativos.

No voy a pretender hoy dirimir esta fundamental cuestión que, como he dicho, es verdaderamente crucial. Ya llegará el momento en que debamos hacerlo, pero no puedo dejar de plantearla por dos razones que se relacionan con este debate que estamos llevando a cabo.

La primera es que para responder a las preguntas formuladas al principio acerca de por qué estamos realizando esta discusión, resulta esencial que hagamos ese planteo. La segunda y fundamental reside en que tanto el tratamiento de este asunto en las anormales condiciones que he señalado, como algunos de sus fundamentos y su articulado parecen responder al hecho de que quienes inspiraron y están impulsando esta iniciativa tienen posición tomada respecto de responsabilizar a las fuerzas armadas, y genéricamente a los militares, por los hechos de la guerra antisubversiva, que califican como aberrantes y perversos.

Algunas concepciones y definiciones explícitas o implícitas en esta norma responden sin duda al enfoque mencionado o a ese prejuicio antimilitar que constituye el telón de fondo de este debate. Creo que la razón principal por

la cual muchos dirigentes políticos se han dejado arrastrar por ese enfoque que considera a toda la acción de las fuerzas armadas, y genéricamente a los militares, como aberrantes y perversos, reside en que no se ha sabido separar el hecho político de la usurpación del poder producida a raíz del golpe del 24 de marzo de 1976, del hecho militar que significó librar y ganar la guerra antisubversiva. Se han mezclado las dos cosas; la usurpación del poder y la función de gobierno que cumplieron las fuerzas armadas se han mezclado con la acción militar que permitió triunfar en la guerra antisubversiva. Tampoco se supo diferenciar lo actuado por las autoridades militares en función política y de gobierno de lo que hicieron en el campo militar.

La usurpación del poder que se llevó a cabo el 24 de marzo de 1976 y la forma en que los militares gobernaron hasta 1983 merecen sin duda el más severo juicio por parte de la dirigencia política y de la ciudadanía toda. Ni siquiera el caos a que el peronismo había arrastrado al país entre 1973 y 1976 y la anarquía reinante en esta última fecha justificaban el golpe de Estado. No es la primera vez que expreso esto en esta Cámara, y tengo derecho a hacerlo porque pocos días antes del golpe de Estado formulé una declaración pública en la cual pedí, de la manera más explícita, que no se lo llevara a cabo. Esto ya lo he mencionado y está transcrito en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara, y por eso no insisto sobre ello.

En cuanto a la forma en que los militares gobernaron durante casi ocho años, especialmente los primeros cinco, no caben tampoco sino críticas ilevantables. Personalmente he efectuado esas críticas de la manera más sistemática y pública posible a partir de un trabajo que se tituló *Cinco meses después*. Además, hasta el año 1983 se publicaron más de 100 escritos de mi autoría en los principales diarios del país, y hay también testimonios radiales y televisivos que demuestran que nosotros hemos sido los principales críticos de ese período, aun en cuestiones tan sensibles que tocan de cerca la cuerda patriótica, como fue el problema de las islas Malvinas. Así fue que tan pronto entrevistamos la posibilidad de cambiar las cosas, fundamos una vez más nuestro partido político.

Esa crítica fundada, sistemática y sin claudicaciones a los militares respecto de la usurpación del poder y de los errores cometidos en función de gobierno —que dicho sea de paso descalifican a quienes nos llaman representantes del partido militar o adherentes a gobiernos de facto—, que por supuesto tenemos dere-

cho a exhibir, nos otorga asimismo el derecho de hablar claro sobre otro enfoque completamente distinto, que es el referido a la guerra antisubversiva.

La acción militar la vemos desde un ángulo totalmente distinto a aquel desde el cual se la ha mirado en los discursos pronunciados en esta Cámara. La acción militar contra el terrorismo, la guerrilla y la subversión salvó a la sociedad argentina de caer —como sucedió en Chile en 1970 con Allende o en Nicaragua en el momento actual— en el totalitarismo marxista.

Esa acción permitió que la sociedad restableciera el orden constitucional —no digo la democracia porque falta bastante todavía para decir que vivimos en una verdadera democracia— e hizo posible que hoy estemos ocupando estas bancas.

Nada hay más negativo y contraproducente que encarar la sanción de un proyecto de ley de defensa al impulso de prejuicios, resentimientos antimilitares y concepciones erróneas derivadas de una gran superficialidad acerca de la forma de organizar el país para el caso de guerra.

Sin embargo, estos tres elementos —prejuicios, resentimientos y superficialidad e inconsistencia en el análisis— están presentes en este debate a manera de telón de fondo, restándole objetividad y solvencia técnica.

Sólo destacaré tres puntos importantes de este proyecto de ley de defensa, que ponen en evidencia esos condicionantes y justifican lo que estoy afirmando.

El primero de ellos consiste en la discusión sobre defensa nacional y seguridad nacional, de lo cual se ha hablado hasta el cansancio en esta Cámara. Esto es pura retórica.

Al hablar de seguridad nacional se hizo referencia a los fusiles de los militares que apuntan hacia adentro del país. Esta es una figura literaria, pero poco feliz y absolutamente falsa. Quienes coparon parte de la provincia de Tucumán, La Calera y Monte Chingolo, asesinaron a Aramburu y a la hija del almirante Lambruschini —y no cito más casos porque es demasiado reciente este período de verdadero terror que vivimos— no estaban fuera del país sino adentro. Si las fuerzas armadas hubieran apuntado hacia afuera nunca habrían dado en el blanco; afortunadamente apuntaron hacia adentro y acertaron.

Por otra parte, entre las hipótesis de conflicto previstas en el proyecto no figura justamente la más probable, que es la hipótesis de guerra sub-

versiva. Estamos legislando para la guerra de las galaxias y para la guerra con los países vecinos y no lo hacemos para la más probable de las guerras, que es la subversiva. Cuando las internacionales de la subversión así lo decidan, el terrorismo se instalará nuevamente en el país y no tendremos una ley específica para combatirlo.

Si no se considera esta hipótesis de conflicto, todo lo que se haga en materia de organización de las fuerzas armadas será incompleto. A la subversión no se la puede combatir con aviones de guerra, proyectiles dirigidos y cañones de grueso calibre; hay que hacerlo con armas completamente distintas, especialmente las muy refinadas que se utilizan para el espionaje y el contraespionaje y sobre todo con una preparación militar totalmente diferente a la necesaria en el campo de batalla. Las fuerzas armadas no tendrán los armamentos adecuados ni estarán preparadas para esta guerra simplemente porque en el proyecto esta hipótesis de conflicto se ha excluido. Por supuesto que llegado el caso habrá que analizarla, pero deberemos hacerlo por vía de otro proyecto de ley. ¿Qué esperamos para hacerlo ahora? Además, ¿por qué debemos tratarla por separado? Nada más que por los prejuicios de la famosa doctrina de la seguridad nacional.

El segundo punto al que quería referirme es el vinculado con la central de inteligencia. Aquí aparece otro barbarismo, ya que se habla de "producción" de inteligencia, como si la inteligencia fuera algo que se pudiera fabricar y además tan fácilmente. De todas formas, dado que este proyecto no está escrito precisamente en castellano ya que está lleno de palabras nuevas cuyo significado hay que entender, no insistiré demasiado sobre este particular. Sólo quiero leer el artículo 15 del proyecto, que dice así: "El organismo de mayor nivel de Inteligencia proporcionará la información y la inteligencia necesarias a nivel de estrategia nacional de la defensa".

Por lo pronto, no se define el organismo de mayor nivel de inteligencia; esto también queda para otras leyes.

El artículo continúa diciendo: "La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo de Inteligencia que se integrará con los organismos de Inteligencia de las fuerzas armadas y que dependerá en forma directa e inmediata del ministro de Defensa.

"Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de intelligen-

cia. De manera que si estos organismos de inteligencia se enteran por casualidad de que existen células subversivas en el país, tendrán que archivar el expediente y nadie podrá saber que tales células han sido descubiertas.

El tercer punto es el relativo a la ley especial para la seguridad interior, que está citada en los fundamentos y en el artículo 4º del proyecto. Pero, en realidad, en la forma en que está citada se excluye deliberadamente la intervención de las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva. Además, en esta Cámara hemos hablado mucho desde hace cuatro años sobre que hay que combatir al terrorismo por medio de la ley y que la Nación no puede recurrir al terrorismo de Estado.

Hemos hablado de que hay que utilizar la ley; pero si hoy aparecen brotes terroristas, ¿con qué ley los vamos a combatir? ¿Con el Código Penal y el Código de Procedimientos para tiempos de paz? ¿Vamos a tratar de que los jueces emitan las órdenes de allanamiento de tal manera que las autoridades actuantes puedan ir con un abogado al lado a un departamento donde se halla una célula subversiva, para proceder con el Código de Procedimientos para tiempos de paz? Realmente parece irreal que estemos razonando de este modo.

Si queremos reprimir legalmente, debemos estudiar con rapidez una verdadera ley antisubversiva, es decir, una normativa que enfoque el tema desde el ángulo real.

Es necesario combatir a los terroristas y asesinos, y para esto habrá que pensar en medidas especiales que serán ley en el momento en que las tengamos plasmadas en una norma legal; pero mientras no sea así habrá que improvisar, tal como se hizo en la última oportunidad en perjuicio de toda la Nación Argentina.

El texto del proyecto está redactado así para evitar un peligro: el avance de las fuerzas armadas contra la sociedad civil. Pero hoy en día éste no es el peligro. La sociedad argentina —incluyendo a los militares— parece haber comprendido que el método de los golpes de Estado está definitivamente terminado en el país. El verdadero peligro está en el rebrote subversivo, y el proyecto nada dice de esto.

Estos tres puntos que he señalado son fundamentales. En el proyecto hay muchos otros que quisiera destacar, pero a esta altura del debate, cuando ya hablaron varios oradores y se han dicho muchas cosas, no tiene sentido que me extienda sobre ellos. De todas maneras, sí quiero destacar que esos errores de enfoque de los que adolece el proyecto que consideramos —que

en algunos casos son fundamentales— se deben a que sus redactores no han sabido o no han podido sustraerse a la influencia de los tres factores condicionantes que cité anteriormente, es decir, los prejuicios, los resentimientos y la superficialidad en el tratamiento de problemas orgánicos que son sumamente complejos. Por lo tanto, este proyecto debería ser revisado, y a esto me referiré enseguida.

Sin embargo, a esta altura quiero volver sobre un punto expuesto con anterioridad, que considero fundamental. Ni esta futura ley de defensa ni ninguna otra del mismo cuño podrán resolver por sí sola el doble problema de poner fin a la intranquilidad existente en el seno de las fuerzas armadas y asegurar verdaderamente la defensa del país. La solución de este doble problema depende inexorablemente del restablecimiento pleno de la moral y del espíritu militares en los cuadros de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y del reconocimiento del papel positivo que desempeñaron en la lucha antisubversiva. Ambos aspectos están íntimamente interrelacionados, ya que la moral y el espíritu militares no se recuperarán mientras no exista ese reconocimiento; y mientras no se produzca esa recuperación, el país no tendrá verdaderas fuerzas armadas. Contará, tal vez, con organismos militares más o menos bien estructurados, pero no tendrá ejército, marina ni aeronáutica que respondan al concepto de verdaderas fuerzas armadas.

Ni dictando una ley de defensa, ni aumentando el sueldo de los militares, ni reorganizando las unidades, ni dotándolas de medios modernos de combate, ni consolidando las industrias militares, ni atendiendo a otras urgencias orgánicas y materiales de ese tipo se resolverá el problema de contar con fuerzas armadas eficientes y aptas para el combate. Para ello es indispensable que tengan alma, es decir, que sus cuadros estén imbuidos del más alto espíritu militar, de la más elevada moral y del más completo espíritu de sacrificio. De lo contrario, no podrán cumplir con su misión. Recuérdese el famoso caso reciente del Irán, donde el ejército del sha —uno de los mejor equipados del mundo— se deshizo frente a fanáticos militarmente desorganizados pero imbuidos de una mística, mientras que ese ejército se encontraba desmoralizado y sin saber por qué combatía. Debemos comprender definitivamente que el uniforme no hace al soldado.

Por medio de la sanción del proyecto que consideramos estamos tratando de proveer a las fuerzas armadas de un buen uniforme y de una

adecuada carcaza, pero no estamos atendiendo al problema fundamental de devolverles su alma. Fue por estas razones que, hace algunas horas, solicité que el proyecto fuera girado a la comisión pertinente, con el resultado conocido, por lo cual no voy a insistir en esa moción porque sería un poco cargoso volver sobre el tema.

En caso de que lleguemos a la instancia de su votación, obviamente nos vamos a pronunciar en contra de este proyecto de ley, pero no porque consideremos innecesaria una ley de defensa —por cierto, una buena ley de defensa es necesaria—, sino porque este proyecto no cumple con ese requisito y porque además es insuficiente, ya que no contempla los otros problemas espirituales a que me he referido ni esos conceptos que pueden parecer extraños para quienes no conocen el significado de la moral militar y del espíritu del sacrificio del hombre de armas.

Mientras estas cosas no se tengan en cuenta, será muy difícil que podamos lograr esa reconciliación de la que tanto se habla entre la sociedad civil y la militar, aunque ello no sea más que otro planteo retórico del problema. Lo que tenemos que hacer es lograr verdaderas fuerzas armadas que actúen dentro de la Constitución, y para ello debemos hacer bastante más de lo que estamos haciendo en este momento al debatir este proyecto de ley de defensa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: el partido al que pertenezco no participó en la mesa del consenso, que a nuestro juicio significó un consenso parlamentario, porque en ella estaban representados los partidos presentes en el Congreso de la Nación. Esa mesa del consenso también implica o podría importar un avance más del Poder Ejecutivo sobre el propio Parlamento. He visto que en ella se ha tratado este proyecto de ley y que incluso se han discutido sus artículos e incisos.

Sr. Tomasella Cima. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con permiso de la Presidencia?

Sra. Guzmán. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Tomasella Cima. — Señor presidente: quiero aclarar a la señora diputada en uso de la palabra que si bien es cierto que este proyecto fue remitido a la mesa del consenso, ciertamente no se discutió allí su articulado. Lo

que se convino fue emitir una declaración sobre la necesidad de la ley, pero sin entrar a discutir sus términos, estableciéndose además con claridad y precisión un principio, a saber, la subordinación de las fuerzas armadas al poder político de la Nación. He querido aclarar expresamente esta circunstancia porque en las reuniones de la mesa del consenso en las que hemos participado no se discutió este proyecto artículo por artículo, ni se prestó consentimiento para este texto en particular. El proyecto estaba previamente redactado y por lo menos los partidos que formamos el interbloques no fuimos partícipes de dicha redacción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Agradezco al señor diputado esa información, pero quiero decir que la suministrada por los diarios fue totalmente distinta, e incluso hablaba de la reforma de incisos. Pero de cualquier manera existe algo que ya conocemos: esta mala práctica parlamentaria —que desacredita al Congreso Nacional y con ello a todos y cada uno de sus miembros— de discutir proyectos fundamentales para la Nación sin contar con el análisis previo y meditado de las comisiones correspondientes.

Nótese que la política de defensa nacional debe ser establecida por el presidente de la Nación y que un tema tan importante y de raigambre constitucional no ha sido ni siquiera tratado en las comisiones. Así es que nos encontramos con un proyecto, como se dice ahora, consensuado, de un origen paraparlamentario, como fue también de idéntico cuño el de coparticipación federal impositiva. Hace pocos días se votó prácticamente a libro cerrado ese instrumento fundamental para las provincias y se eliminó el Fondo de Desarrollo Regional con el objeto de dar una mayor porción a la provincia de Buenos Aires.

Los parlamentarios recibimos de esta manera los proyectos ya definidos. Por ello, celebro que todavía el presidente de la bancada radical no haya pedido el cierre del debate y voy a aprovechar esta circunstancia para hacer algunas consideraciones.

Creo que este proyecto, resultado de todas esas prácticas, es antiguo en sus conceptos. Diría que parece un proyecto de ley de defensa propio del peronismo de la década del 40. Esta iniciativa es incoherente. Las expresiones que emplea requieren desde el punto de vista técnico una serie de aclaraciones.

Así, por ejemplo, en los fundamentos se establece una clara distinción entre defensa y se-

guridad nacional, afirmándose allí que se implementa un sistema muy novedoso y orgánico, no obstante lo cual nos encontramos con que grandes frases grandilocuentes no hacen sino teñir toda la estructura de defensa de aspectos exclusivamente militares, sin repararse que en la defensa lo militar es únicamente un matiz.

Por esa razón, este proyecto de ley está imbuido de viejos conceptos muy desactualizados. La militarización del concepto de defensa queda evidenciada a través de la estructura que se propone: en el sistema se asignan al ministro de Defensa —según el inciso d) del artículo 9º— funciones que lo exceden ampliamente.

En la actualidad, el ministro de Defensa no es más el superministro del gobierno, como lo era en la época de Perón el general Sosa Molina. Hoy, la defensa ha cambiado en su concepto general. En este sentido, coincido con el ex ministro Roque Carranza cuando afirmaba que la defensa es algo más amplio, que involucra los campos internacional, económico, psicosocial, científico-técnico y, por supuesto, militar. Por lo tanto, corresponde dar intervención a los otros ministerios.

No se introducen en este proyecto los actuales conceptos de defensa, y los defectos se observan fácilmente porque se mezclan los niveles de decisión. El sistema decisonal debe estar instrumentado. El proyecto nacional se desdobra, primero, en la definición de los objetivos; luego pasa a la estrategia general y posteriormente a las estrategias sectoriales —interna, externa, psicosocial, económica, etcétera—. Tendrían que estar bien diferenciados estos tres niveles: el de decisión política —que fija los objetivos estrictamente políticos—, el estratégico —que adecua los medios a los fines— y el táctico —que aplica los medios en forma concreta. Así, el nivel de decisión política corresponde exclusivamente al presidente de la Nación, como también el de la estrategia global. Una ley de defensa tiene que diseñar la estructura de la defensa y no un modelo político, porque este último tiene que ser definido por el Poder Ejecutivo. En este sentido, tenemos el caso de países como Francia, que actualmente está redefiniendo su modelo político a raíz del tema de los misiles y demás, pero no modifica su estructura de defensa. Por ello, las leyes de defensa, al definir la estructura, deben tener cuidado en guardar la estabilidad en el tiempo.

En el artículo 7º del proyecto de ley en tratamiento aparece un verdadero absurdo por el cual la estructura del sistema de defensa nacional es la que define políticas de defensa, y así se

militariza la defensa. La política de defensa corresponde al Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, no hay que colocar el carro delante del caballo: la ley es simplemente una herramienta, un instrumento que no puede condicionar a la política; si no, estaríamos frente al grave problema de que la estrategia manejaría la política y la táctica a la estrategia, a raíz de la mezcla de los niveles políticos y estratégicos y en razón de los conceptos de estructura de defensa y de política de defensa.

Esta esquematización arcaica tampoco alude claramente al concepto de crisis. Lo único que se observa es que el artículo 10 del proyecto hace referencia al Comité de Crisis, que en el artículo 19 parece confundirse con el Comité de Guerra, que en realidad no es otra cosa que el viejo comité militar. Además, aquel comité está mal integrado; las crisis no son exclusivamente militares sino totalizadoras.

Por ejemplo, ¿cuál fue el gabinete de crisis del presidente Kennedy en oportunidad de la crisis de los misiles? Estuvo compuesto por los "hombres del presidente", sus asesores directos en esos temas, las personas especializadas y de confianza del presidente. Esos son los gabinetes de crisis.

En este proyecto deberíamos hablar más de crisis que de guerra, pero estamos hablando más de guerra. En la República Argentina lo que más tendremos son crisis, que además pueden lesionar intereses vitales de la Nación y harán necesaria una presencia militar. ¿Qué ocurriría en el supuesto caso de que se produjera un enfrentamiento en Laguna del Desierto? ¿Qué sucedería si Gran Bretaña provoca el hundimiento de un pesquero argentino? En consecuencia, este aspecto del proyecto tiende más a contentar a los sectores que piensan con la mentalidad de hace cuarenta años que a quienes comprenden lo que significa la defensa en los tiempos modernos.

El punto de partida también es equívoco, ya que en el artículo 3º del proyecto de ley el concepto de defensa está mal definido. La defensa nacional es el conjunto de acciones destinadas a fijar las políticas y estrategias especializadas para proteger los intereses vitales de la Nación; sin embargo, la iniciativa en consideración no hace referencia alguna a que éstos pueden verse afectados por agresiones tanto internas como externas.

La defensa debe contemplar todas las hipótesis, porque si no caemos en distorsiones que luego son difíciles de superar. Las doctrinas modernas en materia de estrategia aluden a una mayor integración e interrelación de los conflictos exter-

nos e internos. Quiero decir que esta apreciación es independiente de la decisión que se tome con respecto a si las fuerzas armadas deben o no participar en los conflictos internos. De lo que no cabe duda es de que cada vez existe una mayor interrelación entre ambos tipos de conflictos.

Si la política de defensa nacional es omnicompreensiva, ocurrirá que en definitiva un mismo asunto estará regido por dos leyes: por un lado, la ley de defensa nacional y, por el otro, la ley de seguridad interior. Anuncio y aseguro que se darán de patadas.

Todos aspiramos a alcanzar la paz. Pero este proyecto de ley es confuso. Cuando el nivel político recibe una situación no estructurada —como es la crisis—, en la medida en que aquella continúe sin estructurarse, la crisis se profundizará. Entonces, el nivel político fija los objetivos y entrega al nivel estratégico una situación semiestructurada, a fin de que adecue los medios a los objetivos, y recién posteriormente se pasa al nivel de la estructuración, que es lo que permite el planeamiento.

Este proyecto de ley en todo momento invoca el planeamiento, confundiendo los niveles de decisión. Así, por ejemplo, en el artículo 8º y concordantes de la iniciativa en consideración se confunden objetivos y decisiones políticas de defensa con lo estratégico y lo táctico. Dicha confusión queda muy clara en el artículo 7º, donde se dice que el funcionamiento ordenado del sistema de defensa —es decir, lo estructural—, que según la ley tiene una fuerte impronta militar, estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así como su permanente actualización.

Tal es el grado de confusión entre los diversos niveles de decisiones. La política de defensa nacional es prerrogativa del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no es delegable. Sin embargo, ya hemos visto lo que especifica en el artículo 7º. Corresponde al presidente —y para ello tiene que asesorarse con todo su gabinete— fijar el modelo que vamos a tener; si se basará en el unilateralismo o en el bilateralismo; si habrá amigos o enemigos; cuál será el tratamiento de los conflictos latentes, etcétera. Esta es la política de defensa. Pero naturalmente que esto excede al sistema que se crea por medio de este proyecto de ley, ya que solamente podría abocarse a los aspectos estratégicos, particulares y tácticos.

Estas confusiones se prolongan a lo largo de muchos artículos. Se habla de zonas militares y territorios. No sabemos cuál será la ley que rija

en estos casos. ¿Qué pasará en el teatro de operaciones? Tipificado el mismo delito, ¿quién intervendrá: la justicia militar o la civil? Reitero que el texto de este proyecto es confuso y entiendo que deberá ser aclarado en los aspectos referidos, ya que los problemas que se involucran pueden ser de extrema delicadeza.

¿Qué ocurre cuando el enfrentamiento tiene una división geográfica? Trotsky, que algo sabía de estas cosas, decía que cuando el enfrentamiento tiene una división geográfica queda planteada la guerra civil. Ahora bien, ¿eso es defensa nacional? Se ve aquí la necesidad de utilización de las fuerzas armadas porque hay una suerte de situación verdaderamente compleja, tal como ocurría en la aplicación de los métodos para combatir la subversión.

Cuando Alan García tiene que combatir a Sendero Luminoso recurre a sus fuerzas armadas; lo mismo le ocurre a Colombia cuando tiene que luchar contra el MI-19, y otro tanto a los venezolanos. Es acertado que esto quede dentro de las facultades constitucionales del presidente de la Nación, pero debemos decir que hay situaciones que no sabemos cómo van a manejarse.

Días atrás las agencias noticiosas decían que en el Uruguay los tupamaros no descartan el uso de la violencia armada. Tampoco la descartan los cabecillas del ERP, que aún se mantienen muy activos en Nicaragua y en otras naciones del Cono Sur. Así, por ejemplo, quien era en la Argentina el tercer mando dentro de la organización ERP, Gorriarán Merlo, actual jefe de policía en Managua, reivindica la metodología violenta en su libro *Democracia y Liberación*, recientemente expuesto en la Feria del Libro. ¿Qué pasa si se actúa en el país? ¿Cómo determinar si se trata de una agresión externa o interna en el supuesto de acciones que orgánicamente se encuentran planificadas en el extranjero? De acuerdo con la normativa en debate no sabremos cómo responder a este interrogante.

Otro aspecto es el relacionado con la inteligencia militar, citada en el artículo 15, que dice que no se debe hacer inteligencia en el marco interno. En este sentido, el gobierno dijo que iba a prohibirla hace tiempo; no creo que lo haya logrado. Actualmente los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas trabajan en el marco interno y es posible que incluso lo sigan haciendo después de aprobada esta iniciativa.

¿Acaso no se hace inteligencia interna respecto de las minorías chilenas y de las minorías paraguayas? Si no se hace inteligencia, ¿cómo

se va a hacer contrainteligencia? Planteemos un ejemplo. Se determina que en la base aérea de El Chamental hay espías. En ese caso deberá intervenir la autoridad militar y luego dar cuenta a la autoridad policial, conforme a lo que indica este oscuro cuadro anexo.

Asimismo, creo que una política de defensa debe limitar al máximo el azar y la reunión de información, lo que es importante.

El ingeniero Roque Carranza, en un artículo titulado "Doctrina de defensa y modernización de todas nuestras estructuras", habló acerca de la necesidad de tener hipótesis de conflicto, y llegó a plantear incluso que debíamos estudiar qué pasaría si ante la situación de renovación del Tratado Antártico la región se convirtiera en un lugar de conflicto entre las grandes potencias. Decía al respecto que la probabilidad era baja; sin embargo, pienso que a pesar de ello debemos estar intelectualmente prevenidos y por lo menos haber analizado el tema. Tenemos que plantear hipótesis de esa naturaleza; cuáles son las líneas de acción política que debe seguir la Argentina y qué responsabilidades específicas se crean desde el punto de vista político.

Otro aspecto de esta norma es que parece sostener que los únicos sujetos estratégicos son los países. En realidad, ese concepto está pasado de moda, pues si consultamos a Liddel Hart, Beaufre o Hartman, comprenderemos que luego de la Segunda Guerra Mundial hay otros sujetos estratégicos, como por ejemplo los organismos internacionales, las empresas transnacionales, el narcotráfico por medio de empresas, ligado incluso a veces al terrorismo, y también nuestros acreedores. De tal modo, entiendo que implica equivocarse el camino pretender delinear la estructura fundamental de esta norma con un criterio militar.

No quiero dejar de señalar que el proyecto de ley de seguridad interior que se dice se elaborará deberíamos haberlo considerado en este mismo recinto junto con este proyecto de ley de defensa. Este tema de las leyes de seguridad nos trae malos recuerdos, como aquel que en el gobierno peronista se conoció como A.O.P.: alteración del orden público.

Además, hay omisiones graves e importantes. El proyecto expresa que los jefes de los estados mayores de cada una de las fuerzas armadas ejercerán el gobierno y la administración de las fuerzas, pero omite algo esencial: el comando. Lo que ellos ejercen es el comando, el gobierno y la administración de las fuerzas. Por otra parte, el gobierno es una parte de la conducción. En-

tiendo que este es un vacío que es necesario re-
ver, porque posteriormente puede dar origen a
problemas disciplinarios.

De acuerdo con el artículo 24 del proyecto en
consideración, los jefes de los estados mayores de
cada fuerza dirigirán la preparación para la
guerra de los elementos operacionales de las res-
pectivas fuerzas y su apoyo logístico. Al respecto,
deseamos saber qué ocurre con los elementos
que no son comandos operacionales, pues en
cada una de las fuerzas armadas existen compo-
nentes que no son comandos operacionales y sin
embargo forman parte de la institución. Por
ejemplo, ¿qué pasa con los institutos militares?
Me refiero a los de investigación científica y
técnica, a los de reclutamiento, al Colegio Mili-
tar y sus equivalentes, a la Escuela General Le-
mos y sus equivalentes, a las escuelas de gue-
rra, a las escuelas técnicas, a las escuelas de
inteligencia y a las estructuras de obra social, co-
mo el IOSE y equivalentes. Nada de esto queda
en claro. Repito que no se trata de comandos
operacionales, y por lo tanto, no sabemos qué
ocurre en este aspecto.

En el capítulo que se refiere al servicio de
defensa nacional se establece que éste compren-
de el servicio militar y el servicio civil de defen-
sa. ¿Entonces, al estar incluido en este capítulo,
hay que interpretar que el servicio civil de de-
fensa estará bajo estado militar?

En lo relativo a organización territorial y mo-
vilización en caso de guerra y conflicto armado,
el presidente —esto es obvio— es el que esta-
blece cuáles serán los teatros de operaciones.
Ahora bien, ¿cuáles son las atribuciones jurídi-
cas del comandante del teatro de operaciones
que designe el presidente? Hasta ahora eran
muy amplias, casi podríamos decir que eran ab-
solutas; incluso dictaba bandos. Por ello es que
se debe tender a que el teatro de operaciones
sea lo más circunscripto que resulte posible.

En el teatro de operaciones rige el Código de
Justicia Militar. En esa zona de combate están
las tropas y las bocas de fuego. Aquí se dice que
en caso de adoptarse la medida de declarar tea-
tro de operaciones a una determinada área geo-
gráfica, el Poder Judicial mantendrá la plenitud
de sus atribuciones. Ante esto pregunto: ¿y la
justicia militar? ¿Y si hay espionaje? Todo esto
queda poco claro.

En cuanto a la zona militar, cabe la pregunta
de cuál será su encuadramiento jurídico.

Por su parte, la Prefectura y la Gendarmería
Nacional, como fuerzas de seguridad, además del
control y la vigilancia de las fronteras deben
llevar a cabo la protección de dichas fronteras y

eso es algo que se omite en este proyecto. ¿Ha-
brá protección de fronteras con empleo militar?
Debe estar prevista y estudiada la posibilidad de
un conflicto con Chile y la necesidad de prote-
ger 5 mil kilómetros de fronteras. Esa es una
tarea que deben desarrollar las fuerzas armadas
teniendo bajo su subordinación a las fuerzas de
seguridad.

Por otra parte, este proyecto prevé que el Mi-
nisterio de Defensa debe coordinar los planes
de movilización, pero no contempla la participa-
ción de los restantes ministerios. La elaboración
de los planes de movilización no puede quedar
bajo la órbita exclusiva del Ministerio de De-
fensa.

Con la venia de la Presidencia, deseo pregun-
tar al señor miembro informante si el Comité de
Crisis y el Comité de Guerra son uno solo y
cuáles son sus funciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — No hay miembro
informante porque la Cámara no está conside-
rando un despacho de comisión, señora dipu-
tada.

Sra. Guzmán. — ¿A quién debo formular la
pregunta, entonces?

Sr. Presidente (Pugliese). — Se está conside-
rando un proyecto de ley que tiene anteproyecto
de despacho de una comisión, pero no dictamen
de todas las comisiones a las que fue girado.

Sra. Guzmán. — Pienso que la persona más
adecuada para contestar esto sería el presidente
de la Comisión de Defensa Nacional.

No entraré ahora a la discusión en particular,
cosa que dejaré para después. Sólo quiero decir
que el cuadro anexo que de acuerdo con el ar-
tículo 13 está incorporado al proyecto, con su
originalidad introduce una serie de conceptos
que el texto de la normativa no aclara, además
de una cantidad de situaciones que no están con-
templadas en la iniciativa que estamos tratando.

Tampoco tenemos un mensaje, de manera que,
doctrinalmente, ¿qué sabemos del alerta míni-
mo, medio o grave? ¿Quién determina el grado
de alerta? ¿Qué entendemos por agresión inter-
na? ¿Qué es agresión militar, en la cual pueden
actuar las fuerzas armadas?

Todo esto crea situaciones que yo no puedo
encuadrar en parte alguna. ¿Se podría decir que
una agresión militar no es la de elementos terro-
ristas, porque si no sería reconocerles status mi-
litar? ¿Es agresión militar el levantamiento del
oficial Rico? No; eso es sublevación y se aplican
las leyes civiles y las correspondientes al Código
de Justicia Militar. ¿Qué es la agresión militar?
¿Qué dice este proyecto? Este cuadro, lejos de
aclarar los conceptos, los empasta.

Por las razones expuestas, considero que lo mejor sería tratar el proyecto en comisión. Si se hubiera hecho un análisis meditado sobre el mismo —que concierne a una de las instituciones permanentes del país—, sin duda el beneficio habría sido mayor.

Es necesario efectuar un estudio profundo sobre uno de los aspectos fundamentales que a veces determinan el ser o el no ser de una Nación, cual es la defensa nacional, que aquí vemos que ha sido tratada con ligereza y con términos que ni siquiera los propios redactores podrían definir.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Nacul. — Señor presidente: el tema de la ley de defensa, que es sustancial, como bien han manifestado otros señores diputados, sobre todo en el día de ayer, se encuadra dentro de los grandes tópicos concernientes a la definición del tipo de país que queremos y tiene que ver profundamente con la idea de discutir —aunque sea parcialmente— aquellos aspectos que deben integrar en forma definitiva una concepción clara sobre un proyecto de Nación que dé albergue, calor y posibilidades de vida digna, independiente y soberana a todos los argentinos. Ese proyecto nacional debe ser un esquema claro, con objetivos precisos y a la vez queridos y definidos por el conjunto del pueblo.

Tengo entendido que el proyecto que hoy analizamos es producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias del país. Por eso, cuando ayer se habló peyorativamente de connubios o matrimonios por parte de las minorías circunstanciales, simplemente se estaba manifestando en el recinto el desprecio más absoluto y burdo hacia la opinión soberana del pueblo, que, expresada en las elecciones, determinó la conformación numérica que hoy tiene esta Cámara y que responde exclusivamente a la decisión popular.

No se puede hablar de pueblo por un lado y acusar a las minorías por el otro, cuando es la voluntad popular la que decide quiénes son las mayorías nacionales y populares que tienen cabida en el sentimiento y en la conciencia del pueblo de la Nación. Salvo que quienes hablan de mayorías, siendo ellos mismos una ridícula minoría política en términos numéricos, aunque profundamente respetable dentro de la convivencia democrática, conviertan las minorías en mayorías simplemente en virtud de la calificación del voto que ellos pretenden esgrimir a su favor.

Para nosotros, el concepto de mayoría es absolutamente cristalino, así como la decisión y el

consenso expresados soberanamente por el pueblo de la Nación en las urnas. Por ello, celebro que comencemos a avanzar en función de entendernos cada vez más entre los argentinos respecto de temas estratégicos como el de la defensa nacional.

Hubiera querido, no obstante, que todo esto se hubiese integrado en una discusión global sobre el proyecto de Nación en lugar de sectorizar o parcializar ese debate. Pero debo reconocer y admitir que celebro este hecho, porque demuestra la posibilidad de acordar entre los grandes sectores que representan a las mayorías argentinas el camino que queremos seguir en determinadas áreas fundamentales para el destino de la Nación. Creo que el Estado es una maquinaria que funciona dentro de la Nación y que sólo puede existir en la medida en que esté a su servicio. Las fuerzas armadas, con el dispositivo que nosotros concibamos y establezcamos, como integrantes del concepto de defensa nacional, sólo podrán ser visualizadas en la medida en que también se integren a un criterio global de la nacionalidad.

Comparto los juicios expresados por algunos señores diputados en el día de ayer, cuando se habló de que existen instituciones fundamentales, niveles y valores fundacionales de la Nación. Pero no por ello podemos consentir que hoy se utilice el concepto de defensa nacional para pretender que nosotros estamos coartando las posibilidades de las fuerzas armadas por la simple razón de que no coincidimos acerca de ese concepto.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alberto Duhalde.

Sr. Nacul. — El justicialismo mantuvo permanentemente una política para con las fuerzas armadas, pero no hizo política con los militares. Nosotros definimos un proyecto de país en el que integramos al conjunto de la comunidad nacional, abarcando todos los sectores que la expresan, entre ellos los militares. Como lo expresó claramente el general Perón en 1944, hemos concebido el concepto de defensa nacional como el de guerra total o de la Nación en armas. Este es un concepto profundamente superador de cualquier otro esquema restringido que se pretenda aplicar, tanto para uso del poder político como para uso de los ejércitos. Este proyecto de ley defiende en sustancia ese concepto de la Nación en armas que se visualiza y se ejemplifica con un arco extendido al máximo de lo posible y en el que la punta de

su flecha, ya sea de metal o de piedra, está constituida por las fuerzas armadas, y el resto del arco representa al conjunto de la Nación dando impulso, fuerza y dirección y marcando el objetivo que se procura conquistar.

Más allá de apreciaciones particulares sobre el contenido de este proyecto, quiero resaltar su profunda virtud de contemplar la participación del conjunto de la comunidad al servicio de la defensa nacional. Junto a este criterio el justicialismo enarbola otra bandera esencial que entiendo debe compartir la mayoría de los argentinos: propender a la unión nacional. No hay defensa nacional sin unión nacional; no habrá unión nacional mientras cada uno de los sectores pretenda pasar por encima del otro.

El proyecto coloca a las fuerzas armadas en el lugar donde deben estar y también ubica al conjunto de la comunidad en el contexto de la toma de decisiones estratégicas, fundamentalmente a través de las instituciones de la República. Porque es en el pueblo donde se debe decidir la estrategia y es en el pueblo, desde el cual mana el poder y se construye el Estado, donde debe estar la posibilidad de tomar las decisiones estratégicas a través de sus representantes legítimos y legales. Aquí nadie está negando la participación de las fuerzas armadas en aquellos aspectos técnicos o estrictamente militares que les competen. Nada más equivocado. Siempre hemos querido la participación de todos los sectores. Sin embargo, hoy desde el liberalismo se pretende hacernos aparecer en la postura de querer marginar o despreciar el rol preponderante que han tenido las fuerzas armadas en el desarrollo de la Nación. Resulta que siempre el liberalismo, criticando al justicialismo, ha confundido insidiosamente el principio de autoridad con el autoritarismo; ha venido confundiendo las fuerzas armadas con el militarismo; ha venido confundiendo la profesionalidad castrense con la indiferencia política, la defensa del orden con la represión; pero resulta que en forma simultánea y paralela los liberales siempre han sido muy proclives a ceder ante la intimidación militar. Quiero expresar esto con claridad porque muchas voces, y sobre todo ahora, intentan confundir a la opinión pública.

Considero que los principales logros de la Nación han sido conseguidos cuando hubo unidad entre el pueblo y las fuerzas armadas. Las grietas en esta unidad han representado históricamente los peores fracasos y las mayores frustraciones del pueblo argentino. Algún diputado podrá preguntar —ayer lo escuché— qué tiene que ver las fuerzas armadas con la defensa,

o por qué se está hablando del pueblo y no de los ciudadanos, o por qué se está confundiendo este concepto con tal otro. Lo cierto es que no puede haber defensa nacional sin fuerzas armadas. Pero lo que este proyecto establece básicamente es que no puede haber defensa nacional sin un pueblo incorporado a la búsqueda de este objetivo y sin fuerzas armadas decididas a integrarse en un concepto global de desarrollo de nuestra patria.

Con respecto a la crítica de que solamente se está considerando a las agresiones externas al abordarse el tema de la defensa nacional, hay una situación clara. No podemos negar la influencia nefasta que tuvo en este país la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Ningún argentino bien nacido podría hacerlo, y mucho menos los que hoy han llegado al Parlamento gozando de los beneficios de la democracia, cuando hasta hace poco eran los carceleros del pueblo de la Nación. Por eso, cuando se trata de reivindicar el tema de la lucha antisubversiva —en cuanto a que los argentinos o los justicialistas no estamos de acuerdo con alguno de sus aspectos, porque alguien mencionó en el día de ayer que negar la doctrina de la seguridad nacional es negar los triunfos del ejército contra la subversión—, asumo la responsabilidad que en su momento tomó el gobierno justicialista contra la agresión interna.

En todos los pueblos de América latina la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional no tuvo otros objetivos que sojuzgar y someter a esos pueblos y convertir a nuestras queridas fuerzas armadas no en brazos ejecutores y realizadores de la seguridad nacional, sino en gendarmes de nuestro pueblo, en espadas sin cabeza, como en su momento sucedió con Lavalle cuando fusiló a Dorrego. Se convirtió a nuestras fuerzas armadas en brazos ejecutores no de la liberación de nuestra patria, sino de la doctrina de la seguridad nacional, a través de esta nueva forma de neocolonialismo que nos sumió en terribles e ilegítimas deudas externas que hoy someten a nuestras naciones. Y esto se logró acallando a los pueblos mediante la aplicación fratricida que las fuerzas armadas hicieron de la doctrina de la seguridad nacional.

Estos son los resultados que hoy tenemos a la vista. Si alguien tiene críticas que formular por la exclusión del tema interno, deberá proceder con honestidad y reconocer que los resultados obtenidos con la incorporación de este aspecto no fueron otros que el sometimiento del pueblo por el ejercicio de la fuerza.

Es cierto que con una ley no se evita un golpe de Estado ni que sectores golpistas pretendan

nuevamente —aun sabiéndose minoritarios— acceder al gobierno de la Nación. Pero no es menos cierto que como argentinos debemos afrontar esta cuestión con claridad y que esta búsqueda de consenso mayoritario es la única base sólida para evitar trastornos en nuestro sistema institucional. Esto es verdad tanto a nivel militar, como civil o religioso.

Aquí subsisten dos Argentinas: una real, que quiere ser libre, justa y soberana, y otra que quiere continuar dentro del marco del neocolonialismo. De esta fractura son tan responsables los militares como los políticos, los industriales, los religiosos, los profesionales y cualquier otro sector de la sociedad, situación que con el apoyo y el consenso de todo el pueblo debemos ir superando.

Cuando aquí se cuestiona si una ley sirve o no, hay que pensar —si la dirigencia política actúa con honestidad— si se está de acuerdo en respetar el rumbo que la mayoría del pueblo argentino quiere para sí. Si se logra triunfar en esta batalla interior, estaremos entonces construyendo un futuro sólido y el modelo de país que todos anhelamos.

Ayer se cometió la herejía de analizar en forma desconectada frases del general Perón y de otros prohombres que, como bien manifestó el diputado Toma, dejaron ya de pertenecer exclusivamente a un movimiento o partido político, por cuanto sus enseñanzas y prédicas han quedado inscriptas en el conjunto de la conciencia nacional. Se ha cometido un gravísimo error que no es posible aceptar y que marca el intento deshonesto de querer seguir parcializando la opinión y usar sin ningún disimulo el contenido y la valoración de nuestros propios hombres de extracción nacional y popular.

El general Perón siempre concibió las fuerzas armadas ligadas a nuestro pueblo y cumpliendo con su función y deber. Pero por sobre todas las cosas, las concibió en una patria liberada, con justicia social, con responsabilidad y participación y en democracia, sin desbordes sectoriales. Perón siempre concibió las fuerzas armadas integradas a ese pueblo, que realmente fue el vencedor de los extremismos en este país.

Nadie puede atreverse a manifestar que fueron sólo los ejércitos los que acallaron a los subversivos en nuestra patria; lo hicieron los argentinos, con una conciencia clara y una concepción de sociedad pluralista. Esa conciencia fue cimentada y consolidada con prédicas de partidos y movimientos, como el justicialista, que supieron enseñar los valores con los que se defiende la patria, advirtiendo sobre los disvalores con los que se entrega la Nación.

Por otro lado, no queremos que se hable de profesionalismo porque esto es una mentira, como también lo es hablar de que cada uno vaya a entregarse a la tarea que le corresponde como sector. Esto es una mentira porque en la patria no existe sector alguno despolitizado.

Lo que sí pretendemos es que las fuerzas armadas tengan profesionalismo en cuanto a su eficiencia en las acciones que directamente les competen, además de estar integradas a las cuestiones que obedecen a un concepto integral de defensa. No quiero fuerzas armadas que hayan sido ejecutoras de la doctrina de la seguridad nacional; férreas y fuertes contra el pueblo, y complacientes con los dictados de los poderes externos. Por el contrario, queremos fuerzas armadas que estén en condiciones operativas de brindar un triunfo a los colores celeste y blanco de la sacrosanta bandera de la patria. No queremos fuerzas armadas que hayan estado en actitud de golpear a nuestro pueblo cada vez que éste intentó manifestarse en pro de la recuperación de su soberanía política y de la defensa de los intereses económicos y culturales de la Nación.

Hacia ese concepto debemos avanzar; este debe ser el principal aspecto a debatir. No debemos quedarnos con meros tecnicismos que sólo pretenden el retorno al viejo sistema de una ley de defensa que sirvió para someter a nuestro pueblo a los planes externos, además de estar sometido a la gendarmería en que se convirtieron las fuerzas armadas.

Más allá de los argumentos vertidos en este recinto, más allá de los sectores que hoy solicitan un rol protagónico de las fuerzas armadas en el tema de la defensa, quiero dejar sentada mi posición en el sentido de que se procure una mayor eficiencia por parte de ellas.

En la historia reciente de esta democracia se ha sabido votar ligeramente acerca de acuerdos que implicaban la entrega de parte de nuestra soberanía. De todas formas, queremos que nuestras fuerzas armadas se modernicen técnicamente y que mediante iniciativas que seguiremos sancionando para cerrar este circuito de la defensa nacional, tengan la posibilidad —como la tuvieron en algún momento— de contribuir al desarrollo de la Nación. Como Savio, Mosconi y San Martín, entre otros, también las fuerzas armadas deben tener la posibilidad de seguir sosteniendo un desarrollo creciente de la industria armamentista para un real crecimiento de la Nación. Esto lo decimos no por belicistas, ya que somos profundamente pacíficos; pero no hay que confundirse porque

no se trata de un pacifismo ingenuo que se pueda entender como pasividad.

La mejor forma de asegurar la paz es prepararnos para defendernos en conjunto con los pueblos hermanos de América latina, con los que debemos integrarnos a partir de lo ocurrido en Malvinas. Aquel hecho fue didáctico y aleccionador para quienes nunca quisieron saber quiénes eran los enemigos y quiénes los reales amigos de la Nación Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Tomasella Cima. — Señor presidente: en mi primera intervención en la Cámara de Diputados de la Nación voy a fijar la posición de los diputados del Partido Liberal con respecto al proyecto de ley que estamos considerando.

En ese sentido deseo retomar palabras que pronunciara el señor miembro informante en oportunidad de debatirse el paquete impositivo. Se decía que se inauguraba en el país un nuevo sistema que consistía en buscar consenso en el tratamiento de los diferentes temas. Entendemos que el diálogo es imprescindible porque somos personas civilizadas. Con esa línea de pensamiento y con nuestra mejor voluntad y buena intención, estuvimos presentes en la Mesa del Consenso convocada por el señor presidente de la República.

Lamentablemente hoy podemos decir que se ha fracasado, y lo ocurrido no ha pasado de ser un mero hecho político carente de contenido práctico positivo.

Entendemos que el diálogo es importante, pero en los tiempos que vivimos creemos que, tal como fue expresado en la Mesa del Consenso, no puede llegar al punto de significar la desnaturalización de las instituciones. Y esta situación está ocurriendo en el Parlamento nacional con motivo del tratamiento de proyectos fundamentales que se consideran fuera del Congreso, anulándose así uno de los pasos más importantes: la labor de las comisiones. En ellas se debe hacer el estudio profundo y a conciencia de los temas en debate, a fin de brindar al país los instrumentos legales que con acierto y sensatez regulen adecuadamente la materia que se trate.

Esto lo expreso porque de la desnaturalización de las instituciones es probable que nada bueno salga, y quien en definitiva habrá de pagar las consecuencias será el pueblo de la Nación Argentina.

Sobre el proyecto de ley que hoy consideramos se ha hablado mucho; por ello trataré

de ser objetivo y concreto. Ya habíamos afirmado que era necesaria la sanción de una ley de defensa, pero esa necesidad no implicaba un manejo urgente de la cuestión.

La ley de defensa nacional debe regular adecuadamente una importante materia para la vida de la República. Nosotros partimos del concepto de que las fuerzas armadas son una institución de la Nación, y como tales tienen funciones expresamente previstas en la Constitución Nacional y en las demás leyes. En ese sentido, afirmamos categóricamente que las fuerzas armadas deben estar sometidas irrestrictamente al poder constitucional, conforme a las prescripciones de nuestra Ley Fundamental. Creo que no debemos actuar con subjetivismos ni preconceptos para instrumentar una buena ley.

Consideramos que la defensa nacional es un concepto integral. De ninguna manera es privativa de las fuerzas armadas. Pensamos que todos los factores de poder deben converger en ella.

En una ley de defensa nacional debe quedar claramente establecido que las fuerzas armadas, como factor de poder, deben actuar tanto en época de paz como en tiempo de guerra, y deben hacerlo en forma solidaria y coordinada con la política de relaciones exteriores y la política interior, como instrumento esencial de la política de defensa.

La iniciativa que estamos considerando restringe la libertad de acción del presidente de la Nación en forma prejuiciosa y con desconocimiento de la realidad nacional. El Poder Ejecutivo puede y debe utilizar toda la fuerza necesaria para garantizar la paz y el progreso de la Nación.

Una ley de defensa nacional tiene que reflejar que las conducciones política y militar de la guerra deben estar estrechamente relacionadas, por cuanto el empleo del instrumento militar es un factor de poder que el gobierno nacional habrá de utilizar cuando los fines vitales de la Nación se encuentren en peligro.

El objetivo militar deberá posibilitar el alcance del objetivo político; de lo contrario, se transformaría en un tremendo error encarar una guerra.

Entrando en el análisis del texto del proyecto en cuestión observamos que en el artículo 2º se trata de dar una definición de lo que es defensa nacional. El artículo siguiente trata de explicar cómo se concreta esa defensa nacional. Con respecto al artículo 2º consideramos que es erróneo e incompleto el concepto de defensa nacional. Debe tenerse en cuenta que las agresiones no solamente pueden ser externas ni exclusiva-

mente militares, sino que existen siempre que se afecten intereses de la Nación, ya sea en el plano económico, diplomático o ideológico.

Por otra parte, únicamente se habla de agresión, y esta palabra define un hecho consumado. Consideramos que el artículo también debe incluir el término amenaza, que representa el peligro. Hoy en día la teoría moderna de la defensa nacional en el mundo está basada fundamentalmente —como lo señalaron algunos expositores en el día de ayer— en las previsiones, que permiten una debida reacción ante una amenaza.

Otro aspecto importante está plasmado en el artículo 4º al mencionarse que existe una diferencia fundamental entre la defensa nacional y la seguridad interior. Sin embargo, el artículo no señala cuál es esa diferencia fundamental, y no hay duda de que por desconocimiento se desjerarquizan y cargan de subjetividad conceptos que son de carácter universal y que han sido empleados en todos los tiempos.

Como ya lo señalé, es importante tener presente que el concepto de seguridad interior no está definido en el texto del proyecto de ley, aparentemente con el preconcepto de que la seguridad nacional es algo prohibido. En este punto deseo aclarar en forma expresa que no me estoy refiriendo en manera alguna a la teoría o a la doctrina de la tan mentada seguridad nacional sino a la seguridad de la Nación Argentina. En este sentido puedo afirmar que la seguridad nacional es una situación en la que la Nación dispone de la necesaria libertad de acción para lograr y preservar los objetivos que definen sus intereses vitales, siendo estos últimos los valores o los bienes que han sido seleccionados como tales por el gobierno nacional, por el poder político específicamente, para ser alcanzados o preservados a fin de garantizar la existencia de la Nación y el logro de sus fines.

En esa línea de pensamiento la defensa nacional no es otra cosa que el conjunto de medidas y procedimientos que el Estado adopta a efectos de lograr una adecuada situación de seguridad nacional. La defensa nacional es la causa de un efecto llamado seguridad nacional.

Por lo expuesto, es sencillo determinar que ambos conceptos están íntimamente relacionados entre sí, mientras que en el artículo 4º del proyecto se los trata de establecer como separados. Podemos entender y admitir que se consideren gradaciones o matices de un mismo tema, pero estos dos conceptos corresponden a una misma sustancia. De allí que al fijar esa dicotomía la norma quiebra el concepto integral de defensa

Ello redundaría en perjuicio de lo que debe entenderse por defensa nacional y del derecho de estructurar una norma razonable y adecuada para regular esta importante materia.

En el Título II, el artículo 7º expresa que el funcionamiento ordenado del sistema de defensa nacional estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así como a su permanente actualización. Nosotros consideramos que en primer término se deberá definir cuál es el sistema de defensa nacional para que empiece a funcionar desde el tiempo de paz, dado que la defensa nacional es permanente, dinámica, y requiere previsiones que no pueden ser suplidas por el esfuerzo y la voluntad coyuntural.

Este artículo encierra un grave error porque, como ya lo señaló hace unos instantes una señora diputada preopinante, el sistema de defensa nacional no puede orientar la política de defensa nacional sino que, a la inversa, primero hay que determinar la política de defensa nacional, y en base a ella establecer el sistema. Se debe tener en cuenta que un sistema, en primer lugar, sirve básicamente a un propósito bien acotado y definido; en segundo término, contribuye armónicamente a ese propósito de orden superior; y en tercer lugar, interactúa equilibradamente con los sistemas de órdenes equivalentes. Además, sus órganos actúan e interactúan con preciso grado de autonomía y es necesario destacar que deben preverse acciones, reacciones y control.

En el artículo 8º se establecen las finalidades del sistema de defensa nacional. En sus incisos —que llegan hasta el j)— se enuncian, entre otras, las de determinar hipótesis de conflicto, elaborar las hipótesis de guerra y formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda la Nación para el eventual conflicto bélico. Debemos señalar que ninguna de las mencionadas en ese artículo son finalidades, sino simplemente funciones o tareas. La finalidad del sistema de defensa nacional no puede ser otra más que la de crear una situación propicia para que el país pueda vivir y crecer en paz.

Por otra parte, creemos que la central de inteligencia —que el proyecto menciona pero no crea, sin especificar tampoco sus funciones o ámbitos de competencia— debe estar integrada dentro de la estructura del sistema de defensa nacional. Sin embargo, no aparece a pesar de ser mencionada en varios artículos.

Podríamos decir que el artículo 10 es abiertamente contradictorio con el 2º, en el que se trata de limitar la participación de las fuerzas

armadas a los conflictos de origen externo. En su primer párrafo el artículo 10 establece: "Compete al presidente de la Nación en su carácter de jefe supremo de la misma y comandante en jefe de las fuerzas armadas, la dirección de la defensa nacional y la conducción de las fuerzas armadas..." —subrayo esto último—"...en los términos establecidos por la Constitución Nacional". Y en el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución Nacional se estipula que el presidente de la Nación dispone de las fuerzas armadas conforme a las necesidades de la Nación, sin hacer distinciones entre seguridad exterior y seguridad interior.

Por otra parte, consideramos que el artículo 13 del proyecto directamente debe ser eliminado, ya que en él se establece el mecanismo de alerta. Este es un aspecto que no debe estar incluido en el proyecto de ley ya que se trata de un instrumento técnico de carácter reservado que no tiene que ser conocido por otros países. Asimismo, creemos que el asesoramiento de la conducción integral política de los conflictos de ninguna manera puede limitarse a este aspecto.

En el artículo 14 se habla de la composición del Consejo de Defensa Nacional. Este es un artículo que presenta en su redacción defectos formales que se advierten con una simple lectura. Además de su dudosa constitucionalidad, incorpora como miembros estables y permanentes del Consejo de Defensa Nacional a representantes del Poder Legislativo, lo cual nos lleva a pensar que está en contra del sistema de división de poderes.

De acuerdo con nuestra sistemática institucional, la conducción de la guerra y todo lo atinente a la materia de defensa nacional es privativo del Poder Ejecutivo. El Congreso tiene algunas atribuciones que están expresamente legisladas en nuestra Constitución.

Por otra parte, el proyecto alude, con respecto a la integración del Consejo de Defensa Nacional, a dos integrantes de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, uno por el bloque de la mayoría y otro por el de la primera minoría.

En el caso particular de la Cámara de Diputados, donde no hay ningún bloque que sea mayoría, ¿cuál será el representante por la mayoría? Acá todos somos minoría, con mayor o menor representatividad, pero minoría al fin.

Por otra parte, creemos que por el número de sus integrantes ese organismo es excesivamente burocrático y el proyecto comete el pecado de excluir de su composición estable al Mayor Conjunto, quien según

nuestro criterio debe integrarlo. Digo esto porque por sus conocimientos técnicos específicos habrá de servir en forma directa de asesor del Poder Ejecutivo, al que podrá transmitir una actualizada evaluación de la situación castrense, sobre todo en lo que se refiere a la problemática dentro del Consejo de Defensa Nacional.

Pensamos que el tema de los legisladores debe ser excluido del proyecto, dejando abierta la posibilidad de su asistencia, ya que el presidente de la República podrá convocar o invitar a otras personas que por sus conocimientos o cualidades puedan servir en algún momento para contribuir con su criterio o sapiencia a tomar decisiones o traer luz sobre determinados puntos. Esto puede admitirse, pero creemos que de ninguna manera deben figurar los legisladores como miembros estables del Consejo de Defensa Nacional.

El proyecto tiene otras fallas, aunque las fundamentales ya las hemos expresado. Creemos que no sería prudente que el Congreso Nacional sancionara este proyecto de ley porque entendemos que no se trata de una buena legislación. En definitiva, el proyecto es una solución de compromiso que reúne en su texto varios autoproyectos o ideas sueltas que responden a orientaciones distintas, y así es como resulta poco claro e incompleto.

La solución ideal sería hacer un nuevo proyecto. La solución posible quizás sería remitir este proyecto a comisión y repensarlo detenida y profundamente, lo que, de todos modos, no dejará de ser otro arreglo.

Esto es lo que nosotros pensamos con respecto al proyecto y como he expresado al comienzo, los principios deben estar plasmados en una ley que regule con acierto esta materia de la defensa nacional.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vargas Aignasse. — Señor presidente: lamentablemente una cierta discontinuidad producto de la labor legislativa, de la tarea de bloque y de la necesidad de compatibilizar en ambas cámaras proyectos que se vienen considerando y que la sociedad argentina espera, ha hecho que la bancada peronista no haya estado presente durante gran parte del debate de hoy. Pero aún resuenan en mis oídos los conceptos y las expresiones políticas y hasta filosóficas que han vertido en este recinto diputados de la jerarquía de Balbino Zubiri, Oscar Alende y Miguel Angel Toma.

En mi primera intervención como novel diputado debo decir que me siento profundamente honrado y orgulloso de compartir estas bancas

con legisladores tan prestigiosos, porque en ese trípode conformado por los diputados Zubiri, Toma y Alende estaba resumido un viejo anhelo de los argentinos, un viejo sentimiento tantas veces postergado y hasta sistemáticamente debilitado: el de la unidad del pueblo argentino.

Ahí estaba la esencia misma de la argentinidad; ahí vibraba el sentimiento de que la patria está primero. No había motivaciones subalternas, sino trabajo común sobre un tema caro a los argentinos como es el de la defensa nacional. Por ello, no había posibilidad alguna de hacer de ese tema una cuestión de enfrentamiento electoral. Fue la convivencia civilizada la que dio a luz este proyecto, que no es peronista ni radical sino de todos los argentinos.

Por eso nos duele e indigna haber escuchado anoche ciertas expresiones de una señora diputada con las que caricaturizaba este sentimiento de unidad del pueblo y este entendimiento de casi el 90 por ciento de los argentinos. Nos duele todavía más cuando escuchamos hablar de matrimonio de conveniencia, expresión utilizada con una ironía quizás perversa.

No hace más de una semana, la misma señora diputada a la que aludo estuvo presente en un casamiento auténtico celebrado en la provincia de Tucumán y compartió la mesa esa noche con el máximo represor de la historia argentina, Antonio Domingo Bussi, a quien, luego de reprocharle que su representante, en su primera intervención como diputado nacional, hubiera votado en contra de una postura propiciada por su padre, le formuló propuestas acerca de futuras fidelidades —se entiende que políticas— y le hizo promesas de acciones comunes, quizás hasta que la muerte los separe. (*Risas.*)

Ayer, cuando el doctor Alende hablaba de democracia y dictadura, los que estábamos presentes no pudimos menos que pensar que la democracia siempre está junto a las mayorías nacionales, mientras que la dictadura está siempre con las minorías.

Me resulta difícil analizar estos temas cuando ya tantas personas inteligentes y con vocación de servicio los han desmenuzado al formular los fundamentos de sus respectivas posiciones. Sin embargo, quiero agregar algunas consideraciones complementarias, que quizás sean distintas de las de otros señores diputados preopinantes, pero no antagónicas. Paradójicamente, estas reflexiones surgieron también a partir de algunas consideraciones inteligentes que aquella misma señora diputada hizo anoche cuando dijo que el principio de la subordinación militar al poder político ya figura en la

meramente declarativo cuando está contenido en una ley. Cuando hacía estas afirmaciones, yo pensaba que son realmente ciertas. Hace falta algo más que una ley buena, una norma perfecta, para consagrar definitivamente la Nación estable, la paz y la tranquilidad entre los argentinos. Hace falta el concurso de los integrantes de las propias fuerzas armadas así como una conducción de las mismas que sea capaz de llevar adelante este proceso de integración de la familia argentina y de despegue de la Argentina grande que siempre soñamos.

Más de medio siglo de vida política nos ha enseñado que la subordinación militar al poder constitucional no depende tanto de la bondad de una ley, y ni siquiera de los propios militares, sino sustancialmente de que la sociedad política pueda dar las respuestas que el pueblo está esperando, lograr el consenso y la concordia nacional y poner en marcha una política de producción con crecimiento y justicia social. Es en el marco de una democracia aún débil —pero que queremos fortalecer—, de una democracia que aspiramos consolidar plenamente en los tiempos por venir, que queremos fuerzas armadas con funciones claras, operando en el juego de las instituciones democráticas. No las queremos ejerciendo la hegemonía del poder político, como partido militar, ni tampoco reducidas a una mera guardia nacional.

Hoy, después de cuatro años de democracia, todavía tenemos fuerzas armadas sin destino, carentes de objetivo como entidad sectorial de la Nación, sin presupuesto, enjuiciadas por el pasado y debilitadas en su despliegue territorial y en sus instalaciones. Con este nuevo régimen estamos dando a las fuerzas armadas un marco jurídico y la definición de sus objetivos. Pero todavía faltan cosas por hacer. Falta saldar definitivamente las deudas con el pasado, rejerarquizar económicamente a las fuerzas, devolverles la confianza perdida —en tanto ellas se hagan acreedoras a esa confianza—, así como alcanzar una amplia inserción de la familia castrense en la vida de la democracia.

Estamos por aprobar este proyecto de ley de defensa nacional elaborado por el conjunto de los argentinos. Y vamos a aprobar también las normas complementarias que eliminen definitivamente la dotrina de la seguridad nacional. Pero los peronistas reclamamos el ejercicio pleno de la autoridad de jefe militar del presidente de la Nación; reclamamos que conduzca a las fuerzas armadas, que las subordine al poder político y a la defensa de la soberanía y que las incorpore al esfuerzo productivo del país.

Si bien he dicho que el rol y el destino de las fuerzas armadas dependen de la sociedad po-

lítica, creo que hay algo que los hombres de armas deben hacer, por cuanto de ellos depende. Y lo dice quien ha sufrido el escarnio y el dolor, como muchos otros tucumanos, de haber soportado la pérdida de un hermano, senador provincial justicialista, que fue arrancado de su hogar a las cuatro de la mañana —como muchos otros funcionarios y hombres de bien de mi pueblo—, luego de haber estado cumpliendo sus funciones hasta las once de la noche del día 23 de marzo de 1976.

Con esta autoridad moral que tengo, quiero decir a las fuerzas armadas que aquí está un hombre que quiere el reencuentro de la familia argentina, pero también les recalco y exijo que renuncien definitivamente a reivindicar los períodos de la historia en que estuvieron divorciados del pueblo. También les exijo que recuperen la tradición y el espíritu sanmartiniano de respeto irrestricto a la soberanía popular. Y para terminar, quiero decirles que ha llegado la hora de que los hombres de armas exterioricen inequívocamente su voluntad de reconciliación e integración. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Monjardín de Masci. — Señor presidente: no es fácil agregar algunos conceptos luego de haber escuchado ayer y hoy expresiones oratorias profundas, sensibles y apasionadas, como es el caso de la del señor diputado que me acaba de preceder en el uso de la palabra. De todas formas, me siento obligada a exponer el pensamiento del partido político al que pertenezco.

He estado tomando desprolijos apuntes para no repetir lo que ya se dijo, en atención al valioso tiempo de esta Cámara. En primer lugar, quiero agradecer a los señores diputados que hicieron uso de la palabra tanto ayer como hoy. De todos he aprendido. Aplaudí aun a aquellos con los que no coincidí en lo más mínimo. Lo hice porque quiero pensar bien, y porque lo hago interpreto que detrás de una palabra galana y de una expresión coherente hay, fundamentalmente, sinceridad y buena intención.

No quiero creer que en mi país y en la raza política argentina existan quienes especulan con este tema que nos conmueve tanto. Todos han contribuido a mi formación, lo cual les agradezco.

Me alegra encontrar coincidencias luego de haber experimentado tantas vivencias en mis sesenta años de vida, aquí declarados con orgullo. Digo que me alegra hallar coincidencias porque recuerdo que cuando apenas tenía tres años, mi padre —en aquel entonces intendente radical de mi pueblo— fue echado un 6 de septiembre,

puesto preso y acusado de ladrón, de lo que se defendió solo, quedando libre de culpa y cargo. Esta es mi primera vivencia política, que levanto como bandera cuando debo adoptar algunas definiciones.

Luego que los argentinos arrastramos tantas penas, me alegra coincidir y también disentir, porque la democracia comprende ambas actitudes. Difiero de algunas voces que se han levantado en este recinto, y deseo expresarlo serenamente y no con un afán polémico. No pretendo lo perfecto en éste ni en otros temas que fueron abordados en estos cuatro años de democracia o que serán considerados en adelante. No se trata de renunciar a aquel ideal de querer atrapar la luz que está allá lejos, en las tinieblas o en el bosque; pero eso debe ser el ideal: lo perfecto, un objetivo a alcanzar. Lo que no quiero es que esa búsqueda de la perfección o de lo mejor —que es enemigo de lo bueno— acabe por hacernos detener en el camino cuando, al fin, pareciera que los argentinos, entre dolores del pasado y algunos desencuentros —como los que se están dando hoy en el Honorable Senado—, tenemos la vocación de llevar hacia adelante al país y la democracia.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sra. Monjardín de Masci. — Aquí he oído hablar no diría con ironía sino más bien con gracia, de una forma severa, de algo que me olió a despectivo. Se ha hablado de manera despectiva acerca del acuerdo y del consenso. Sin cálculos electoralistas, me pregunto si después de mis sesenta años de vida, que han sido de desencuentros, voy a querer señalar como un error que me halle dialogando no digo con radicales —porque es el partido en el que nací—, sino con peronistas, a quienes combatí en mi juventud. Lo hago con gusto y con conciencia porque tanto peronistas como radicales combaten entre sí. También lo hacen otros sectores de distinto cuño: los demócratas cristianos, los partidos provinciales —entre los que tengo tantos amigos y a quienes respeto mucho en mi condición de federal—, los socialistas —con toda su tradición—, los demócratas progresistas, los liberales —que intentan conformar una fuerza de centro conservadora, o como se la quiera llamar, que es respetable y legítima—, y todos los demás sectores.

No nos burlemos del consenso ni de este presidente de la Nación que intenta abrir sus brazos, y ubica a sus ministros y funcionarios más destacados alrededor de una mesa, con dirigen-

tes críticos y severos como los que participaron de la mesa de política exterior, a la que asistí. He visto a esos funcionarios a veces preocupados e inquietos, pero a la vez interesados en brindar respuestas coherentes, y no me burlo de eso.

Este es el esfuerzo que los distintos sectores que ayer estuvimos enfrentados estamos llevando a cabo, y a ese esfuerzo debemos sumarnos todos con la mejor buena voluntad y con un gran corazón. Esto significa crecer. Entonces, sin pretender la perfección, debemos avanzar de manera lenta y segura. Como dice el viejo refrán: "Sin prisa pero sin pausa". ¡Argentinos, a avanzar!

He advertido además, con un poco de pesadumbre, que miramos mucho hacia atrás. Entonces, ¿cómo sustraernos a la historia, a la memoria y a la justicia? Esto se lo pregunto a las fuerzas armadas, a las que respeto. ¿Ellas piensan que lo que hoy estamos discutiendo puede dejar de tener sabor político? ¡Cómo no va a tener sabor político! Y si este proyecto de ley es sólo una sombra, votémoslo igual y avancemos, porque quizás todos tengamos sombras en el alma.

Por otro lado, aquí se ha acusado a los gobiernos constitucionales de haber convocado a las fuerzas armadas para combatir la subversión. ¿Se los acusa de haber tenido temor por la paz del país, y por ello haber recurrido a las fuerzas armadas? Yo digo que había un pueblo que reclamaba su actuación, y aclaro que en ese entonces no coincidía con el gobierno constitucional de turno.

¿Constituye un error tan grave sancionar este proyecto de ley por medio del cual se coloca un marco a las fuerzas armadas para que intervengan únicamente ante conflictos externos? Yo contesto que si en aquel entonces —cuando se convocó a las fuerzas armadas a enfrentar la subversión— hubiera sido ley el proyecto que hoy consideramos, tales fuerzas habrían visto frenado su posterior accionar. Entiendo que con una normativa como la que pretendemos sancionar nos habiéramos ahorrado mucho dolor, mucha pesadumbre, mucha muerte y enfrentamientos estériles entre los argentinos.

Con un marco como el que delimita el proyecto de ley que estamos tratando, seguramente les habiéramos evitado a nuestras fuerzas armadas el dolor que hoy padecen, cuando algunos de sus integrantes se sienten agraviados, agredidos y acorralados. Como ha quedado claro en el debate, ésta es la intención del legislador: dar a las fuerzas armadas el lugar que les corresponde dentro de la sociedad.

Ellas consideran que lucharon para defender la paz y que pelearon contra la guerrilla ferozmente desatada en su pasión. Ellas creen que hicieron bien y que cumplieron con su deber.

En el espíritu de este proyecto de ley hay un hecho político. Yo me atrevo a enfrentarlo sin pudor porque vivimos tiempos políticos de transformación. Los legisladores deseamos fijar un límite; es nuestra intención que las fuerzas armadas comprendan el espíritu de lo que sostenemos aunque algún diputado pueda expresar algo que les duela.

No tengo tanto miedo del futuro. Se determina en el proyecto de ley que las fuerzas armadas sólo podrán intervenir en caso de una agresión externa, pero nuestra Constitución, en el artículo 86 inciso 17, dice claramente que el presidente de la Nación "dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación".

No soy constitucionalista, pero igualmente interpreto que no debemos tener tanto miedo de algún probable error que tenga este proyecto de ley, ya que no se puede alterar el sentido de la cláusula constitucional referida.

Vuelvo a rogar a los señores diputados que me permitan hacer una interpretación personal. Considero que esta norma constituye un límite que hace que las fuerzas armadas se sientan agredidas porque creen que los civiles —vengativamente y con espíritu de revancha— las están limitando. Casi como confesándome, me pregunto: ¿será así? Quizás no lo sea. Quizás el límite nos lo estemos poniendo todos nosotros.

Este proyecto es un hecho político. En el día de ayer se planteó el siguiente interrogante: ¿Para qué sirve esta norma si la Constitución fue avasallada? Entiendo que cuando hay fuerzas y odios desatados, tanto este proyecto como la Constitución pueden ser avasallados.

¿Hacemos mal los políticos y los civiles al establecer nuevamente por medio de una ley un límite o un marco que nos oriente, aunque sea redundante? ¿Acaso no nos basta todo lo vivido desde el 6 de septiembre de 1930?

¿Por qué interpretar que este proyecto es un límite que les ponemos a las fuerzas armadas como enemigos? Reitero que se trata de un límite que todos nos imponemos. En este sentido, voy a recordar una antigua leyenda oriental. Poco más allá de la vía de Cristo un maestro, un profeta, recorría pequeños pueblos de Medio Oriente diciendo su verdad, y al llegar a un pueblo donde había feria, gente en las esquinas y fiesta se detuvo ante cada grupo para profetizar. Decía su verdad; expresaba su sentimien-

to; se apasionaba. La gente lo escuchaba un poco, daba vuelta la cara, miraba hacia otro lado y parecía no entenderlo. Un pequeño grupo de chicuelos lo siguió y finalmente uno de ellos, que al atardecer lo vio cansado de hablar, le preguntó: "Señor, ¿porqué usted habla tanto? ¿Por qué repite tanto lo mismo si no lo escuchan y no lo comprenden?" El profeta contestó: "lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo aunque sea para no olvidarme y para no cambiar yo".

Por las razones expuestas, entiendo que este proyecto constituye un marco en el cual todos queremos estar inmersos, no con la ingenuidad de pensar que nunca más podrá haber un conflicto interno, sino con la convicción de que ante un conflicto interno tendremos fuerzas de seguridad valientes, fuerzas armadas honradas y valerosas y autoridades civiles lúcidas que sabrán ordenar lo que sea menester en su momento, como lo indica la Constitución.

No somos ingenuos. Se dice que esta norma mira hacia el pasado. Entonces, me pregunto: ¿No mira también hacia el pasado nuestra cabeza cuando piensa al revés, cuando piensa lo contrario, cuando piensa que tenemos que seguir contando con una ley para el conflicto interno porque van a volver la guerrilla, la subversión, el odio y la muerte como un destino implacable o un designio de nuestro país? Yo respondo negativamente. Podemos votar una norma imperfecta, con un margen de error, pero que sea perfectible mientras existan a lo largo de los años legisladores capaces de perfeccionarla. Votemos un proyecto de ley más unidos para que no se repita el dolor de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que llevados de la mano por los ideólogos del momento fueron a aquel terrible martirio no sólo de morir sino a aquel mucho más grave, que es el de convertirse en asesinos y matar.

También tenemos el otro dolor, el de que seguimos peleándonos entre hermanos, porque pareciera que lo cívico y lo militar no se entienden y se ofenden mutua y gratuitamente, no encontrando un lenguaje común. Algunas veces lo hallan y uno escucha o lee palabras esclarecedoras de un ministro valiente o de un hombre que conduce las fuerzas armadas y tiene el coraje de decir las cosas dando la cara a ellas y en presencia del presidente de la República.

Pienso con respeto, preocupación y responsabilidad en nuestras fuerzas armadas, que ayer nos brindaron la libertad. Es cierto, como muy bien se ha expresado en este recinto, que detrás de esos jóvenes militares estuvo la masa del pueblo armado con sus lanzas, sus ponchos y sus

modestos uniformes. Sin embargo, esas fuerzas armadas nos condujeron hacia la constitución de la Nación y nos dieron ese hombre que ayer y hoy ha estado presente entre nosotros, el más grande de los argentinos, no sé si tanto por su valor militar como por su ética y su ejemplo de desinterés y nobleza, que nos sigue obligando y conmoviendo a todos.

Tengo presente la imagen de esas fuerzas armadas que en épocas difíciles conquistaron territorios, cuidaron nuestras fronteras, alfabetizaron a nuestros muchachos —a nuestros soldados que venían de los hogares más humildes de la patria— y poblaron el país civilizándolo, por supuesto con sus errores, pasiones y debilidades, como las que tenemos los civiles. Además, enseñaron a nuestros hijos, padres y hermanos a jurar defender la patria, acentuando el amor hacia ella que traían desde la banderita y la escarapela de la escuela y de la infancia.

Luego hubo un 6 de septiembre de 1930, que no es para mí sólo una fijación sino, como ya lo señalé, una bandera, un símbolo. Sin embargo, invito a todos los que estamos aquí presentes a que revisemos rápidamente nuestros errores durante los gobiernos de facto o los civiles, nuestras pasiones y nuestras debilidades. Al respecto debo señalar que me alegro al ver tantos jóvenes de todos los partidos políticos, a quienes miro y escucho atentamente cuando hablan, quienes más allá de los errores de sus propios partidos en el pasado tratan de superarlos, posibilitando con ello que la patria se supere. ¿Y quiénes andaban en el medio mezclándose, quizá porque a veces cometimos el error de golpear sus puertas? Las fuerzas armadas. Entonces, me pregunto: ¿Estamos hoy acaso tirando contra ellas la primera piedra porque votamos este proyecto de ley? Ello no está en mi ánimo; al contrario, pienso que tenemos que coincidir en la democracia.

Seguramente esta iniciativa es corregible porque evidentemente surge de demoras, sombras y prejuicios del pasado y —¿por qué no?— de estos tiempos políticos. ¿Acaso hubo sombras en esos hombres, algunos de ellos distinguidos asesores de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, que están aquí escuchando esta sesión?

Yo he estado buceando rápida e improvisadamente en todo el material que tuve a mi alcance y pude advertir que los legisladores de uno y otro partido realmente han trabajado. ¿Por qué voy a dudar del proceso de elaboración de este proyecto de ley como si detrás de él existieran graves problemas y profundas incoherencias severamente cuestionables?

Admito que haya errores; he escuchado a los legisladores que los señalaron y si bien no estuve de acuerdo con la moción de vuelta a comisión, confieso que es un proyecto perfectible.

Confío en el patriotismo, en la sensibilidad y en la buena intención de los legisladores que trabajaron en la elaboración de esta iniciativa, tanto aquí como en el Senado.

Con este proyecto el país cuenta con una referencia que presenta mínimos errores pero que satisface la necesidad de un orden, de un marco y de una responsabilidad compartida. Quiero formar con el resto de los legisladores una comunidad de responsabilidad con una misma intención.

Pienso en las fuerzas armadas y recuerdo que durante uno de sus gobiernos, ya hecho el llamado a elecciones, en dos oportunidades confiaron en mí para que me desempeñara como uno de sus funcionarios.

Pienso en los hombres de las fuerzas armadas y trato de imaginar a aquellos con los que estuve relacionada; en realidad son muy pocos. Recuerdo con pena y dolor a aquellos hombres de las fuerzas armadas que con soberbia cerraron mi Universidad de Luján, nuestra Universidad de Luján. Pero también pienso en aquellos militares que comprendieron la validez de un proyecto de futuro y lo crearon.

Y pienso también que en pleno gobierno del proceso, mientras la soberbia de los de más arriba avasallaba la inquietud de los estudiantes, de los fundadores, de los docentes, del pueblo y de la totalidad de los partidos políticos argentinos, golpeé las puertas de otros hombres de las fuerzas armadas que no tuvieron soberbia, quienes nos comprendieron y apoyaron, disintiendo de sus jefes y de las autoridades de facto de aquel momento. Estoy segura de que cada uno de ustedes ha pasado por experiencias de este tipo.

¿Qué puede haber en un legislador argentino de odio y de rencor cuando un joven que dice tener a su hermano desaparecido ha hecho el esfuerzo conmovedor de desnudar su intimidad y su dolor para afirmar que quiere el bien de las fuerzas armadas y el de la patria?

Creo que todos los legisladores consideramos a las fuerzas armadas como parte de nuestro país. No debemos hacer una división entre réprobos y elegidos. No miremos al pasado para quedarnos atrancados en él; mirémoslo para que cada uno de nosotros, junto con las fuerzas armadas, nos golpeemos el pecho, reconozcamos nuestros errores y comencemos a trabajar con el propósito de no volver a equivocarnos jamás.

Las fuerzas armadas han tenido un alto grado de culpa y error; las quiero distintas en mi afecto

y en mi respeto. Deben ser distintas y aceptar un destino de grandeza para el país que sea el suyo propio, lejos de la pretensión del poder político. Las quiero serenas y justas, juzgándose a sí mismas y no sintiéndose nuestras víctimas. Las quiero con sacrificio y tolerancia, postergando justificados reclamos sectoriales que en este momento están haciendo. ¿Acaso no hay enormes sectores del país —entre ellos los más humildes, los asalariados— que con enormes dificultades y con sus penas auestas están sobrellevando este duro momento?

Creo haber escuchado en esta Cámara, aun a los más críticos y severos, reconocer con un corazón fervorosamente democrático —si no en forma explícita, sí tácitamente— que en la lucha de las fuerzas armadas hubo un momento de valentía y claridad. No creo haber oído con referencia a ellas —quizá se me haya escapado algo— términos de rencor ni de odio. Quisiera que las fuerzas armadas sientan lo que hoy hemos expresado aquí, que tomen el Diario de Sesiones y lo lean.

Probablemente ahora les toque vivir una etapa de dolor. Esto no me alegra; nunca me causó alegría el dolor que debió vivir cada partido político que en algún momento fue desalojado del poder. Eso jamás me alegró y siempre lo interpreté como el dolor de un sector del pueblo argentino. Sin embargo, nuestra historia está conformada por todo ello y por los miedos.

Para terminar mi exposición me referiré al miedo, algo que todos sentimos alguna vez y que fue el peor enemigo de los argentinos. El miedo nos enferma, provoca la reacción de una defensa enfermiza. Una y otra vez, en cada etapa del país, desde un sector u otro tuvimos miedo de los guerrilleros, y jóvenes inocentes tuvieron miedo de la terrible represión.

¡Basta de miedos! También debemos dejar de buscar exageradamente en los argentinos la perfección, que es otra cosa que advierto como enfermedad en los últimos tiempos. No pretendamos tener gobernantes perfectos, pues no son dioses. Yo no quiero hombres como dioses. Todos somos seres humanos: los legisladores, los integrantes de las fuerzas armadas, los políticos, los gobernantes y los que están en las calles. Todos tenemos limitaciones y grandezas, errores, pasiones y, por suerte, fervor, porque mientras haya fervor habrá una semillita de entusiasmo y de crecimiento.

Para no ser como la mujer bíblica que se convirtió en estatua de sal, no miremos hacia atrás; sólo hagámoslo a fin de no repetir el mal que hicimos alguna vez.

Tenemos un pasado azaroso y de dolor. Pido a las fuerzas armadas que acepten el poder de los elegidos por el pueblo, que ésta es una nueva etapa que tienen que vivir y que lo hagan con flexibilidad, desprovistas de rigideces que nos separan, atontan y deprimen.

Conozco lo que las fuerzas armadas profesionales, ordenadas y con alma podrían llegar a hacer. ¿Por qué voy a pensar, como se ha dicho aquí, que con este proyecto les vamos a hacer perder el alma a las fuerzas armadas? Confío en ellas; creo que su alma y su fervor son grandes todavía y que tienen muchos maestros en su historia frente a los cuales podrán reflexionar.

Quiero que las fuerzas armadas estén en una acción conjunta con todos nosotros y con los gobiernos civiles, aportando sus conocimientos, profesionalidad, capacidad y esfuerzo. Las quiero ver construir. Quiero que se alcance el objetivo de que se construyan escuelas de frontera, se hagan caminos perdidos en la cordillera y se concrete el sueño de tener el ferrocarril transpatagónico. Quiero que se construya y se siga construyendo.

Con este proyectos, aquéllas y nosotros vamos a salir adelante. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: al igual que el señor diputado Vargas Aignasse, me siento muy honrado de pertenecer a esta Honorable Cámara y contar entre mis colegas a los señores diputados Zabirí, Alende y Toma. También me reconforta haber escuchado una exposición como la que pronunciara la señora diputada Monjardín de Masci, pues a pesar de que no comparto sus ideas ella reveló en sus palabras la estirpe de aquel gran hombre público que presidiera esta Cámara y dejara para la posteridad el recuerdo de la amplitud con que permitió la expresión de las minorías en los debates parlamentarios.

También —por qué no decirlo— me siento muy a gusto en la compañía del señor diputado por Tucumán, porque no tengo dudas de que cuando repase los conceptos que vertiera en su encendida improvisación habrá de morigerar espontáneamente algunas palabras relativas a la señora diputada Alsogaray, que hieren sensiblemente los principios de respeto mutuo que nos debemos quienes integramos este cuerpo, no tanto quizás como una cuestión de respeto personal sino en consideración al pueblo que representamos. No voy a asumir la defensa de la señora diputada porque el presidente de la Cámara, celoso del reglamento, podría indicarme que estoy apartado de la cuestión y porque ade-

más creo que la señora diputada se defiende muy bien sola. Pero quizás fue su ausencia del recinto la que permitió el ataque descomedido del que fue objeto. De todas maneras, agradezco al señor diputado por Tucumán haber explicado que su ausencia del recinto se debió quizás a que estaba atareado siguiendo las actividades privadas de la señora diputada Alsogaray, como las comidas a las que ésta asiste y las mesas que comparte. Ello me parece muy útil desde el punto de vista de los diputados que desde hace largas horas estamos encerrados en este recinto, sometidos a los vaivenes singulares de esta sesión.

El proyecto que debatimos no tiene la trascendencia ni la significación que se le han atribuido. Despojado de toda singularidad y desprovisto de toda originalidad, ese proyecto se inscribe en la misma tónica y sigue el mismo sendero que las normas antecesoras en la materia, desde hace casi medio siglo; inclusive, estudiando su texto encontramos también vestigios de aquellas otras.

Me pregunto cuál es esa causa esencial, ese motivo fundamental que impulsa a los señores diputados a otorgar al proyecto un significado de tanta trascendencia y que hasta los lleva a presentarlo como un vehículo de libertad y una consagración de los derechos de los pueblos. Quisiera saber dónde encontrar en el texto del proyecto el principio, la novedad, el derecho consagrado que podrían llevar a creer —aunque el pueblo mismo no se ha interesado demasiado en este debate— que estamos transitando por un nuevo sendero e inaugurando una nueva vida en materia del sistema defensivo de la Nación.

Ayer escuchaba al señor diputado por Buenos Aires, doctor Oscar Alende, y recordaba al oírlo que en este mismo recinto hace más de treinta años él pidió reiteradamente la derogación del estado de guerra interno. ¿Qué era esto del estado de guerra interno? Tuvo su origen en un decreto del Poder Ejecutivo nacional, convalidado por el Congreso en 1951, que simplemente decía que todo militar que se subleva, todo oficial que se alzara contra las autoridades constituidas podía ser fusilado inmediatamente. Ese decreto no hablaba de juicio, ni del debido proceso, ni de derechos; hablaba de fusilar inmediatamente. El señor diputado Alende reclamaba su derogación, y dada la disyuntiva de hierro por él planteada al iniciar su discurso, no dudo de que al hacerlo estaba en contra de la dictadura y a favor del pueblo.

Pocos años más tarde Alfredo L. Palacios —recordado por el señor diputado por Santa Fe en el primer discurso de la tarde de hoy— protestó y reclamó la derogación del llamado Plan Co-

nintes. El senador interpelaba a la sazón al señor ministro del Interior y se preguntaba cuál era el origen de ese plan respecto de las situaciones de conmoción interior que se cernían sobre la República. Dijo que el origen era la ley de organización de la Nación para tiempos de guerra, número 13.234, sancionada por el gobierno peronista en el año 1948, y que tenía los mismos principios que el estado de guerra interno, que fue derogado —según propias palabras del senador Palacios— por aquel magnífico militar que fue el general Eduardo Lonardi, quien lo consideraba contrario a la Constitución.

Años después el presidente Illia envió al Congreso un proyecto de ley de defensa que se basaba en la teoría —no decía “doctrina”— de la seguridad nacional. En dicho proyecto se establecía la oportunidad en que las fuerzas armadas podían actuar en caso de conflicto interior.

Siguiendo esta evolución me parece que llegamos al único punto donde la iniciativa en consideración tiene una dirección diferente de la de sus antecedentes, sin excluir la ley vigente en la materia, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional y que también prevé la actuación de las fuerzas armadas en los conflictos de orden interno. Creo que ahí está el meollo de la cuestión. De acuerdo con los fracasos que se han registrado y con los serios errores que se imputaron a estas leyes, en lugar de legislar adecuadamente sobre la actuación legítima de la fuerza en caso de conmoción interior, lo que hacemos es silenciar el tema. Queremos dejar inerte al Poder Ejecutivo, como si éste no fuera ejercido por el hombre que ha sido votado por el pueblo, o como si no estuviera en ejercicio de su cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Pareciera que estamos legislando con prevención.

No tenemos por qué dudar del funcionamiento de las instituciones; ni de que estas facultades del Poder Ejecutivo serán ejercidas por éste legítimamente. No tenemos por qué dudar del funcionamiento del Congreso ni del Poder Judicial. Como legisladores, debemos prever estos casos en que puede haber una agresión a la vida, a la seguridad y a la tranquilidad de los habitantes, que es deber del Estado resguardar con la fuerza que tiene a su alcance.

Me pregunto cuál es el mérito de no consignar la seguridad interior en la ley de defensa nacional; cuáles son los logros o los resultados que se obtienen. Pareciera ser que uno de ellos es esta diferencia entre la agresión externa y la interna. Creo que se ha hecho muy

poco en esta materia porque ¿quién es el que va a determinar la hipótesis de conflicto?, ¿quién va a resolver cuándo un conflicto o agresión tiene origen interno o externo? El presidente de la República.

La subversión de la que hemos estado hablando no fue argentina; tuvo fuerte apoyo de las revoluciones que sufrimos en el continente, así como ayuda financiera exterior. Por lo tanto, si volviera a producirse un movimiento de esa naturaleza, el presidente de la República tendría que encuadrar el conflicto en la hipótesis de agresión de origen exterior.

Estas agresiones que en el mundo de hoy, con sutil penetración, se valen de elementos vernáculos ¿significan que el país quedará inerte y que no se va a poder utilizar legítimamente la fuerza? Estamos obviando una parte esencial de nuestra legislación, algo que el país ha sufrido en carne propia. ¿Esto es un logro? ¿Este es un vehículo de libertad y de derecho de los pueblos? Además, ¿cuándo se configura un conflicto o una agresión de orden interno que dé derecho a la participación de la fuerza? Cuando el señor gobernador de Mendoza fue a tomar posesión de la obra hidroeléctrica que decía era propiedad de la provincia —y a lo mejor tenía razón—, ¿no fue acaso esperado por la Gendarmería con armas largas para impedirle que llevara a cabo tal cometido? ¿Y ése no fue un conflicto de orden interno?

Cuando el pueblo fue convocado a la plaza de Mayo y luego se hizo presente a las inmediaciones de Campo de Mayo, siendo saludado con alborozo por esta Cámara, ¿estaba actuando ese pueblo como integrante del sistema de defensa? Y si así era, ¿estaba actuando el pueblo —como integrante del sistema de defensa— en un conflicto de orden interno? ¿Cuál es la respuesta a estos interrogantes?

¿Qué debemos hacer cuando el ejército se pone al lado del pueblo? Formulo esta pregunta porque otro correligionario allá en el tiempo del señor diputado Estévez Boero —el señor senador Mario Bravo, por la Capital—, en el recordado debate sobre armamentos llevado a cabo en el recinto de la Cámara alta en el año 1934, manifestó que cuando el ejército se pone al lado del pueblo, cuando la revolución tiene como protagonista al pueblo acompañado por el ejército, hay aplausos para éste. ¿Cómo se resuelven estos conflictos?

No es mediante el texto de las leyes como se pueden subsanar estos defectos y superar los tristes momentos que hemos vivido en la Argentina. Son necesarios el trabajo y la perseverancia con miras a la convivencia democrática.

Entonces sí podremos decir que estamos en el camino de la libertad y el progreso de los pueblos.

El proyecto de ley en consideración confunde el concepto de defensa, que admirablemente fuera explicado por el señor presidente de la República en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa en el año 1983. En esa oportunidad el señor presidente de la República manifestó que la defensa era un concepto que englobaba la actividad toda de un pueblo; una nación en marcha consciente de su destino, que palpaba su crecimiento; que la educación era un factor preponderante en la defensa, y la economía un factor también esencial. Por otro lado, el señor presidente señaló que un país que alentaba la producción, la generación de riqueza y el trabajo, también estaba contribuyendo a su defensa, y que el aspecto militar no era sino uno de los que deben conformar la organización del país y su sistema de defensa.

Entonces, la que nos ocupa no es la ley de defensa; es la normativa de la organización administrativa militar, ya que están ausentes estos conceptos fundamentales que con acierto presentó el doctor Raúl Alfonsín ante la Asamblea Legislativa.

Siguiendo ese razonamiento, quizá debamos reconocer que un país empobrecido, que desalienta la inversión y la producción y que destempla el trabajo, es una nación que está ofreciendo las mayores vulnerabilidades por más leyes que se quieran sancionar sobre el tema de la defensa.

Deseo señalar dos aspectos constitucionales que, a mi entender, no deben estar ausentes del texto del proyecto. Uno de ellos es el sistema de la defensa nacional, que importa una reiteración de atribuciones que emanan de la Constitución Nacional y que de ninguna manera pueden limitarse en el texto del proyecto de ley que consideramos. Y el otro es el contenido en el artículo 23 de esta iniciativa, por el cual se le hace delegar al presidente de la República el comando en jefe de las fuerzas armadas en el ministro de Defensa. Esta atribución es indelegable, y he notado en todo el texto del proyecto de ley la pretensión de crear entidades y organismos, de configurar estamentos que se coloquen entre el comandante y las fuerzas a su cargo, como si con esto se quisiera resquebrajar o disminuir la autoridad militar que debe emanar directamente de su comandante.

Lo que así se logra es retacear la atribución del presidente de la Nación. El partido al que pertenezco quiere enaltecer en todos sus aspectos la figura del primer magistrado de la

República como comandante supremo de las fuerzas armadas; sin embargo, en varios artículos de este proyecto de ley se disminuye esa atribución.

Para no fatigar a la Honorable Cámara con una extensa consideración en general de esta iniciativa, me reservo para la discusión en particular el planteo de otras cuestiones.

Al comienzo manifesté que no creía que este proyecto tuviera la trascendencia y la significación que se le atribuyen. Durante el debate sólo he logrado aumentar mi convicción en tal sentido, debido a la menguada cantidad de diputados presentes en el recinto. Las alternativas de esta discusión han estado supeditadas a otras cuestiones que están sucediendo fuera de esta Cámara, con independencia de lo que aquí ocurra. Entonces, después de haber oído las encendidas proclamas de algunos señores diputados por la importancia que tenía este proyecto para las libertades públicas, me decepciono porque no puede ser tan trascendente y fundamental la consideración de esta iniciativa cuando queda condicionada a otras cuestiones.

Ni siquiera en este debate tan amplio hemos contado con la presencia del señor ministro de Defensa en representación del Poder Ejecutivo. Quizás al titular de la cartera mencionada no le habrá parecido tan importante, significativo y trascendente venir al Congreso para participar en este debate; seguramente habrá de comprenderse porque no tenemos la casa en orden, y no podemos invitar a un ministro del Poder Ejecutivo para someterlo al desarrollo de una sesión tan singular como la que estamos celebrando.

Como ciudadano argentino desearía que este proyecto tuviera al menos un mínimo de esas virtudes mágicas que le han atribuido los diputados que lo suscriben —aunque no lo creo—, porque sentiría una honda satisfacción si esos resultados que ellos han expuesto como un bien para nuestro país y para nuestro pueblo llegaran a ser una realidad. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: creo que es inconducente efectuar referencias sobre las expresiones de otro señor diputado si ellas no tienen que ver con la confrontación argumental o conceptual. Sin embargo, en las manifestaciones del señor diputado preopinante hay un aspecto que no puedo dejar pasar por alto en mi condición de justicialista. Es la insistente referencia a las normas sobre conmoción interna que rigieron a partir de la década del 50 en la Argentina. No puedo obviar tales expresiones del señor dipu-

tado porque considero que existen diversos modos de hablar sobre el pasado. Uno de ellos puede ser para extraer de él enseñanzas que nos permitan corregir nuestros rumbos. Otros, para querer reinstalarlo. Es verdad histórica que tales normas existieron, como también lo es que había en esos años situaciones de antinomias en nuestro país.

Había una Argentina que se resistía a desaparecer y otra que pugnaba por nacer. En esta contradicción se producían entre los argentinos profundos desentendimientos. Pero los años han pasado, y los unos hemos podido entender a los otros y viceversa. Hemos morigerado esas antinomias y encontrado caminos comunes, aunque antes los creíamos divergentes. Una demostración de ello es el tratamiento de este proyecto de ley.

No puedo dejar de mencionar que aquella legislación entonces vigente no fue aplicada a quienes participaron en el golpe de 1951. Además, debo recordar que aquel desgraciado 9 de junio de 1956 muchos oficiales del Ejército Argentino y muchos civiles de nuestro pueblo fueron fusilados debido al odio que reinaba en la Argentina. Tampoco olvidemos que el Plan Conintes llevó a la cárcel a numerosos jóvenes dirigentes sindicales, cuyas penas, sumadas, triplicaban las que Franco aplicó a los republicanos con posterioridad a la guerra.

Hechas estas observaciones, entraré en el análisis específico del tema. Estoy convencido de que con la sanción del proyecto de ley en consideración estamos dando un paso político muy significativo. Su importancia deriva de varias razones. En primer lugar, el reemplazo de la ley 16.970 nos permite resolver un conflicto. Me refiero al conflicto planteado entre el estilo de vida elegido por el pueblo argentino, un estilo nacional y democrático, y un marco jurídico absolutamente incompatible, porque la ley Onganía-Costa Méndez instituye el principio de la doctrina de la seguridad nacional.

En segundo término, este paso que estamos dando es también significativo porque habilita al sistema político a ofrecer a nuestras fuerzas armadas un proyecto profesional compatible con un proyecto nacional. Es cierto que aún nos debemos ese proyecto nacional, pero estoy seguro de que si liberamos las energías de nuestro pueblo y promovemos su participación podremos configurarlo.

En tercer lugar, entiendo que esta decisión que estamos tomando es importante porque demuestra claramente que el sistema político es capaz de resolver un problema esencialmente político como es el de la defensa nacional. Esto

es doblemente significativo después de tantos años de deformaciones institucionales, que llevaron a algunos a creer que la cuestión de la defensa nacional era de contenido e incumbencia exclusivamente militares.

El peronismo efectúa su aporte a la elaboración de esta norma no a partir de consideraciones abstractas o teóricas, sino desde su propia vida y desde los conceptos que ha ido construyendo por la aplicación de la reflexión a esa experiencia vital. ¿Quién duda de que fue el justicialismo el que sufrió en carne propia el trasvasamiento ideológico provocado en nuestras fuerzas armadas a partir del golpe de Estado de 1955? Como ha quedado claro durante este debate, muchos han sido nuestros presos, nuestros fusilados, nuestros secuestrados y torturados, por nuestra ineludible decisión de construir una Argentina libre, soberana y justa. Por una imposición ideológica imperial hubo en la Argentina extraviados que consideraban enemigos a quienes manifestábamos esa vocación.

Muchos fueron los agravios, señor presidente, pero nuestra responsabilidad ante la Nación nos impide sujetarnos a las emociones que surgen de esos agravios porque tenemos necesidad de ver claro y de no caer en falsas opciones. Seguramente aquellos dolores no nos han de llevar a antimilitarismos decimonónicos ni a pacifismos estériles.

Señor presidente: el justicialismo anhela la paz porque ama la vida y porque sabe que sólo en paz se puede expresar la capacidad creadora de nuestro pueblo. No entendemos la vida sin esa capacidad creadora.

Sabemos también que la paz y la vida así queridos requieren de nosotros que desterramos la injusticia y la dependencia. Este no es un camino fácil ni expedito; seguramente en él habremos de encontrarnos con la voluntad de los que medran con la injusticia y la dependencia. Y muchas veces esa voluntad está armada. De modo tal que se requiere que seamos capaces de forjar un sistema de defensa nacional que tenga por objetivo central proteger las realizaciones de nuestro pueblo. Se requiere también que el instrumento militar de ese sistema brinde al poder político la fuerza necesaria para garantizar las transformaciones y el cambio social que nuestro pueblo exige.

Desde esta concepción de la defensa nacional, entendida como un subsistema dentro del sistema de decisión nacional, se derivan otros conceptos. Por ejemplo, un nuevo concepto sobre nuestras fuerzas armadas y su rol profesional.

Por supuesto que rechazamos la concepción militarista derivada de la doctrina de seguridad

nacional, que tiende a militarizar la totalidad de la sociedad; también rechazamos el concepto por el que se pretende reducir a nuestras fuerzas armadas a una supuesta función específica. El profesionalismo aséptico, en tanto separa las fuerzas armadas de la vida de la comunidad nacional, en su aislacionismo también es fuente y caldo de cultivo para el golpismo.

Claro que deseamos fuerzas armadas con alta capacitación técnica y profesional; pero más que eso, las queremos comprometidas con la Nación, que es lo mismo que decir con su pueblo. Es nuestro deber crear las condiciones para que todos los ciudadanos que las integran, desde el más humilde soldado hasta el más encumbrado de sus mandos, estén dispuestos a morir por la Constitución, por las leyes y por todas las instituciones en las que se expresa la soberanía de nuestro pueblo.

El tercer concepto desde el cual abordamos el tratamiento de este tema fue el de la integración regional de la defensa. Es para nosotros evidente que vivimos en un mundo cada vez más vinculado, en el que ni siquiera es posible pensar en un camino de trabajo, crecimiento, justicia, paz y libertad con una Argentina aislada. El general Perón decía que ningún argentino podía realizarse en una Argentina que no se realiza. Hoy tendríamos que agregar que ningún pueblo de esta parte del continente podría realizarse en una Latinoamérica que no se realiza.

Desde esa óptica debemos analizar el tema de la defensa. Es evidente que ningún pueblo latinoamericano puede aspirar a protegerse por sí solo de los poderosos de la Tierra. Frente a esta evidencia tenemos dos caminos: o nos alineamos dócilmente detrás de alguno de los bloques que se disputan la hegemonía mundial, o profundizamos los lazos de unión entre los latinoamericanos para ir alcanzando grados crecientes de autonomía. El primer expediente ya lo hemos experimentado. Pudimos comprobar —hoy lo sabemos— que los sistemas de defensa hemisféricos no son tales sino que son los sistemas de defensa de los poderosos del hemisferio, porque cuando se trató de defender a los débiles del hemisferio se demostraron absolutamente ineficaces, como los argentinos lo hemos podido constatar con suma dureza en 1982.

Por ello la alternativa actual es vertebrar un sistema de defensa regional articulado sobre el reconocimiento claro de los intereses de nuestros pueblos.

El proyecto que estamos tratando deja abiertas para este Congreso grandes responsabilidades. Particularmente el título V y el artículo 46

nos imponen futuras responsabilidades legislativas. De estas responsabilidades quisiera destacar básicamente cuatro.

En primer lugar, con respecto a la ley que contemple el control parlamentario de los servicios de inteligencia, será necesario que garanticemos que el Congreso, por ser la expresión plural de la voluntad de nuestros conciudadanos, vele por el recto empleo de esas estructuras para que nunca más haya quien se tiente de utilizarlas en desmedro de los derechos de los argentinos.

Otro elemento que me parece importante como responsabilidad futura es la creación del Servicio de la Defensa Nacional, porque aquí se nos posibilita la opción entre la capacitación por vía del instrumento militar de la defensa nacional y el desarrollo de alguna actividad mediante el aporte civil al sistema de defensa. Tal como lo propusimos en nuestro proyecto alternativo de 1985, el justicialismo aspira a que el actual servicio militar sea reemplazado por un sistema de capacitación militar donde los derechos de los argentinos estén garantizados, con la sola limitación que dicha capacitación militar requiera.

El tercer aspecto es el que nos impone la necesidad de vertebrar un sistema que garantice el contralor por parte de los ministerios de Educación y Justicia y de Defensa de la formación de nuestros cuadros militares. Queremos que nuestros cuadros militares se formen de tal modo que sean uno de los pilares del reencuentro de nuestras fuerzas armadas con el pensamiento de las grandes mayorías populares. Seguramente todos nos vamos a poner muy contentos el día que sepamos que nuestros cadetes aprendan que hubo otro Alsogaray, un Alsogaray que junto con Pascual Echagüe y Mansilla estuvo dispuesto a dar su vida en defensa de la soberanía argentina.

Finalmente, creo que cuando tratemos las leyes orgánicas correspondientes a cada una de las fuerzas será necesario garantizar la participación de todos los institutos constitucionales para asegurar el máximo de justicia en los procedimientos de pases y ascensos, a fin de evitar que los grupos de poder enquistados en las fuerzas armadas y a los que todavía no hemos podido desplazar utilicen estos mecanismos para recrear el partido militar.

El justicialismo va a votar favorablemente este proyecto y creo que con ello nos acercaremos a varios objetivos y especialmente al de crear un sistema de defensa nacional acorde con un proyecto nacional autónomo, basado en nuestras propias necesidades. También creo que con este

proyecto podremos recrear un instrumento militar del sistema de defensa nacional que esté estrictamente subordinado al poder político y efectivamente integrado a la comunidad nacional. Por último, creo también que con este proyecto estaremos más próximos a garantizar la participación de la comunidad toda, a través de sus organizaciones intermedias, en todas las tareas de la defensa nacional.

Sé que para lograr esos objetivos no basta solamente con este proyecto de ley; pero sé también que es un paso imprescindible que debemos dar. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: después de las enjundiosas exposiciones de los señores diputados que me han antecedido, después de las poéticas palabras de la señora diputada por Buenos Aires y del conmovedor testimonio del señor diputado por Tucumán, pareciera que queda muy poco por agregar al debate en general de este proyecto de ley de defensa.

Es más: poco es lo que podríamos decir si consideramos que esa iniciativa forma parte de un acuerdo —o, como se suele decir ahora, de un paquete— entre el radicalismo y el justicialismo, que tiende a poner punto final a la puja distributiva por el poder planteada después de las elecciones del 6 de septiembre. Además, debemos considerar también que, como ya lo hemos presenciado en otros debates en los últimos días, radicales y justicialistas votarán afirmativamente el proyecto en virtud de la obediencia debida, tal como ha sido presentado y sin permitir que se cambie una sola palabra, punto o coma de su redacción actual.

Quienes me precedieron en el uso de la palabra me eximen de mayores justificaciones para explicar por qué considero exagerada la denominación de proyecto de ley de defensa nacional que se da a esta iniciativa. Lejos de tratar en profundidad ese problema, el proyecto se limita a crear un Consejo de Defensa Nacional y deja para otras leyes futuras —que quedan enumeradas en forma incompleta, tal como lo afirmaron otros legisladores, entre ellos el señor diputado preopinante— el desarrollo completo de los objetivos e instrumentos que habrán de formar parte de ese conjunto de leyes que darán cuerpo a la ley de defensa nacional.

A esta altura de la noche no voy a hablar al tratar este tema ni de las fuerzas armadas ni de la doctrina de la seguridad nacional. Sí voy a hablar de la justicia, la prudencia y la ley, que junto a la libertad son las bases sobre

las que se garantiza y afianza la paz. ¿Y qué otra cosa sino la paz ha de ser el objetivo de la defensa nacional?

Soy miembro de una generación que vivió con horror la pérdida del Estado de derecho en la década pasada. Pero esta generación a la que pertenezco reconoce los esfuerzos que hicieron civiles y militares en el pasado para recuperar la convivencia democrática, la paz y el orden constitucional que hoy estamos gozando.

Soy miembro de un pueblo preocupado por la posible sanción de un proyecto de ley que plantea una división perjudicial entre la seguridad interior y la defensa nacional. Como ya se dijo en este debate, esta división podría plantear conflictos en el futuro cuando alguna fuerza insurrecta pretenda alzarse contra la Constitución y las autoridades de la Nación y ponga en peligro estas instituciones. Entonces tendríamos que estar aquí discutiendo si esa fuerza es extranjera o nacional, si recibe ayuda del exterior, en qué proporción los pertrechos o los recursos económicos tienen origen externo o interno, para saber si se trata de un caso de conmoción interior o de uno de ataque exterior.

Dije que iba a hablar de la justicia y creo que antes de discutir desapasionadamente sobre la cuestión de la defensa nacional falta un juicio en la República Argentina. Falta el juicio sobre los hechos vividos en la década pasada. Este juicio exige discutir en este recinto si hubo en la década pasada hechos de violencia objetivamente considerados que justificaron la decisión del gobierno peronista que en 1975 ordenó sacar a las fuerzas armadas de su función específica y dispuso el aniquilamiento de la subversión. Si esta decisión no estuvo fundamentada en hechos de violencia considerados objetivamente, entonces la decisión fue irracional y todo lo que siguió lo fue también. Si esa decisión fue irracional, no entiendo por qué el presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, no deroga semejante decreto de tan absurdo origen. Pero si en cambio dicho decreto estaba fundamentado en los hechos de violencia que se pretendió conjurar por su intermedio, entonces corresponde hacer el juicio de si esa decisión fue correcta y de si la represión fue proporcionada y eficaz. En efecto, es esto lo que debe considerarse cuando se habla de defensa ante una agresión, tanto interna como externa: si hay proporción y eficacia para repeler la agresión.

Afirmé que hace falta también prudencia al hablar de la defensa. ¿Pero cómo podemos nosotros actuar con prudencia si no conocemos la política militar de este gobierno, si no hemos

oído la voz del ministro de Defensa, si no sabemos cuál es el rumbo que el Poder Ejecutivo pretende adoptar para resolver la cuestión militar?

Sr. Manzano. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ibarbia. — No, señor diputado.

Sr. Manzano. — ¡Qué democrático!

Sr. Ibarbia. — Dije que no conocíamos la política militar del Poder Ejecutivo. Hace pocos días nos enteramos del ascenso del marino Astiz y en seguida el señor presidente se ocupó de enviar una nota solicitando su pase a retiro. No sabemos claramente qué es lo que quiere el comodante en jefe de las fuerzas armadas.

Estamos tratando un proyecto de ley de defensa que, en definitiva, no abarca la cuestión de la defensa nacional, ya que sólo condena la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué no hablamos con más franqueza y transparencia y decimos directamente que queremos por vía legislativa condenar la doctrina de la seguridad nacional constituyendo este Consejo de Defensa Nacional?

¿Por qué no hablar del problema de fondo de la defensa nacional, que de ninguna manera ha quedado concluido en este proyecto que está en consideración?

Desde tiempos lejanos, en la Roma antigua se planteó la pregunta de quién custodiaba a los custodios. ¿Quién custodia a los hombres a quienes el pueblo confía sus armas para que garanticen la integridad territorial, la Constitución, los poderes del Estado, la seguridad, la vida, la libertad, el honor y los bienes de todos los habitantes? Y esta pregunta también encontró respuesta en aquellos tiempos. Se confiaba en la ley como límite de la fuerza, como límite del poder o de las armas que se asignaban a un grupo de hombres extraídos del pueblo.

Como hombres de leyes no podemos caer en un polilogismo incomprensible. Por un lado contíamos en la ley como límite a la acción de las fuerzas armadas; pero por otro lado no confiamos en ella —también como límite a su accionar— para ordenar su comportamiento en caso de conmoción interior. Pretendemos excluirlas del marco de discusión de la política de defensa nacional, cuando ellas —por propia definición de este proyecto— son una parte, el brazo ejecutor de la defensa del país en caso de agresión externa.

Estamos en una hora avanzada. Se ha dicho aquí que este debate está vinculado con otro que se realiza puertas afuera y que hace que más de la mitad de los legisladores estén ausentes.

En la discusión de este proyecto ha quedado de manifiesto que falta mucha maduración, reflexión y prudencia; que falta abandonar esta postura de prejuicio y prevención respecto de los distintos hombres que forman el pueblo argentino. Pido entonces prudencia y reflexión para lograr la pacificación y la unidad del pueblo argentino.

Por estas razones adelanto el voto negativo al proyecto en consideración. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: a lo largo de este prolongado debate los señores diputados preopinantes han hecho consideraciones muy enjundiosas sobre los aspectos instrumentales del proyecto de ley que nos ocupa. Por ello, y dado lo avanzado de la hora, habré de limitarme a efectuar unas breves apreciaciones acerca de las cuestiones doctrinarias de esta iniciativa.

Algunos señores diputados manifestaron que la concepción doctrinaria de este proyecto de ley es obsoleta, con lo cual coincidimos. También se dijo que la obsolescencia tenía parangón con los proyectos de ley sancionados en la década del 40, pero en esto respetuosamente discrepamos. Por el contrario, creemos que los proyectos de este tipo vigentes en aquella época estaban imbuidos de una concepción doctrinaria más moderna que la de la iniciativa que estamos tratando.

Todos sabemos que el tema de la defensa nacional y la preocupación por su organización data en nuestro país de hace más de setenta años, tomando estado público en julio de 1914 a raíz de un proyecto presentado por el entonces diputado Aguirre, por la provincia de Mendoza, que propiciaba la creación del Consejo Superior de Defensa Nacional. A esa iniciativa sucedió una serie de proyectos, de los cuales haremos expresa mención por su trascendencia.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alberto Duhalde.

Sr. Folloni. — Uno de ellos fue el proyecto del diputado socialista Juan Antonio Solari, quien en 1935 propició la creación del Ministerio de Defensa Nacional, y otro el proyecto sobre preparación para la defensa nacional, elaborado en 1942 por el senador Alfredo L. Palacios.

Todas esas inquietudes y anhelos tienen concreción en una ley sancionada en el mes de septiembre de 1943, por la que se creaba el Consejo de Defensa Nacional, que es sucedido por la creación de distintos organismos y la sanción de normas tendientes a complementar este sis-

tema. Así se crearon la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y el Estado Mayor de Coordinación de las Fuerzas Armadas. Además, se crean direcciones de defensa nacional en cada uno de los ministerios civiles del gabinete, y finalmente, en 1948, se sanciona la ley 13.234, de organización de la Nación en tiempos de guerra, que divide al gabinete nacional en otros tres: el de seguridad externa, el de seguridad económica y el de seguridad interior.

Es que entonces imperaba en el mundo —y también en nuestro país— la concepción de la defensa nacional integral por oposición al ya superado concepto de defensa nacional total, que es precisamente el que impregna el proyecto que hoy estamos considerando.

Desde un punto de vista estrictamente legal, la idea de defensa nacional es muy clara y concisa. Hace alusión a los factores componentes del potencial nacional, dentro de los cuales las fuerzas armadas no son más que el elemento específico destinado a enfrentar la lucha cruenta que en ocasiones debe afrontar una nación.

La paz no es otra cosa que un estado ideal, muy difícil de alcanzar en forma permanente y perdurable. Muy por el contrario, los conflictos que se encuentran insertos en toda estructura social son permanentes; pueden cambiar de forma, de alcances y de efectos, pero son total y absolutamente imposibles de erradicar definitivamente.

Por otro lado, indudablemente el hombre es el objeto final de la preocupación y de los esfuerzos que demanda esta difícil empresa de la defensa nacional, en la cual el poder militar interactúa con los demás factores que persiguen este mismo objetivo. En función de ello, podemos establecer que indudablemente lo político no puede estar ajeno a lo militar, como tampoco puede estar ajeno a lo económico o a lo psicosocial.

Pero la tarea de defender la soberanía y la integridad del territorio nacional no se agota en la protección de las fronteras de un país o en el supuesto de una agresión armada externa. El objetivo de la defensa va más allá; lo trasciende y se proyecta hacia el hombre como componente de una sociedad a la cual resulta imprescindible tutelar a fin de garantizar su plena realización moral y espiritual.

Nosotros decimos que el concepto de la defensa nacional ha evolucionado a lo largo de los años. Al antiguo principio se le superpuso, a comienzos del presente siglo, la idea de la defensa nacional total, entendiendo esto como sinónimo de la Nación en guerra, concepto al cual ya se hiciera referencia en el curso de este de-

bate. O sea que nos referimos al empleo de la totalidad del espacio y de los recursos humanos disponibles.

Esta concepción de la defensa nacional total se encuentra en cierta forma vinculada —y aun subordinada— a la circunstancia de la guerra, entendiendo por tal el fenómeno político del enfrentamiento armado. Dentro del contexto en el que nos estamos manejando —el de la defensa nacional total—, la preparación se limita exclusivamente a estar prevenidos para la guerra. Sin embargo, más que la preparación para la guerra deben preocuparnos los esfuerzos que en forma permanente estamos realizando en tutela de los intereses vitales de una comunidad en tiempos de paz. Hablamos del tiempo de paz, que muchas veces ha sido definido como la ausencia de la guerra física pero que cada vez más se encuentra acosado por agresiones que son más letales cuanto más modernos y menos visibles son los medios empleados para su ejecución.

Ocurre que en la comunidad mundial moderna el poder militar ha sido sustituido paulatinamente por el empleo del poder económico, del poder político y del poder psicosocial, campos en los cuales la voluntad de las comunidades altamente desarrolladas se mueve con singular eficacia y con efectos devastadores sobre los intereses de todos aquellos que aun hoy creen ingenuamente que la paz existe mientras no haya guerra, y que la defensa es una consecuencia natural y espontánea de la prosperidad de un país.

El concepto de defensa nacional integral debe necesariamente sumar a los elementos de espacio y población, inherentes y característicos del superado concepto de defensa nacional total, el elemento tiempo, entendido como la ejecución permanente de políticas y estrategias cuyo protagonista natural es el hombre, pero no como futuro soldado sino como agente vital y consciente interesado en la defensa de los objetivos nacionales de una comunidad en tiempo de paz. De esta manera, la defensa nacional deja de ser una tarea específicamente militar para convertirse en una función en la cual necesariamente deben emplearse en forma prioritaria los medios políticos, económicos y psicosociales. Esto significa que pasa a ser una tarea compartida por todos y cada uno de los ciudadanos de un país.

Entonces, la defensa nacional constituye el patrimonio y la responsabilidad común de toda la ciudadanía mediante la inserción de su concepto en las conciencias individuales paralelamente a la existencia del interés particular. Para que esta transferencia pueda efectuarse de un modo efec-

tivo, legítimo y permanente, resulta imprescindible que el individuo una necesariamente a la fe en el destino nacional la total convicción de su pertenencia a un sistema político justo y eficiente que le permita desarrollar en plenitud sus aspiraciones básicas como hombre y como ciudadano.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: estamos en presencia de una nueva iniciativa. Tal como ha sido descripta por varios señores diputados preopinantes, se trata de una norma consensuada. Aparentemente y según mi ignorancia en el tema, una norma consensuada sería aquella que llega al Parlamento "cocinada" previamente, luego de conversaciones entre las dos primeras minorías. Luego se genera un debate formal, que no es más que eso, porque —como dije— ya está todo "cocinado" y no hay posibilidad de cambiar absolutamente nada.

Hubo quienes nos han descripto a aquellos que pensamos distinto como representantes de una ridícula minoría. Yo me pregunto si no es ridículo no comprender el gran cambio que se está operando en estos precisos momentos en la sociedad argentina. Basta ver los triunfos del liberalismo en las universidades, en donde estamos demostrando ser la vanguardia ideológica del país y ser capaces de dar una alternativa distinta, que ni el peronismo ni el radicalismo son capaces de ofrecer.

Por otro lado, debó decir que el orden constitucional está afortunadamente garantizado; la vigencia de las instituciones nacionales, como este Parlamento, así lo está demostrando. A pesar de la frase del señor diputado Toma en el sentido de que no hay fantasmas, pero que los hay los hay, justamente ese preconcepto ha imbuido a este proyecto de ley de una desconfianza tal que fractura el concepto de defensa nacional. Lo hace gravemente al pretender trazar una línea divisoria tajante entre lo que es una agresión externa y un conflicto interno.

Los liberales consideramos que los tres pilares fundamentales de la República son la división de poderes, el límite del poder y el federalismo. Sin temor a equivocarme, debo señalar que los liberales somos celosos custodios de que un poder no vaya más allá de lo que le corresponde, invadiendo el terreno de otro poder, porque ello constituye un avance sobre las garantías individuales que están consagradas en nuestra sabia Constitución Nacional.

Nosotros creemos que por medio de esta iniciativa se recorta una facultad importante del

comandante supremo de las fuerzas armadas, que no es otro que el presidente de la Nación. Al respecto nuestra Carta Magna establece que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la Nación; pero pareciera que algunos legisladores no están enterados de esto, porque pretenden recortar esas facultades por medio de este proyecto. Aparentemente ni siquiera parece haberse enterado cabalmente de su función el presidente de la República porque algunos días atrás, en oportunidad del ascenso de un oficial de la Armada de menor jerarquía, sugiere, en lugar de ordenar, su pase a retiro. Inclusive algunos legisladores intentaron inmiscuirse en una facultad exclusiva del presidente de la Nación en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, pretendiendo cuestionar en este mismo recinto el ascenso de ese oficial de menor graduación.

Señor presidente: creemos que éste es un tema trascendente para la Nación, y por lo tanto la ley que se sancione no debe tener el carácter de provisoria, que no yo sino otros legisladores que me han precedido en el uso de la palabra no han vacilado en asignarle. Hubo quien dijo que la modernización es una mentira, e incluso alguien que citó como ejemplo a nuestro padre de la patria, el general San Martín, cuando dijo que iba a importar cañones para combatir contra el enemigo. Esas palabras me parecen muy razonables como descripción poética de una hazaña de la que todos los argentinos nos sentimos sumamente orgullosos, pero entiendo que enviar a nuestras tropas al frente de batalla sin tecnología y sin capacidad operacional constituye un acto criminal por parte de aquellos que se ufanan en llamarse representantes del pueblo de la Nación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Duhalde). — Ruego a los señores diputados que respeten al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: yo me pregunto si las actuales condiciones en que se encuentran nuestras fuerzas armadas, sin municiones ni repuestos, y hasta sin combustible, no nos están colocando en este preciso momento en un grave estado de indefensión ante la posible agresión de una potencia extranjera.

También se ha manifestado que es injusto manipular políticamente el tema militar. En ese sentido, quisiera saber qué se ha hecho en estos cuatro años sino manipular en forma demagógica la cuestión militar. Sin embargo, ahora se nos

empuja a considerar rápidamente este proyecto de ley invocando una urgencia que no creo que sea tal.

Por otro lado, me pregunto qué tiene que ver el proyecto de ley de defensa con el proyecto de ley de asociaciones profesionales. Porque para ser honestos, señor presidente, debemos reconocer que este tema está muy enlazado con lo que sucede o, mejor dicho, con lo que no sucede en el Senado.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Alvarez Guerrero. — Señor presidente: las disidencias se han planteado con absoluta claridad en torno a la filosofía del proyecto de ley que estamos considerando.

El corazón de la discusión se ha desarrollado en función de los objetivos previstos en el proyecto y más precisamente en relación con el ámbito de acción de las fuerzas armadas y con el concepto de defensa nacional.

El problema de la intervención de las fuerzas armadas en la vida política e institucional de la Argentina y de otros países latinoamericanos deriva de la interpretación que se dé a esa posibilidad de intervención. En ese sentido, las líneas ideológicas han quedado perfectamente establecidas en este debate.

Hay sectores que han justificado y defendido la intervención de las fuerzas armadas en los reiterados golpes de Estado que interrumpieron la continuidad constitucional. Esta intervención de las fuerzas armadas es una experiencia que han vivido tanto nuestro país como otras naciones hermanas latinoamericanas.

Este proyecto de ley es producto de esa experiencia, de una experiencia histórica y dolorosa. Los golpes de Estado fueron instrumentados por sectores oligárquicos atados siempre a intereses internacionales con el propósito de derrocar gobiernos populares y progresistas.

Este es un proyecto de ley —en esto coincido con un diputado preopinante que pertenece a los sectores conservadores de esta Cámara y cuyo nombre no recuerdo— en el que se rechaza concretamente la doctrina de la seguridad nacional. No es un proyecto de represión ideológica; en él se impide —por supuesto desde el marco jurídico— la dolorosa interrupción de la continuidad constitucional producida por los reiterados golpes de Estado.

Hace pocos días tuve el honor de entregar el gobierno de mi provincia a un gobernador también elegido por el pueblo, y lo hice luego de haber cumplido con la totalidad del plazo establecido constitucionalmente. Este es un hecho

que en Río Negro se produjo por primera vez desde que se convirtió en provincia y que además no ocurría desde hace muchos años en el resto de las provincias argentinas. Esto es lo que queremos lograr, lo que en definitiva está en discusión esta noche.

La intención de mi intervención en este debate, que ciertamente es prolongado y en el que ya está todo dicho, se centra en dejar aclarados estos conceptos en la medida de lo posible. Digo esto en función de las expresiones vertidas por algunos distinguidos señores diputados que no apoyan el proyecto, precisamente por su filosofía. Me refiero concretamente a las intervenciones de los señores diputados Contreras Gómez y María Julia Alsogaray, que lamentablemente a esta altura del debate están ausentes.

Creo que las expresiones vertidas por esos distinguidos señores diputados merecen alguna reflexión por parte de la Unión Cívica Radical, justamente por el hecho de que ellas no constituyen manifestaciones aisladas, desvinculadas del contenido mismo del debate. Es decir que esas expresiones no son meras citas anecdóticas; por el contrario, implícitamente atacan los principios del proyecto en discusión.

Ayer se citaron algunos párrafos de un discurso pronunciado en este mismo recinto, durante el gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, por quien entonces era diputado nacional y hoy presidente de los argentinos: el doctor Raúl Alfonsín. Allí se hacía referencia al discurso pronunciado en West Point por el general Onganía.

Quiero encuadrar en las circunstancias históricas esta cuestión, porque de lo expresado por el señor diputado por Corrientes se pretende colegir que Raúl Alfonsín habría apoyado entonces la doctrina de la seguridad nacional y la lucha armada con la intervención de las fuerzas armadas contra las ideologías marxistas. En función de mi conocimiento de la historia y de la conducta del actual presidente de los argentinos esa conclusión es, a mi juicio, absolutamente arbitraria y —con el debido respeto que me merece el señor diputado por Corrientes— me parece absurda y hasta falaz.

En su momento, el discurso de Onganía en West Point fue visto con beneplácito por buena parte de la conciencia democrática argentina, no por quien lo dijo sino por su contenido y por las circunstancias históricas en que se realizó. El aspecto sustantivo del discurso de Onganía no fue la exposición de la doctrina de la seguridad nacional. Por aquella época esta doctrina no estaba explicitada ni elaborada acabadamente. Lo que mereció beneplácito fue, en cambio, la clara posición del general Onganía en cuanto

al sometimiento de las fuerzas armadas de las naciones latinoamericanas al poder civil, al Estado constitucional de derecho. Estábamos viviendo en la década del 60; los países latinoamericanos hacían un nuevo intento por consolidar procesos democráticos y progresistas. Lamentablemente, aquellas experiencias comenzaron a frustrarse luego del asesinato del presidente Kennedy.

También se hacía referencia en aquella oportunidad a la necesidad que tenían nuestros países de defenderse contra la amenaza cierta, clara y explícita de la exportación de la revolución cubana, que por entonces constituía una tesis claramente manifestada, una doctrina política del gobierno marxista-leninista de Cuba. A eso se refería el general Onganía y sus expresiones fueron recibidas con simpatía por muchos de los hombres democráticos del continente. Era la primera vez que un general explicaba con claridad este sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil y democrático en un país latinoamericano. Sin embargo, la hipocresía del discurso de Onganía quedó claramente acreditada cuando poco después se alzó en armas contra el más puro gobierno democrático, defensor de las libertades públicas del individuo: el gobierno constitucional de la Unión Cívica Radical, que presidía Arturo Illia.

Alfonsín fue el primer preso político de la dictadura profascista y corporativista de Onganía, quien desdijo en los hechos el discurso de West Point. Siendo presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires —cuyo secretario era mi correligionario, el distinguido señor diputado Zubiri, que tan brillantemente expuso la esencia del proyecto de ley que estamos debatiendo—, y desde las páginas de aquel baluarte de la democracia y de las libertades que fue "Inédito", Alfonsín defendió la posibilidad de la recuperación democrática.

Es falaz, absurdo y falso querer vincular a este hombre que prestigia la democracia de los argentinos con la doctrina de la seguridad nacional, concepción que combatió siempre con las palabras, los hechos y toda su conducta.

También vale la pena rescatar algunas expresiones de la señora diputada Alsogaray que van al fondo de las cuestiones que hoy se debaten y de las distintas filosofías explicitadas en el recinto. Su intención oblicua de asimilar la represión de los alzamientos maximalistas producidos durante la llamada Semana Trágica con la filosofía de la seguridad nacional practicada durante el gobierno de Yrigoyen es falaz y revela ignorancia de los hechos históricos y de la historia

En aquel entonces se vivían otras experiencias, ya que eran distintas las circunstancias sociales y políticas. Era aquél el primer gobierno electo por el voto popular; era el nacimiento de la democracia en la Argentina; era la primera expresión que representaba la soberanía del pueblo; era la existencia legal del socialismo, aún no dividido en Primera y Segunda Internacional.

Esa filosofía no puede ser asimilada al maximalismo que produjo los hechos de aquella Semana Trágica. El maximalismo era la expresión del terrorismo anarquista y nada tenía que ver con el marxismo. Por el contrario, el maximalismo era antimarxista. En aquellos años, no era ni siquiera imaginable la sanción de un proyecto de ley como el que hoy debatimos, porque esta iniciativa es el resultado de la experiencia de los años trágicos de las últimas dictaduras, de la interrupción permanente de los gobiernos populares, democráticos, progresistas, liberadores y emancipadores de nuestra Latinoamérica.

Es necesario señalar la coherencia que tienen estos defensores de la doctrina de la seguridad nacional para citar los acontecimientos de la Semana Trágica, ocurridos durante un régimen democrático, y omitir siempre prolijamente la mención del golpe de Estado nazifascista del 6 de septiembre de 1930, que quebró la continuidad constitucional e inició la etapa de la crisis estructural de la democracia en nuestra Argentina. Es claro que quienes hacen referencia a estas doctrinas y las defienden, en el fondo las interpretan como un modo de justificar los golpes de Estado militares, reaccionarios y oligárquicos, que usaron a las fuerzas armadas de la patria como un instrumento para defender intereses espurios, totalmente ajenos a los anhelos populares.

Nosotros los radicales no somos marxistas. Nos aleja desde luego de esa doctrina la concepción materialista y economicista que constituye la base misma de la dialéctica materialista del marxismo y que también forma parte de este neoliberalismo que poco tiene de liberal, ya que se fundamenta en una visión economicista del ser humano y que en estos últimos tiempos parece abalanzarse sobre la cultura de los argentinos.

Hipólito Yrigoyen conformó una doctrina que nacía de una concepción ética humanista. No era antimarxista ni antiliberal, como los radicales no somos ni antiperonistas ni antiliberales. Yrigoyen gobernaba con todos y para el bien de todos. Yrigoyen fue el propulsor de una auténtica unión nacional, esa unión nacional que todos estamos reclamando y que constituye el sustrato espiritual indefectible que tenemos que

alcanzar los argentinos para recuperarnos de tantos años de decadencia, retroceso y crisis.

Ayer, el señor diputado Conrado Storani, al terminar su exposición sobre las particularidades jurídicas de este proyecto de ley, citó una expresión que formulara Hipólito Yrigoyen —vale la pena recordarla— en una comunicación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, una expresión cuya belleza formal es tan admirable como la profundidad sintética de su contenido: “Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos”. Esta es la concepción ética esencial que fundamenta nuestra idea del sistema democrático y de la unión nacional, nuestra visión del respeto y la tolerancia por quien resulte adversario circunstancial —porque en una democracia no hay enemigos sino sencillamente adversarios circunstanciales—. Valía la pena reiterar esta noche esa expresión estampada para los tiempos por el radicalismo de Hipólito Yrigoyen como la mejor manera de desagraviar la conducta, la concepción y la permanente lucha ciudadana de la Unión Cívica Radical y de sus hombres.

Resulta claro entonces que no estamos a favor de ninguna forma de represión ideológica; que éste es un proyecto de ley que se opone a la doctrina de la seguridad nacional, porque nos manifestamos permanentes luchadores por la dignidad humana y contra los golpes de Estado reaccionarios y antidemocráticos que tantas veces se han producido en nuestra crítica historia institucional.

Han quedado definidas las líneas de este debate. Hay quienes están con los procesos militares y justifican los golpes de Estado —lo dicen implícita o explícitamente—, y hay quienes estamos por las causas populares, democráticas y progresistas, quienes defendemos la democracia como instrumento y como fin. Esto ha quedado de manifiesto en este debate.

Por eso esta noche las grandes corrientes populares votarán afirmativamente este proyecto de ley de defensa nacional, en contra de cualquier intento que en el futuro pretenda que nuevamente las fuerzas armadas sean utilizadas, con la excusa de una conmoción o conflicto político interno, para llevar a cabo golpes de Estado en nuestra Argentina y en Latinoamérica. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Lestelle. — Señor presidente: las posiciones expuestas en el debate sobre este importantísimo proyecto de ley que enmarca un sistema de conducción política de las fuerzas armadas han

reflejado esta noche lo que es la realidad de nuestro país: por un lado, una mayoría numerosa que representa al 93 por ciento de nuestra población y, por otro, una microminoría liberal, sorda, que representa un 7 por ciento. Esto nos define un principio de democracia elaborada y defendida por todos nosotros.

Pero la ocasión es propicia para rememorar algunos hechos, en virtud del desafío que acaban de hacer los representantes liberales para que hablemos claro, con cristalinidad y transparencia. Quisiera recordarles, en primer lugar, que tienen representación en esta Cámara desde hace cuatro años, por medio del señor diputado Alsogaray, quien tuvo suficiente tiempo para elaborar un proyecto de ley más perfecto que éste.

En segundo lugar, quisiera que tengan en cuenta algunos aspectos puntuales que han mencionado en el día de ayer: esto es, la diferenciación que la señora diputada Alsogaray hiciera entre pueblo y ciudadano. Nosotros somos pueblo; nos presentamos como tales. No nos interesa hablar de ciudadanos pensando exclusivamente en la búsqueda de votos. Somos hijos de un pueblo que tiene callos en las manos por trabajar por esta democracia que tanto nos ha costado conseguir, y no callos en los nudillos por golpear a las puertas de los cuarteles.

En el día de ayer la señora diputada Alsogaray hizo referencia a sus antepasados y habló de sus tatarabuelos. Nosotros preferimos decir que somos tataranietos de criollos perseguidos por tatarabuelos que ya en aquella época respondían al colonialismo inglés. También queremos manifestar que somos hijos de un pueblo, no hijos de estancieros que emplean a ese pueblo pagándole un salario que quizá es la tercera parte del valor de algunos “modelitos” que se lucen en esta Cámara y que desfilan permanentemente delante nuestro; y por si ese sueldo fuera mucho, a los paisanos que emplean les descuentan el precio de los vicios: el pan, la yerba y el azúcar. Nosotros somos pueblo, señor presidente, y quizá por ello nos hemos puesto de acuerdo alrededor de un proyecto de tanta trascendencia.

Esa podrá ser la razón por la que esas minorías no alcanzan a entender este tipo de acuerdos. Debemos hacernos a la idea de que antes estas concordancias entre radicales y peronistas, intransigentes y demócratas cristianos, seguirán intercalándose entre nosotros.

Estos sectores minoritarios tienen cierta particularidad: en la democracia buscan votos y a veces “ligan” alguna diputación, y en los gobiernos

de facto buscan botas, y a veces logran de regalo alguna gobernación o ministerio. (*Aplausos.*) Nosotros somos pueblo.

Pero como bien señalara ayer el señor diputado Alende, vayamos al presente. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo para elaborar este proyecto? Digamos las cosas como son: no hay sistema democrático ni proyecto político que puedan ser llevados hacia adelante si ese proyecto político, precisamente, no tiene la valentía de conducir a las fuerzas armadas. Esta es la idea que el 21 de octubre de este año manejó el peronismo en ocasión del análisis del dictamen de minoría que íbamos a confeccionar cuando llegase a esta Cámara el proyecto de ley de defensa. Entre otras cosas, en ese despacho solicitábamos que el proyecto volviera a comisión a efectos de procurar la formulación de una nueva iniciativa, consensuada, con la participación de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores y del Ministerio de Defensa. Fue entonces cuando pensamos en elaborar una propuesta, ya que nos dijimos: "si estamos decididos a debatir esto en la Cámara, conversemos a efectos de lograr un consenso alrededor del proyecto". Aquí se inicia esta historia, de la que el señor diputado Jaroslavsky es testigo.

El 21 de octubre decidimos hablar con el citado señor diputado a efectos de hacerle esa propuesta. Se trataba de un desafío grande, pero desafío al fin; un desafío que hacía cuatro años que estábamos esperando, y que necesitaban tanto la patria como el sistema democrático. Así fue: el señor diputado Jaroslavsky consideró la iniciativa como muy buena, la conversó con el señor presidente de la Nación, y luego comenzaron a realizarse una serie de reuniones inorgánicas pero amistosas, en el convencimiento de que debíamos acordar, porque no había más tiempo que perder; y lo logramos.

Paulatina pero rápidamente, a estas charlas se incorporaron las fuerzas populares y nacionales del país. Como es lógico —justo es reconocerlo—, no creímos interesante incorporar a las minorías, porque sabíamos que en la democracia vienen a buscar votos, y en los gobiernos de facto, botas. Sabíamos que iba a ser pernicioso. Esta es la pura verdad.

Aquí se inicia una historia que va a culminar dentro de pocos minutos, cuando una ley de defensa nacional postergada, aunque ansiada y necesitada para la consolidación del sistema democrático, sea sancionada. Se tratará de una ley que podrá ser perfeccionada por otra, y así los señores de las minorías liberales sordas tendrán oportunidad de oírlos en cuatro, seis, ocho o

más años; éste es el plazo que tendrán gracias a la vigencia del proyecto de ley que sancionaremos.

Por parte de los señores liberales hay una gran preocupación por la pérdida de autoridad que representa para el Poder Ejecutivo nacional la sanción de esta iniciativa. No tienen en cuenta al Parlamento. Por supuesto, en los gobiernos de facto lo primero que desaparece es el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial siguen funcionando; pero eso no les preocupa.

No cabe duda de que los constituyentes quisieron que el poder, la composición y el reclutamiento de los efectivos militares, como asimismo el comportamiento de los integrantes de las fuerzas armadas, tanto en tiempo de paz como de guerra, estuvieran bajo la supervisión de este Congreso Nacional y del presidente de la Nación.

Once cláusulas constitucionales establecen con claridad lo anteriormente mencionado. Tal hecho se verifica ante las dudas de los señores liberales.

Por el artículo 67 inciso 26 de la Constitución Nacional se establece como facultad del Parlamento declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior. En el inciso 15 del mismo artículo se faculta al Congreso de la Nación para proveer a la seguridad de las fronteras. Por el inciso 21 —siempre refiriéndome al mismo artículo de la Constitución Nacional— se faculta al Poder Legislativo para autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz. También en el artículo 67, inciso 23, se faculta al Congreso para fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. Finalmente, por el inciso 25, se faculta al Parlamento para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.

Es de destacar que por cierto la Cámara de Diputados tiene exclusividad en la iniciativa de leyes concernientes al reclutamiento de tropas, tal como lo prescribe el artículo 44 de la Carta Magna.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 86, inciso 15, la supremacía del poder político y constitucional está plenamente asegurada en el ejercicio que desempeña el señor presidente de la Nación como comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra; además, por el inciso 16 del artículo comentado el primer magistrado de la República tiene la facultad de proveer los empleos militares, con acuerdo del Senado en la concesión de los grados de oficiales superiores del Ejército y Armada.

Otras atribuciones del Poder Ejecutivo están establecidas en otros incisos del artículo 86 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, por el inciso 17 puede disponer de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación: por el inciso 18, declara la guerra; y por el inciso 19 declara en estado de sitio uno o varios puntos del territorio nacional en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado.

Estas son las facultades que aseguran la supremacía civil sobre las fuerzas armadas. Su ejercicio debe tener como objetivo la defensa nacional, asegurando la estabilidad, lo que conlleva a una correcta y acertada inserción del elemento militar en la vida civil. Se trata de una convivencia que establece que el Congreso, mediante la sanción de este proyecto, ha encontrado la manera de decir a las fuerzas armadas qué deben hacer en tiempo de paz, y cómo deben prepararse para las hipótesis de conflicto, no deseables pero tampoco subestimables.

Este proyecto que hoy debatimos creo que ha acertado en el diseño de un eficaz sistema de defensa nacional. Queremos destacar que, por primera vez, el Consejo de Defensa Nacional es integrado por seis miembros de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras del Congreso. Este Consejo de Defensa Nacional estará así compuesto por legisladores de la oposición. El organismo asistirá y asesorará al presidente en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, y en la adopción de las estrategias a seguir.

La clave es su carácter político y civil y asegura una conducción política en la maquinaria bélica del Estado. Es decir que se da la pauta de que las hipótesis de conflicto serán encaradas con un criterio político, no militarista —como ocurrió en el pasado— ni para exportar represión o establecer en el país doctrinas foráneas como la de la seguridad nacional.

Esto asegura que la política de seguridad nacional será pluripartidista; será —es de desear— de la sociedad política en su conjunto y no de un feudo secreto del partido que gobierna. Al respecto es importante recalcar que las cuestiones relativas a la política interna no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militar, de lo que tanto se ha abusado en el pasado.

Este proyecto de ley no sólo sirve para prevenir conflictos bélicos o actuar en el caso de que ellos se produzcan, sino también para prever que la defensa civil ha de actuar para anular o dis-

minuir los efectos de desastres naturales, tales como inundaciones, terremotos, etcétera. Este es un buen principio solidario, con más de cuarenta años de vigencia, que reitera nuestro proyecto.

Para que una nueva política nacional de defensa sea coherente, el Consejo de Defensa Nacional ha de elaborar los importantes anteproyectos de las leyes orgánicas de las fuerzas armadas, como lo indican los artículos 45 y 46, donde se incluyen entre otras la de producción para la defensa —lo que indudablemente coadyuvará para movilizar la alicaída economía nacional— y todo lo concerniente a los regímenes educacionales militares.

No quiero terminar sin antes recordar que nosotros —los justicialistas— podemos dar en esta materia el ejemplo de nuestro líder. El presidente Perón, como mandatario civil, ejerció los resortes del poder constitucional que acabamos de enumerar. Fue comandante en jefe pero no desempeñó el poder como general de Ejército que era; lo ejerció como jefe de Estado, y la ecuación de mando y obediencia que se dio en sus tres gobiernos colocó al factor militar en el lugar que le correspondía en la sociedad política. Para la seguridad interna usó las fuerzas de seguridad; jamás utilizó al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea para sojuzgar o reprimir al pueblo, aunque tuvo que sufrir con él que jefes rebeldes usaran esas fuerzas contra el poder constitucional que representaba.

Ahora rescatamos el papel que Perón dio a las fuerzas armadas, el de brazo armado de la Nación, para asegurar la independencia y capacidad de autodeterminación, tal como lo propone este proyecto de ley, y para la protección de la vida y los bienes de los argentinos, destinatarios de los beneficios que esta norma puede y debe dar al país.

Muchos errores se han cometido y ya no hay margen para repetirlos. Cada uno de nosotros, es decir, cada argentino, tiene que seguir a rajatabla el libreto que la Constitución y esta norma nos asignan. Olvidarlo generaría nuevamente conflictos innecesarios, quizás guerras inútiles, cuyo fresco y desgraciado recuerdo nos obliga a todos por igual a construir una sociedad en la que cada argentino sepa que sus derechos terminan donde comienzan los de los demás, en un marco de respeto mutuo como base fundamental para la recuperación de la patria que todos queremos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Manrique (L. A.). — Señor presidente: brevemente deseo señalar que en realidad he que-

dado sorprendido luego de escuchar a la autotitulada novel vanguardia ideológica del país. Todo lo acaecido en la reunión del día de la fecha nos lleva a pensar sin ninguna duda que, tal como lo manifestaron los señores diputados Alvarez Guerrero y Lestelle, aquí las aguas se dividen con bastante nitidez.

Los argumentos fundantes de esta supuesta, pretendida y autotitulada novel vanguardia ideológica transitan caminos que yo calificaría como antagónicos, ubicados en las antípodas de su propio pensamiento político. Aquí se ha señalado muy bien y con sobradas razones que este proyecto de ley termina definitivamente con la doctrina de seguridad nacional. No voy a extenderme en esta cuestión, pero creo que si observamos esta iniciativa desde la óptica que esbozó el señor diputado Lestelle —la del pueblo, los hombres y mujeres que lo integran—, esta norma constituye efectivamente el rescate casi a ultranza de las libertades públicas. Esta iniciativa no es censora ni represora; por su intermedio no tendremos nunca más miedo a ser perseguidos o detenidos, o quizá carecer de la posibilidad de acceder a un cargo público por abrazar alguna idea.

Extrañamente, quienes esgrimen la bandera de la libertad hoy vienen a cuestionar este proyecto de ley justo por los aspectos referidos a la libertad de los hombres y mujeres que integran nuestro pueblo. ¿Qué más podemos hacer hoy los legisladores que ampliar el marco de libertades públicas que ya nos brinda la democracia, sabiendo cierta y definitivamente que nunca más un organismo de seguridad de las fuerzas armadas podrá penetrar en el interior de nuestras conciencias?

Esta novel vanguardia ideológica vuelve a caer en su historia: liberal en lo económico, o sea, una suerte de darwinismo salvaje para nuestros hombres; y autoritaria en lo político, cuando se trata de libertades públicas. Paul Samuelson decía —y nadie puede dudar aquí de la filiación ideológica de quien cito— que estas concepciones, bastante frecuentes en nuestro continente americano, no son auténticamente liberales, sino que él las llamaba —y creo que con razón— una suerte de fascismo de mercado. Considero que eso es a lo que hemos asistido hoy, porque nadie puede pedir coherentemente que pase a comisión un asunto que ha sido tratado largamente por este Parlamento y que constituye una de las asignaturas pendientes que tiene la democracia, tal como lo señaló el señor diputado Toma en su intervención. ¶

Nadie puede soslayar hoy los mecanismos de consenso de la sociedad y de los sectores políti-

cos; en la actualidad son realmente la vanguardia ideológica de esta sociedad.

Entonces, por entender que efectivamente esta iniciativa extiende el marco de las libertades públicas de los hombres y mujeres que integran nuestro pueblo; que viabiliza el consenso como un mecanismo válido y apto; que sin soslayar en absoluto los resortes institucionales pueden poner en funcionamiento el andamiaje institucional que necesita el país, y que en democracia la sociedad civil puede rendir y aprobar esta asignatura pendiente que tenía en sus fuerzas armadas, es que con fervor vamos a votar favorablemente este proyecto de ley de defensa nacional, dejando que la historia juzgue y destine al rincón más olvidado a estas autotituladas vanguardias ideológicas que hoy se presentan en el Parlamento haciendo uso de diatribas que quizás no sean pertinentes en el ámbito del deal República. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Clérici. — Señor presidente: sólo diré aquí breves palabras, pues cada uno de nosotros tiene su interpretación de las concepciones de los demás, sus propias concepciones y un estilo particular para expresarlas. En este ámbito en el que reiteradamente se ha planteado la necesidad de convenir la instrumentación de políticas nacionales, quiero proponer la posibilidad de un acuerdo mínimo que de aquí en más permita que nos entendamos mejor. Esa base deberá comprender el entendimiento de que todos —reitero: todos— los que estamos sentados en este recinto nos encontramos irrevocablemente comprometidos con la democracia en la Argentina; todos —reitero: todos— quienes estamos sentados en este recinto somos representantes del pueblo y no de un sector en particular; todos —reitero: todos— quienes estamos sentados en este recinto procuramos lo mejor para nuestro país, para nuestro pueblo, para las libertades y para las instituciones, y lo único que nos diferencia es que buscamos por distintos caminos y métodos asegurar los objetivos supremos que todos compartimos. Sé que algunos los plantean de una manera y otros de otra, pero en la medida en que aceptemos la posibilidad del acuerdo al que me he referido podremos, en el marco del pluralismo y de la disidencia, seguir avanzando hacia los objetivos que todos compartimos.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiri. — Señor presidente: simple y brevemente deseo hacer algunas reflexiones sobre todo lo que se ha dicho durante este largo de-

bate en torno del proyecto de ley de defensa nacional, pero no para recoger agravios ni mucho menos para inferirlos.

Alguna vez Ricardo Balbín dijo que juzgaba la lealtad de los demás de acuerdo con su propia lealtad. En ese sentido, creo que quienes coincidieron y aquellos que discreparon lo han hecho con honradez y lealtad, tratando de servir a los intereses de la República.

Sin embargo, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, e interpretando quizá a algunos otros legisladores que no pertenecen a él, no puedo guardar silencio ante algunas cosas que se han dicho en este debate.

Se ha dicho que este proyecto es el fruto del apresuramiento y de la improvisación y que responde a la necesidad de una convivencia política o de un maridaje espurios. Yo creo que no es así. Entiendo que no hay improvisación ni apresuramiento y que no es un proyecto tratado entre gallos y medianoche.

El Parlamento argentino tiene conocimiento de este proyecto desde 1984, año en que fue remitido a la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara, y ha recibido dos sanciones legislativas: una de la Cámara de Diputados de la Nación y otra del Senado, que fue modificatoria de la precedente, aunque los principios siempre fueron más o menos los mismos, por no decir exactamente iguales. Me refiero a los grandes principios en los que se inspiró el actual proyecto, es decir, su esencia y filosofía. Esta iniciativa se sometió a estudio de la Mesa del Consenso. Es cierto lo que ha dicho el señor diputado por Corrientes en el sentido de que allí no se analizó su texto, porque ello habría importado trasladar a tal sede facultades propias del Parlamento argentino. Lo que se estudió fue la necesidad de cumplir con el mandato constitucional de proveer a la defensa común y la de sancionar este proyecto.

En esa Mesa del Consenso fui testigo de que se proveyó del texto completo del proyecto a todos los que allí participaron, que fueron muchos de los que aquí intervienen. Entonces, nadie puede alegar desconocimiento y mucho menos que en la Comisión de Defensa no se dio lectura del proyecto, porque si esto no se hizo fue a pedido de un diputado que dijo que se trataba de algo que todos conocíamos, lo cual es cierto. Las diferencias o discrepancias no se relacionaban con un artículo menudo sino que eran cuestiones de fondo, esenciales, relativas a distintas ideologías.

Por otra parte, todos los que aquí hablaren, tanto a favor como en contra del proyecto, demostraron un acabado, circunstanciado y preciso conocimiento de su texto. Por eso es que no se puede decir simplemente y de manera liviana que

se trae al debate un proyecto que es el fruto de la improvisación y el apresuramiento o de un maridaje trabado entre gallos y medianoche.

Tampoco se puede decir —como lo ha hecho el diputado Alsogaray— que este proyecto encubre un debate de fondo y que es una cuestión accesorio. ¿Cómo va a ser una cuestión accesorio el proyecto de ley de defensa de la Nación? ¿Cómo va a ser accesorio un proyecto que determina las competencias precisas de los jefes de los Estados Mayores de cada arma, del jefe del Estado Mayor Conjunto, del mismo Estado Mayor Conjunto y del presidente de la República?

Es cierto que esto ya lo dice la Constitución Nacional, pero también lo es que no había un texto legal que encuadrara jurídicamente el sistema de defensa, que determinara con precisión las facultades de cada uno de sus integrantes y mucho menos que estableciera con absoluta certeza cuáles deben ser las funciones del Estado Mayor Conjunto.

No voy a abundar en estas reflexiones, pero queda claro que no se puede decir que se trata de una cuestión circunstancial, menuda ni accesorio. Teniendo en cuenta todo lo que aquí se ha dicho es cierto que el señor diputado Alsogaray contribuyó fundamentalmente a sincerar este debate. El diputado Alsogaray estableció la línea divisoria entre dos concepciones de la vida nacional; yo diría entre dos ideologías de la vida nacional: por un lado, la del campo popular, y por el otro, la de uno al que adrede no voy a nombrar porque no quiero utilizar calificativos.

Por eso es cierto que se sinceró el debate. Por ende, nosotros venimos a decir algunas cosas fruto de ese sinceramiento, tal vez porque quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere.

Esta noche y en este recinto hemos escuchado la reivindicación de la metodología del terrorismo de Estado y la de los métodos más bárbaros, más crueles y más perversos que haya soportado la República Argentina en toda su historia. Antes hubo otras dictaduras, otros cercenamientos de la libertad y quizás hasta algún crimen; pero nunca jamás hubo un régimen que negara la propia dignidad del hombre, como el que soportó la República a partir del 24 de marzo de 1976. (Aplausos.)

Quienes participamos de este debate pretendíamos que tuviera un nivel elevado. Ello aconteció en las exposiciones de muchos de los señores diputados, así como en la del señor diputado Clérici, cuyas observaciones —que no compartimos— contribuyeron a mantener aquel nivel. Pero también, como ya he dicho, tuvimos que asistir a la reivindicación de un terrorismo de Estado que no es cierto que produjera sólo algu-

nos hechos aislados, algunos excesos cuyo repudio también es compartido por el señor diputado Alsogaray. Tales excesos fueron la entraña y el corazón de la propia filosofía que lo alentaba.

Aquí se habló de un decreto firmado por Luder. Yo mismo tuve oportunidad de referirme a él cuando hace cuatro años se debatió en este mismo recinto la derogación de la llamada ley de autoamnistía. Quizás la terminología utilizada en ese documento, que hablaba de aniquilar la subversión, no era la más adecuada; pero tenía un sentido preciso en términos militares. Aquel decreto no decía que se podía secuestrar, torturar y asesinar impunemente en la República.

Como si esto fuera poco, como si no bastara con reivindicar una metodología que en definitiva apeló a los mismos recursos de la que pretendió combatir, hemos escuchado la revalidación absurda de la dictadura chilena, que afrenta la dignidad de los hombres libres de América y del mundo, al igual que la reivindicación de la lucha contra la autodeterminación del pueblo de Nicaragua.

Por eso afirmo que la intervención del señor diputado Alsogaray ha sido útil, pues ha contribuido a que dividamos bien las aguas. Mientras que éste reivindica esa metodología de la lucha contra la subversión, yo reivindico aquí al pueblo argentino y a la justicia que lo protege, una justicia independiente que puso detrás de las rejas a los responsables del drama argentino. *(Aplausos.)*

Además —si se me autoriza la digresión— con el mismo derecho que el diputado Alsogaray reivindica al presidente de los argentinos, quien tuvo el coraje necesario para firmar el decreto por el que se procesó a los responsables de esa dictadura sangrienta que padeció la República. *(Aplausos.)*

Se dijo también aquí que este régimen no contempla entre las hipótesis de conflicto al conflicto interno. Segundo craso error, porque el proyecto no determina hipótesis de conflicto, ni interno ni de otro tipo. El proyecto establece un organismo, el Consejo de Defensa Nacional, que asesora al presidente de la Nación, quien es en definitiva el que determina las hipótesis de conflicto. Este proyecto no determina hipótesis de conflicto alguno. A lo sumo instaura un mecanismo de asesoramiento al presidente de la República.

Contesto del modo siguiente los cuestionamientos que se hacen sobre la integración de dicho organismo. Si en el título destinado a las disposiciones transitorias decimos que el Consejo de Defensa Nacional tiene entre sus funcio-

nes primordiales la elaboración de anteproyectos legislativos en temas tan vitales como el servicio militar, la producción para la defensa, el sistema nacional de información e inteligencia y el secreto de Estado, ¿cómo no iban a formar parte de él los legisladores? ¿Cómo puede cuestionarse esto cuando una de las funciones primordiales de ese organismo es precisamente contribuir a la legislación sobre temas vinculados a la defensa?

Es cierto sí que el proyecto no contempla ninguna hipótesis de conflicto y excluye expresamente las hipótesis de conflicto interno. Y no es que seamos ingenuos, no es porque no creamos que pueda existir un rebrote subversivo en el país. Pero tendría que darse la condición adicional de que superara a las fuerzas de seguridad de la Nación. En mi primera intervención en este debate mencioné números sobre estas fuerzas de seguridad y no los reiteraré ahora. Pero además se ha omitido prolijamente —cuidadosamente, diría, señor presidente— la mención de cláusulas constitucionales que hacen que el país no pueda caer en estado de indefensión. Me refiero a los incisos 15 y 17 del artículo 86 de la Constitución Nacional, que facultan al presidente de la Nación para disponer de las fuerzas armadas cuando lo considere prudente y necesario.

Aquí se ha hablado también mucho del derecho comparado. ¿Cómo se combate la subversión y el terrorismo en otras latitudes, en otros pueblos? ¿Cómo combate Francia la Acción Directa? ¿Cómo combate España al ETA? ¿Cómo combate Italia a las Brigadas Rojas? ¿Cómo combate Alemania a los grupos de Baader-Meinhoff? Estos países combaten a las organizaciones terroristas con fuerzas de seguridad especialmente adiestradas, posibilidad que aquí habrá que contemplar cuando tratemos la futura ley de paz interior o de seguridad interior. Pero se trata siempre de fuerzas de seguridad —Carabineros, Gendarmería, Guardia Civil, etcétera—; no se trata nunca de las fuerzas armadas en operaciones. No descarto la posibilidad de su intervención en un caso extremo. Lo que descarto es la inclusión de esta posibilidad en el texto de la ley, porque podría ocurrir que algún desaprensivo —que seguramente no será este presidente— se valiese de esta posibilidad abierta en el país para hacernos volver a los planes Conintes interpretando que una protesta obrera, por ejemplo, es un conflicto interno. Tendríamos entonces de nuevo a las fuerzas armadas en la calle, reprimiendo las protestas obreras o los conflictos gremiales. Nosotros no estamos dispuestos a que esto ocurra de nuevo en

la República, porque no hace tanto que ocurrió para desgracia de todos los argentinos.

Es cierto también que es distinta la organización, el despliegue y el entrenamiento de las fuerzas armadas según tengan que combatir enemigos externos o internos. Nosotros queremos fuerzas armadas preparadas para enfrentar al enemigo externo. Al enemigo interno, llegado el caso, se lo combate de la misma forma en que se hizo en otros países del mundo, que no son ni más ni menos importantes que nosotros. Es decir que no hay un solo argumento que haya abonado la necesidad de reinstaurar en el país la doctrina de la seguridad nacional.

Se habló también de las funciones de la inteligencia. Al señor diputado Zaffore le preocupaba sobremanera que las fuerzas armadas no puedan realizar tareas de contraespionaje, por ejemplo. Y esto no es así, por lo que puede quedarse tranquilo el señor diputado. Estas tareas podrán ser realizadas por los servicios de inteligencia de nuestras fuerzas armadas, porque el contraespionaje y el contrasabotaje no pueden ser nunca hipótesis de conflicto interno, ya que siempre están referidos a cuestiones de origen externo, como lo prueba incluso la actuación de los servicios de inteligencia en la ciudad de Mar del Plata, en el caso de espionaje chileno.

Además, es cierto que el proyecto dice —porque así expresamente lo hemos establecido— que está prohibido a los organismos de inteligencia realizar este tipo de tareas o producir inteligencia... Así se dice en todo el mundo, señor diputado Alsogaray: “producir inteligencia”. Decía que a esos organismos les está vedado producir inteligencia respecto de la política interna del país, aunque no en cuanto a las cuestiones externas.

Creo que se ha confundido la inteligencia estratégica nacional con la inteligencia específica militar —son dos cuestiones totalmente distintas—, y mucho más con la inteligencia interna.

Tampoco se trata de condenar al país a la indefensión. Nadie dice que la democracia tenga que ser un sistema indefenso en materia de seguridad interna. Hasta el momento existe el Servicio de Informaciones del Estado que cumple —creo yo— acabadamente con estas funciones.

Para terminar, quiero decir que de todo lo que hemos escuchado nada nos ha convencido de que éste no sea un buen proyecto de ley, pues él erradica de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional.

No queremos más custodios ideológicos del pensamiento de la sociedad argentina. Queremos custodios de la integridad territorial de la

República. Queremos que las fuerzas armadas sean los custodios de la soberanía nacional y no del pensamiento de sus conciudadanos.

Por estas razones recomiendo fervientemente el voto afirmativo para este proyecto de ley de defensa nacional. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: después de un largo debate nos aprestamos a votar un proyecto de ley de defensa nacional que, como ha manifestado la mayoría de los diputados preopinantes, tiene base consensual, lo cual constituye una de las contribuciones políticas más importantes en la nueva situación que vive la Argentina. Pero otros han hecho referencia a esa base consensual como si en lugar de ser un mérito en la sanción de este proyecto fuera, por el contrario, una mácula. Creo que es precisamente de esto de lo que hay que hablar; de cuánto nos falta a los argentinos —especialmente a algunos— para aprender a vivir en esta Argentina en la que se terminaron los patrones.

En esta Argentina que ha abandonado las etapas fundacionales se está iniciando la construcción de la razón, y en lugar de verterla hay que construirla. A veces me resulta penoso observar cómo algunos siguen vertiendo la razón, y lo hacen porque viven en un país que es una suerte de cine continuado, que empieza cuando ellos llegan.

Este es un país lleno de historia y de dolor. Se trata de una historia dolorosa que ha signado nuestra cultura y nuestras generaciones. En este sentido, de mi generación ya no hay exponentes en los planos trascendentes de la vida nacional: unos murieron, otros se exiliaron y la mayoría se “borró”. La manera de ver las cosas está relacionada con el lugar donde nos encontramos en esa historia dolorosa.

Las capuchas de tela son distintas según se las mire del lado del revés de la tela o de la parte de afuera. Los que la vieron de adentro, del lado del revés y a oscuras, piensan que hay que sancionar un proyecto de ley de defensa para recuperar a las fuerzas armadas. Los otros, quienes la vieron de afuera, sostienen que hay que salvar a las fuerzas armadas del agravio.

Entonces, ante estos razonamientos tan dispares, venimos a sancionar un proyecto consensuado, que tiene mucho que ver con lo que piensan los que estaban debajo de la capucha, y no hay duda de que ese pensamiento es el de la mayoría del pueblo argentino.

Nosotros vivimos en un país en el seno de cuyas fuerzas armadas hay oficiales que explican como necesario el interrogatorio coercitivo, porque sin él no habría manera de obtener información como consecuencia de las irregularidades de las acciones del ejército oponente, de la falta de código de guerra, y que en iguales circunstancias habría que volver a hacer uso de ese interrogatorio. Como el interrogado muchas veces es un profesional preparado para el interrogatorio coercitivo, hay que hacer uso del tormento; pero como algunos de ellos y sus compañeros también están preparados para soportar el tormento, es necesario recurrir al fusilamiento ejemplificador.

Quienes son objeto del interrogatorio coercitivo, del tormento o del fusilamiento son argentinos de carne y hueso, como nosotros. Algunos diputados que están sentados en estas bancas sufrieron el interrogatorio coercitivo y el tormento; otros —que ya no están— fueron fusilados. Por ello, pido más respeto a los que lo vieron del otro lado de la capucha. Pido más respeto porque ésta es nuestra historia, y es la historia que para nadie más queremos en la Argentina, hayan estado de uno u otro lado de la capucha.

Porque no queremos esa historia y porque deseamos una Argentina sin abismos entre civiles y militares, con franqueza debemos decir que sobre estas cuestiones no hay que hacer demagogia. Esto es, darse cuenta de que es poco serio venir a arrogarse tutorías intelectuales o la capacidad de criticar un mecanismo que ha surgido del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas argentinas, que es respetuoso de la historia reciente y también de la historia lejana de los argentinos.

En este marco creo que además de destacar como un mérito el carácter consensual del proyecto, hay que desmitificarlo. Los que piensan estas cosas en el seno de las fuerzas armadas van a seguir haciéndolo luego de la sanción de este proyecto de ley.

Hoy iniciamos el camino de pensar que en la Argentina hay cuestiones de Estado y que ellas deberían estar más allá de los partidos. Hay asuntos que por su importancia deberían estar alejados de la contienda electoral y del miedo personal.

¿Qué quiere decir esto? Se puede hacer demagogia de dos maneras con la ley de defensa. Una de ellas consiste en hablar para los votos y la otra en hacerlo para las botas. A quien hable para los votos, si las cosas le salen mal le irá muy mal a la hora de las botas; a quien hable para las botas le irá mal a la hora de los votos, y bien

a la hora de las botas. Son dos maneras de hacer demagogia.

La primera de ellas tiene por lo menos el valor ético de quien habla; la segunda, expone a todos los que hablaron en contrario, porque como tiene subyacente la teoría del enemigo interno; a todo el que no piensa igual se lo coloca del lado de los subversivos. Yo he visto confeccionar listas diciendo solamente: "no hables delante de éste", y ocurría que a la noche se llevaban a aquel delante de quien no habían hablado.

Aquí estamos ante cosas muy claras sobre la mesa. La ley es ingenua. Decimos que ésta es la ley que queremos tener. Nos va a costar mucho hacerla cumplir. Hay gente que da valor de verdad revelada o de Tablas de la Ley al reglamento militar y propone un ascenso; y cuando hay un fallo que los condena, habla de que existe la persecución.

En esta Argentina debemos darnos cuenta de que la única ventaja que tenemos consiste en que con algunas cosas no se hace política. Esta invitación es para las minorías que vienen en nombre de la racionalidad y en nombre de la no demagogia; las invitamos a este ejercicio de responsabilidad para que con esta cuestión no se haga política. No se debe hacer política para los militares porque es de cobardes.

El hecho de decir las cosas que quieren escuchar los militares y no manifestar las que desea oír la sociedad argentina constituye un corporativismo puro, como también lo es el hecho de ser vocero de la posición de los militares en materia de defensa. (*Aplausos*.) Ya hemos escuchado la opinión de las fuerzas armadas y no necesitamos de sus voceros. Hemos hablado con las fuerzas armadas; pero como somos conscientes de la responsabilidad que se nos ha atribuido por el voto popular, venimos a ejercer las facultades que nos otorga la Constitución sobre la fuerza; a la fuerza le damos la ley, dentro y debajo de la cual se deben mantener. A los militares les damos órdenes, porque para eso nos han votado los argentinos: para ordenar. Aquí no se concierda con las fuerzas; cobran sueldo, tienen uniforme y armas, y aceptan órdenes. Y si no están de acuerdo, piden el retiro. Este es el criterio a seguir. Se concierda o se discute con el adversario o con el amigo, pero no con los empleados; son los empleados de la Constitución y de la patria, la mejor profesión, la más digna, que implica la renuncia al ejercicio de los derechos políticos, porque no pueden opinar. Solamente acatan órdenes; es la más simple de las vidas; cualquier otra cosa significa deformar la profesión de soldado.

Entonces, en materia política habría que escuchar a la sociedad, conocer sus propias convicciones y hacer lo necesario para el bien común. Pero en los países en desarrollo el bien común casi nunca coincide con la tranquilidad individual.

Hay que ser transparente. El otro elemento que quiero destacar es el que tiene que ver con el hecho de traer a la discusión el problema presupuestario de las fuerzas armadas. El partido del discurso sobre la reducción del gasto se queja porque el gasto militar es poco. Hay que achicar el gasto de todos menos el de las fuerzas armadas. Esto es el corporativismo más descarado puesto en boca del liberalismo en la Argentina. ¡Qué falta de respeto, señor presidente!

A veces observo que en mi partido tenemos una estereotipia, que es la de expresar a menudo el interés de los trabajadores argentinos. Estereotipamos la posición de nuestro partido en defensa del interés de los trabajadores. El partido debería ser agregativo, es decir, abarcar a todos los sectores sociales; pero prefiero expresar el interés sectorial de los más humildes, de los que transpiran todos los días, en lugar de realizar lo que otro partido, el cual también viene a expresar otro interés sectorial pero no justamente el de una fuerza social, sino el de una organización del Estado que por una deformación corporativa se expresa como otra agrupación, pero no representa a nadie. Sus miembros cobran sueldo y hay un partido que se hace cargo de sus reclamos.

La nueva concepción de la Ucedé es que bajemos todo el gasto, menos el militar. Esto es poco serio; es hacer demagogia con los menos, con las minorías armadas.

Vamos a estudiar el problema del gasto y el del presupuesto militar. No queremos en invierno soldados con uniforme de verano —aunque siempre usen el mismo—; esto no lo deseamos ni nosotros ni los radicales. Pero abordemos esos temas de una manera menos demagógica. Veremos si somos capaces de crear una estructura de producción para la defensa que dé abastecimiento a las fuerzas armadas, las haga formar parte del proceso de modernización e incorporación de tecnología y les permita generar los recursos con los que deben mantenerse. Hagamos las cosas en serio; lo contrario sería jugar con fuego. Jugar con fuego es decir que se gasta mal y a ustedes no les da. Jugar con fuego es decir que se gasta muy mal mientras ustedes no tienen con qué defendernos en caso de agresión externa. Esto se parece a golpear la puerta.

Hay que empezar a decir las cosas como son. No se puede decir a los estudiantes lo que quieren escuchar; a los trabajadores lo que quieren

oír; a las fuerzas armadas, a la Iglesia y a los empresarios lo que desean que se les diga, porque ello provocaría una situación explosiva en la Argentina. Entonces, hay que pensar a quiénes se habla y se gobierna. Mucho menos se puede hacer ese discurso tan demagógico de decir a cada sector lo que quiere escuchar en nombre de la racionalidad. Sin embargo, es lo que viene sucediendo en la Argentina en los últimos meses.

Cuando existen dos partidos como el justicialismo y el radicalismo que se ponen de acuerdo sobre un tema, se dice que están trampeando; mientras que si no llegan a un consenso se manifiesta que son irresponsables e incapaces de entenderse, con lo grave que está el país. ¿Qué harían ellos en ese lugar?

Finalmente, quiero manifestar que lo que ocurre aquí está vinculado con lo que sucede en el Senado. De ello no hay ninguna duda. La pregunta es qué tienen que ver las asociaciones profesionales con la ley de defensa. El proyecto de ley sobre asociaciones profesionales rige el modo de organización de los trabajadores argentinos, cómo se han de constituir sus sindicatos, cuántos debe haber por rama, cómo deben organizarse para la discusión salarial, cómo es el sistema de representación, cuáles son las protecciones para los trabajadores con respecto a sus empleadores, etcétera.

No hemos podido llegar a un acuerdo con los radicales a pesar de que hemos estado trabajando en consulta con la representación legítima de los trabajadores —la Confederación General del Trabajo—. La sesión del Senado ha fracasado y los senadores se han ido a sus casas. Dado que se trata de una norma que debe tener base consensuada, en lugar de pelearnos hemos preferido dejar correr el tiempo. Les informo que no se llegó a acuerdo alguno; no hubo sanción ni del proyecto de ley de asociaciones profesionales, ni del paquete tributario, ni del proyecto de ley de coparticipación. Se rompió totalmente el acuerdo que existía entre radicales y peronistas. Sin embargo, estamos acá, en la Cámara de Diputados, tratando un proyecto de ley por medio del cual la Nación se prepara para defenderse, ordena sus fuerzas armadas, las integra y les da misión, órdenes y doctrina. Como nosotros estamos de acuerdo con todo esto y en general con esta iniciativa, vamos a dar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley en consideración. Cuando no estemos de acuerdo con algo, votaremos por la negativa; y aunque nos critiquen por ponernos de acuerdo, si estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo haremos a la luz del día; en el caso contrario, las disidencias las plantearemos en este recinto co-

mo lo hemos hecho siempre y como se hizo esta noche en el Senado. Entendemos que es de esta manera como se ejerce el mandato popular que hemos recibido tanto el radicalismo como nosotros.

Nadie ha discutido más que nosotros la política de defensa de los radicales; nadie con más ganas que nosotros vendría a criticar esta noche. Desde la reforma del Código de Justicia Militar hasta este proyecto de ley hay un largo camino que fue divergente y convergente en distintos puntos, pero que desde la crisis de Semana Santa tiene en nosotros una sola voluntad: preferimos los errores del gobierno democrático de la Argentina en materia militar que los aciertos de quienes se hacen cargo de la deliberación de un cuerpo que no está facultado constitucionalmente para deliberar, sino que está impuesto por la Constitución para cumplir con sus órdenes.

Por las razones expuestas, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley que han elaborado las mayorías de la Argentina y que esperamos sea el punto de partida de una nueva situación en la relación entre la sociedad argentina y sus fuerzas armadas, que hoy están encerradas y a las que queremos incorporar bien subordinadas, dignas y respetadas por todos, a pesar de que sabemos que el camino es conflictivo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: sólo voy a formular dos breves aclaraciones, pues no es mi intención reabrir el debate.

El señor diputado Zubiri se refirió varias veces durante su exposición al señor diputado Alsogaray. A efectos de que quede constancia en el Diario de Sesiones quiero manifestar que el señor diputado Alsogaray no se encontraba presente en el recinto en ese momento, y como no se puede hacer uso de la palabra en más de una oportunidad, no había posibilidad de replicar.

Con referencia a lo que expresó el señor diputado por Mendoza, deseo apuntar que mi partido participó en la Mesa del Consenso y que personalmente tuve la satisfacción de asistir a las reuniones que celebró la Comisión de Defensa Nacional. En atención a lo que aquí se señaló quiero decir que nosotros otorgamos el consenso, participamos y contribuimos en la redacción del documento que emanó de esa comisión. Además, pienso que el aporte liberal no habrá sido tan despreciable cuando pocos días atrás, junto con el ingeniero Alsogaray, recibimos una delegación —en la que había un miembro del par-

tido radical y otro del justicialista— que con toda gentileza y amabilidad nos invitó a retornar a esa mesa de la que nos retiramos en el momento que pensamos que ella no expresaba cabalmente la invitación del señor presidente de la República.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Durañona y Vedia. — En esa oportunidad nos dijeron que era de suma importancia la contribución de esta expresión del pensamiento en la Mesa del Consenso.

Sr. Aramburu. — A veces el radicalismo se equivoca, como en este caso.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Silva (C. O.) — Señor presidente: el señor diputado Durañona y Vedia hizo referencia a un requerimiento de nuestro partido, o de la Mesa del Consenso, a modo de contribución.

Eso no significa de ninguna manera que nuestro partido y quienes han contribuido en esa Mesa del Consenso, puedan aceptar y tolerar las explicaciones que pretendió dar el diputado Alsogaray para justificar la política que significó en la República —como muy bien señaló el presidente de la Comisión de Defensa Nacional— nada más y nada menos que la violación de los derechos fundamentales del ciudadano. En este sentido, el diputado Manzano explicó muy bien lo que significaba el ciudadano debajo de la capucha y fuera de ella.

Eso es algo que no puede ser materia de un consenso, señor presidente. Esta es la única aclaración que me permito hacer en consideración a las brillantes exposiciones de los señores diputados Zubiri y Manzano.

Sr. Cambareri. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Duhalde). — Sólo a esos efectos, señor diputado, porque ya ha hecho uso de la palabra.

Sr. Cambareri. — Señor presidente: tenía la esperanza de que por el mero transcurso del tiempo se hubiesen achicado los apasionamientos de los hombres políticos y consecuentemente se hubiera agrandado la figura del diputado de la Nación.

Esto no ha sido así. Me he dado cuenta de que pese a la injuria inferida en el día de ayer por el señor diputado Lestelle, éste no ha rectificado su tesitura habiendo hecho uso de la palabra.

Esto sólo ratifica, como he dicho, que pertenece a la segunda minoría, políticamente hablando, y posee un cerebro minoritario de segunda.

Sr. Presidente (Duhalde). — Si ningún otro señor diputado desea hacer uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Sancassani. — Señor presidente: propongo que en lugar de “las agresiones de origen externo”, en el final del primer párrafo de este artículo se coloque “cualquier clase de agresión”.

De esa forma, el primer párrafo de este artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar cualquier clase de agresión”.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiri. — Señor presidente: este artículo ha sido el centro de todo el debate. Por lo tanto, no tengo más consideraciones que agregar al respecto, por lo que los autores del proyecto nos oponemos a cualquier tipo de modificación a su texto.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aramouni. — Señor presidente: no voy a hacer la observación que pensaba formular y en consecuencia acepto el texto del despacho.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: tengo dos observaciones que hacer a este artículo.

Propongo que el párrafo primero quede redactado de la siguiente manera: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación”. Creo que éste es el concepto que responde a una ley de defensa, porque el texto que sigue parece circunscribir la integración y la acción de esas fuerzas únicamente a los conflictos que requieran la intervención de las fuerzas armadas, lo cual limita el amplio concepto de defensa nacional.

Si esta indicación no prosperara, quiero aclarar que la expresión “disuasiva o efectiva” plantea una oposición deficiente, porque la disuasión también es efectiva, por lo que propondría que el texto dijera “disuasiva o activa”.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiri. — No estamos de acuerdo, señor presidente.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: el texto comienza diciendo lo siguiente: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada...”. Propongo que antes de las palabras “la integración” se agregue la expresión “la preparación”, con lo cual el texto quedaría así: “La defensa nacional es la preparación, la integración y la acción coordinada...”.

Además, en la parte que dice “de todas las fuerzas de la Nación” —supongo que quedan comprendidas las fuerzas materiales y morales—, propongo que a continuación se agregue la frase “para la prevención y enfrentamiento”, continuando el artículo tal como está redactado.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia reitera que con referencia al proyecto de ley que se está considerando no existe dictamen de las tres comisiones a las que correspondía su estudio, sino solamente un anteproyecto de despacho de una de ellas.

En consecuencia, con respecto a las modificaciones que se propongan no procede consultar a comisión alguna, y por lo tanto la Presidencia someterá a votación en primer lugar el texto del artículo que se considere y luego, según proceda en razón del resultado de esa votación, los textos alternativos o modificaciones que se hubieran propuesto.

Se va a votar el artículo 2º del proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: teniendo en cuenta el criterio de la Presidencia, quisiera sugerir a la Cámara que el proyecto se someta a votación por títulos, si es que esto fuera posible, dada la cantidad de artículos que contiene. Queda claro, por supuesto, que los señores diputados que deseen proponer observaciones lo po-

drán hacer en el momento que corresponda, de manera que mi proposición no restringiría en absoluto la iniciativa de los señores diputados que quieran efectuar modificaciones y aceleraría el trámite de la votación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar la moción del señor diputado por Entre Ríos de que el proyecto se vote por títulos y no artículo por artículo, lo cual presupone que los señores diputados que deseen formular observaciones a los artículos contenidos en cada título deberán solicitar la palabra a efectos de proponer las rectificaciones o modificaciones que estimen convenientes.

Sr. Durañona y Vedia. — Pido la palabra para hacer una observación acerca del método propuesto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Creo que si va a haber observaciones, el trámite de la votación no se verá agilizado mediante el procedimiento que sugiere el señor diputado Jaroslavsky. Por el contrario, podría complicarse, ya que cada uno de los títulos podría merecer varias observaciones.

Por lo tanto, le solicito al señor diputado que retire su sugerencia para que el proyecto pueda votarse artículo por artículo.

Sr. Jaroslavsky. — Mantengo mi proposición, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el título I, del que ya han sido aprobados los artículos 1º y 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Hago esta observación con el optimismo de que pueda ser acogida favorablemente. Como el proyecto de ley fue aprobado en general, se desprende claramente que la Cámara ha aprobado la existencia de una diferencia entre la agresión externa y la que puede tener origen interno, es decir, la referida a la seguridad interior.

Mi indicación se relaciona concretamente con el artículo 4º y se inspira en el deseo de que esa diferencia fundamental que separa la agresión externa de la seguridad interior quede cabalmente expresada. Creo que no puede ser idea de la comisión separar el concepto de la seguridad interior del concepto de defensa, porque

si “la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación”, no pueden caber dudas de que la seguridad interior integra ese concepto de defensa. Lo que se quiere decir aquí es que la seguridad interior será materia de una ley especial, porque debe diferenciarse de la agresión externa.

Estimo que esta aclaración haría más completo el concepto, porque un país que no tiene seguridad interior sería muy vulnerable en materia de defensa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zaffore. — Señor presidente: habiéndose ya aprobado el artículo 2º y manteniéndose este criterio de separar la seguridad interior de la defensa frente a ataque externo, mi proposición apunta a dar más precisión a la última parte del artículo 4º, que dice: “La seguridad interior será regida por una ley especial.” Yo agregaría: “...que establezca las relaciones con la defensa nacional y regule la participación en ella de las fuerzas armadas. Dicha ley será proyectada en los términos del artículo 46.”

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Qué otro señor diputado desea referirse al artículo 4º?

Sra. Guzmán. — Yo me voy a referir al artículo 3º, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — El problema es que la decisión de la Honorable Cámara de considerar en particular el proyecto por títulos quita orden a las observaciones de los señores diputados. La Presidencia se permite sugerir que el honorable cuerpo rectifique dicha decisión y se vuelva al procedimiento usual de considerar artículo por artículo.

Sr. Jaroslavsky. — Por mi parte no tengo inconveniente, señor presidente, si el honorable cuerpo así lo resuelve.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consecuencia, se va a votar si se rectifica el pronunciamiento anterior de la Honorable Cámara sobre el tratamiento en particular por títulos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: entiendo que falta incluir las palabras “decisiones políticas, estrategias” al definirse la defensa nacional. La primera parte del artículo debería decir entonces: “La defensa nacional se concreta en un conjunto de decisiones políticas, estrategias, planes y acciones tendientes...”.

Además, al final del artículo, donde dice "concluida la contienda", propongo que se agregue "o la crisis".

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no hay otras observaciones, se va a votar el artículo 3º tal como figura en el proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 4º.

Si no hay observaciones además de las ya formuladas por los señores diputados Durañona y Vedia y Zaffore, se va a votar el artículo 4º tal como figura en el proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Toma. — Señor presidente: simplemente deseo hacer notar que se debe corregir un error de impresión. Donde el artículo dice "esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley", debe mencionarse el artículo 28, ya que es a éste y no al 30 al que se hace referencia efectivamente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: entiendo que existe un error terminológico en la redacción de este artículo, por cuanto dice: "...demás territorios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina...". Debiera decir "demás espacios insulares, marítimos y aéreos", porque no existen territorios aéreos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: nuestro bloque acepta la modificación propuesta por la señora diputada Guzmán, en el convencimiento de que se trata de un criterio compartido por la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 5º del proyecto de ley.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 5º del proyecto de ley con la modificación propuesta por la señora diputada Guzmán y las correcciones indicadas por el señor diputado Toma.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: entiendo que en la redacción de este artículo se ha omitido decir "y los habitantes", a continuación de "para todos los argentinos", porque existen habitantes que no son argentinos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: el artículo está correctamente redactado porque la Constitución Nacional establece en su artículo 21: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución...". De manera que esta disposición del proyecto reproduce exactamente la terminología constitucional, no debiendo introducirse reforma alguna.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 6º según el texto del proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 7º.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en el inciso a), luego de "las hipótesis de conflicto" deberá agregarse "y de crisis", lo que expresamente propongo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Giacosa. — Señor presidente: quiero instar a las minorías representadas en esta Cámara a no reanudar en cada artículo que debemos votar un debate ya agotado durante la discusión en general.

Esto parece simular la obstinación del insecto que choca contra el vidrio, en procura de que con el paso de las horas nos distraigamos y se incluya de contrabando, en algún artículo, determinada modificación que hemos rechazado en la consideración en general del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Señor diputado: la señora diputada está ejerciendo un derecho reglamentario indiscutible.

Sr. Giacosa. — Yo también, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Pero usted no puede reprochar a otros diputados el ejercicio de un derecho reglamentario.

Sr. Giacosa. — Simplemente los insto, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: deseo reiterar que hoy se manejan más los problemas de las crisis que los conflictos; incluso, nos aproximamos más a la realidad de que hay más crisis que conflictos bélicos, técnicamente hablando. De manera que esta cuestión no tiene nada que ver con lo que ha manifestado el diputado proponente, ya que es nuestra intención adecuar la ley y la posibilidad de establecer las hipótesis a algo que existe y que existirá con seguridad más frecuentemente que un conflicto; me refiero a las crisis.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: creo que en este aspecto no debe modificarse el proyecto porque la introducción de la palabra "crisis" sólo provocaría confusión. Como muy bien dijera un autor bastante conocido —me refiero a Umberto Eco—, tanto se ha manoseado la noción de crisis que hasta el propio concepto de crisis ha entrado en crisis. De modo que colocar este término en un texto legal donde se requiere bastante precisión por su carácter institucional, solamente provocará una confusión o distorsión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: la redacción del artículo es correcta, porque en él se ha utilizado el término "conflicto", que señala el estado de enfrentamiento de voluntades contrapuestas desplegadas que hacen uso de sus recursos. Pero no se ha usado la palabra "guerra", que es a lo que se refiere la señora diputada cuando señala que hay más crisis que conflictos. En realidad hay más conflictos que guerras.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 8º del proyecto de ley aprobado en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: solicito que el título III del proyecto sea dividido en capítulos, eliminándose a la vez los títulos IV y V, porque si nos detenemos en la lectura del contenido de estos últimos observaremos que guardan estrecha relación con los incisos del artículo 9º. Por ello, sugiero que los artículos 9º a 27 se clasifiquen en capítulos en función de los incisos del artículo en consideración. Así, propongo

que los artículos 10 y 11 conformen el capítulo 1º; los artículos 12, 13, 14 y 15, el capítulo 2º, y continuar con ese criterio.

Sr. Presidente (Pugliese). — En razón de la finalidad de la propuesta formulada por el señor diputado por Buenos Aires, se va a votar en primer término dicha proposición.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la consideración del artículo 9º. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zaffore. — Señor presidente: deseo proponer el agregado de un nuevo inciso a continuación del inciso g), con lo cual el actual inciso h) pasaría a ser inciso i).

Este nuevo inciso h) que propongo diría que integra el sistema de defensa "el organismo de mayor nivel que produzca inteligencia de defensa nacional".

Entiendo que este organismo debe integrar el sistema referido por el conjunto de razones que se dieron tanto a favor como en contra del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en el inciso d) del artículo que consideramos se expresa que el Ministerio de Defensa será uno de los integrantes del sistema de defensa nacional.

Propongo que los ministros del Poder Ejecutivo, en su totalidad, forman parte de dicho sistema. Creo que esto ha quedado claramente establecido en el debate: lo militar constituye sólo una pequeña parte del sistema de defensa, de manera que entiendo que sería realmente útil la participación de todos los ministros del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: el inciso g) del artículo 9º dice lo siguiente: "Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en los términos que percibe la presente ley". Es evidente que se ha deslizado un error material ya que en lugar de decirse "percibe" debería estar impresa la palabra "prescribe".

Sr. Presidente (Pugliese). — Así es, señor diputado.

Se va a votar el artículo 9º del proyecto con la corrección indicada por el señor diputado por Formosa.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: aparentemente, existe una contradicción terminológica entre el inciso *b)* del artículo que consideramos y el artículo 19 del proyecto de ley.

En primer lugar, en el artículo 10 se crea y define un denominado Comité de Crisis; por otro lado, en el artículo 19 se habla del Comité de Guerra. Entiendo que sería necesario uniformar la terminología y lo más atinado consistiría en utilizar la expresión Comité de Guerra. En consecuencia, propongo tal denominación en el inciso *b)* del artículo que consideramos, en lugar de Comité de Crisis.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Storani (C. H.). — Señor presidente: efectivamente, en el artículo 19 se ha deslizado un error tipográfico, ya que en el texto originario que nosotros poseemos se habla de Comité de Crisis en lugar de Comité de Guerra.

Cuando lleguemos a la consideración del artículo 19 deberá efectuarse la corrección correspondiente. Pero en el inciso *b)* del artículo que consideramos, en lugar de "Ministerio de Defensa", debe decir "ministro de Defensa".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 10 del proyecto con la corrección indicada por el señor diputado por Córdoba.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 11.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: entiendo que en el proyecto que consideramos se ha cometido un error en el ordenamiento de los artículos.

Creo que el artículo 32 debería ocupar el lugar del 12, ya que el artículo 11 se refiere a las competencias que le son asignadas al Ministerio de Defensa, y en el 32 se habla también de una competencia del Ministerio de Defensa al mencionarse que los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la defensa nacional serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados por el presidente de la Nación.

Conforme con esta propuesta el actual artículo 12 pasaría a ser el número 13.

Sr. Presidente (Pugliese). — En realidad, el señor diputado no propone una modificación al texto del artículo 12 sino colocar el actual artículo 32 en la ubicación del artículo 11. De

esta manera el texto del artículo 12 quedaría tal cual está, aunque con otra numeración.

Se va a votar la propuesta del señor diputado Ibarbia.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Evidentemente, en el artículo 12 se ha deslizado un error de redacción. Donde dice: "...de la hipótesis de conflicto y de guerra así como también en la adopción de la estrategia..." debería decir: "...de las hipótesis de conflicto y de guerra así como también en la adopción de las estrategias...". Digo esto porque no existe sólo una estrategia; las estrategias son diferentes, pues hay una para Brasil, otra para Chile, etcétera.

Sr. Zubiri. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 12 con las correcciones indicadas por la señora diputada Guzmán.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en la última parte del primer párrafo del artículo 13 se dice: "...conforme con el cuadro aclaratorio anexo que forma parte de la presente ley". Creo que ese cuadro no es nada aclaratorio y se contradice bastante con el texto del proyecto. Propongo que se elimine la expresión mencionada a efectos de que el primer párrafo del artículo en consideración concluya con las palabras "para cada situación". Reitero que ese cuadro no es aclaratorio y por ello no debe formar parte del texto del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Alterach. — Señor presidente: en nombre de los autores del proyecto aclaro que en el cuadro al que se refiere este artículo, donde dice "Sistema informático de inteligencia no militar" debe decir "Sistema de informaciones e inteligencia no militar".

Sr. Presidente (Pugliese). — Con la corrección indicada por el señor diputado por Misiones, se va a votar el artículo 13 del proyecto.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no es mi intención reabrir el debate respecto de la procedencia de que en el Consejo de Defensa Nacional figuren el vicepresidente de la Nación y miembros de las comisiones internas de las Cámaras legislativas, pero debo señalar que la expresión “uno por el bloque de la mayoría y otro por la primera minoría” puede dar lugar a confusiones en su aplicación.

En la actualidad en la Cámara de Diputados hay una primera minoría y una segunda minoría, y durante mucho tiempo en el Senado de la Nación hubo un bloque único. De modo que a efectos de evitar las cuestiones que podría suscitar este texto, creo que se podría modificar diciendo: “dos integrantes de dichas comisiones designados por éstas”, dejando así al Congreso la facultad de designar a los legisladores que lo representen en ese Consejo de acuerdo con la representación proporcional con que las distintas fuerzas cuenten en las Cámaras.

Sr. Presidente (Pugliese). — En ese caso, habría que aclarar que deben ser de distintas fuerzas políticas.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: pienso que el artículo está correctamente redactado pues responde a la finalidad de incorporar la idea de control y de hacer participar en dicho control a mayorías y minorías. Esto no importa innovación alguna, pues incluso figura en algunas constituciones provinciales para la integración de organismos como el Tribunal de Cuentas o tribunales administrativos. Por ejemplo, esto aparece en las constituciones de las provincias del Chubut y Santa Cruz. De manera que, interpretando el sentido y el alcance que se ha querido dar a esta norma, me pronuncio por el mantenimiento de su redacción tal como figura en el proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en este artículo se ha deslizado un error tipográfico, y donde dice “Estará integrada...”, debe decir: “Estará integrado...”.

Sr. Zubiri. — Efectivamente, es así, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Con la corrección formulada por la señora diputada por Jujuy, se va a votar el artículo 14 del proyecto.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aramouni. — Señor presidente: creo que se ha producido una omisión involuntaria en el segundo párrafo de este artículo.

Tengo presentes algunos de los aspectos tratados tanto en la mesa del consenso como en el Ministerio de Defensa, y recuerdo que al tratar el artículo 46, referido a la elaboración de anteproyectos legislativos, por parte del Consejo de Defensa Nacional, se mencionó el caso del inciso e), referido a un sistema nacional de información e inteligencia, que contemple el control parlamentario.

Por lo tanto, resulta evidente que al final del segundo párrafo del artículo 15, donde dice: “y que dependerá en forma directa e inmediata del ministro de Defensa”, habría que agregar “con control del Parlamento nacional”.

De esa forma, la redacción de este artículo sería coherente con lo que establece el artículo 46 acerca de las normas que debemos sancionar en el futuro.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Guidi. — Señor presidente: deseo referirme al último párrafo del artículo 15.

Entiendo que los organismos de inteligencia militares no trabajan con hipótesis —como allí se señala—, sino con tareas que se les encomiendan en forma directa.

Propongo entonces reemplazar la expresión “hipótesis de trabajo” por “temas de trabajo”.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 15 conforme figura en el proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: deseo formular una observación ya que en la última parte de este artículo en cierto modo se genera una contradicción con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 23, en el que se exige que los jefes de estados mayores generales pertenezcan al cuerpo de comando.

Dado que dicha exigencia no aparece en el artículo en consideración, se podría suponer que la intención fue la de ampliar la cantidad de oficiales entre los que habría que elegir un jefe, lo cual es naturalmente indebido, porque un oficial superior del cuerpo profesional no podría ocupar este cargo.

Por lo tanto, proponemos la mención específica de que los oficiales superiores entre quienes

se designará al jefe del Estado Mayor Conjunto deben pertenecer al cuerpo de comando.

Por otra parte, este artículo contendría a nuestro juicio una limitación de las facultades del presidente de la República, por cuanto se le exige que la designación debe recaer necesariamente en un oficial superior con máximo rango.

Los máximos rangos de los oficiales superiores son los de teniente general, brigadier general y almirante. Creo que este condicionamiento debe suprimirse para que quede a criterio del presidente la determinación de sobre qué rango de oficial superior recaerá la designación del jefe del Estado Mayor Conjunto.

En síntesis, propongo reemplazar la terminología "oficiales superiores con máximo rango en actividad" por la de "oficiales superiores del cuerpo de comando en actividad".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: quiero expresar que sostenemos el mantenimiento de la norma tal como está redactada.

Con alcance para este artículo y para otros sobre los que ya se anticipó alguna objeción, aclaro que no hay ningún cercenamiento de las atribuciones o facultades constitucionales del presidente de la República. De lo que aquí se trata, como en toda norma reglamentaria que se vincule con potestades específicas, es de convertir las facultades discrecionales en facultades regladas. Lo mismo ocurre respecto de cualquier otra materia análoga que reglamente el Congreso, para lo cual tiene poderes propios. Por ello voto por el mantenimiento de la norma tal como está redactada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 16 conforme al texto contenido en el proyecto de ley aprobado en general.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículo 17 y 18.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 19.

Se va a votar con la corrección anunciada al tratarse el artículo 10, que consiste en reemplazar la expresión "Comité de Guerra" por "Comité de Crisis".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Storani (C. H.). — Señor presidente: en el segundo párrafo de este artículo se ha deslizado un error gramatical. Este párrafo dice así: "Estarán sometidas a un régimen de disciplina interna, y se ajustarán a sus procederes al derecho nacional e internacional aplicable a los conflictos armados." Nosotros proponemos que después de la coma el texto diga lo siguiente: "y ajustarán sus procederes al derecho nacional e internacional aplicable a los conflictos armados." Es una cuestión meramente gramatical.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia se permite sugerir que no se utilice el plural en la expresión "sus procederes", con lo cual el artículo diría "y ajustarán su proceder al derecho nacional e internacional aplicable a los conflictos armados."

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Storani (C. H.). — Estamos de acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: el primer párrafo dice: "Las fuerzas armadas son el instrumento militar de la defensa nacional...". Entiendo que debe decir "son las instituciones armadas", ya que éstas cuentan con una organización, cuadros y valores compartidos; o sea que es inadecuada la referencia a ellas como meros instrumentos, pues son instituciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 20 del proyecto con las correcciones gramaticales indicadas por el señor diputado Storani.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: simplemente quiero proponer que haya uniformidad en la designación de cada una de las fuerzas armadas. Si hablamos de "Ejército Argentino" y de "Fuerza Aérea Argentina", corresponde decir "Armada Argentina" y no "Armada de la República Argentina".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 21 del proyecto.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 22.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 23.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: propongo que se suprima este artículo, por cuanto la facultad del presidente de la Nación como comandante en jefe de las fuerzas armadas no es delegable, ni puede ser asumida —tal como lo expresa la Constitución Nacional— por quien tiene a su cargo el despacho administrativo de los negocios. Esto en lo relativo al primer párrafo del artículo.

En cuanto al segundo párrafo, su texto es redundante, en razón de que un artículo de la Constitución Nacional expresa los mismos conceptos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 23 tal cual figura en el texto del proyecto de ley.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 24.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Storani (C. H.). — Señor presidente: para mejorar la redacción del artículo, en nombre de los autores del proyecto propongo que en su segundo párrafo, entre las expresiones “del planeamiento militar conjunto”, y “la composición”, se intercalen las palabras “acerca de”. También propongo que entre las expresiones “así como” y “los aspectos” se intercale la palabra “sobre”.

El texto propuesto quedaría redactado de esta manera: “Los jefes de Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas, ejercerán el gobierno y administración de sus respectivas fuerzas.”

“Dirigirán la preparación para la guerra de los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y su apoyo logístico. Asesorarán al Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste, del planeamiento militar conjunto, acerca de la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como sobre los aspectos del referido planeamiento”.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Deseo proponer también algunas modificaciones, señor presidente.

En el primer párrafo del artículo, propongo que a la expresión “ejercerán el gobierno y administración de sus respectivas fuerzas” se agregue la palabra “comando”, de manera que se lea así: “Los jefes de Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas, ejercerán el comando, gobierno y administración de sus respectivas fuerzas”.

En el segundo párrafo propongo que a continuación de “preparación para la guerra” se agreguen las palabras “y el reclutamiento”, de manera que esa oración se lea así: “Dirigirán la preparación para la guerra y el reclutamiento de los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y su apoyo logístico”.

Esta última propuesta se basa en el hecho de que, de no incorporarse esas palabras, quedaría pendiente el interrogante de a qué autoridad le cabría el reclutamiento de esos elementos.

Sr. Vanossi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: estoy por el mantenimiento de la redacción del artículo. Es correcta la alusión al gobierno de las fuerzas y es por otra parte concordante con expresiones similares empleadas en los incisos 23 y 24 del artículo 67 de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Toma. — Señor presidente: ratifico el criterio expuesto por el señor diputado Vanossi. Además solicito por su intermedio que los señores diputados, en homenaje al tiempo que llevamos sesionando, se abstengan de proponer —por no decir contrabandear— criterios que ya fueron desechados en oportunidad de la discusión en general.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 24 conforme al texto que resulta de introducir las modificaciones indicadas por el señor diputado Storani.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 25.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aramouni. — Señor presidente: obviaré los fundamentos de las modificaciones que propongo para los tres artículos que componen el título V, relacionadas con mis puntos de vista —expuestos en la reunión de ayer— sobre la objeción de conciencia y el reemplazo del servicio militar obligatorio por uno optativo y un servicio civil comunitario sustitutivo.

Al final del primer párrafo del artículo 25 propongo agregar: “...conforme al artículo 21 de la Constitución Nacional, salvo quienes ejerzan el derecho de ser eximidos de prestar el servicio militar cuando su cumplimiento sea incompatible con firmes y claros imperativos de conciencia, de índole moral o religiosa”.

Sugiero asimismo que el segundo párrafo del artículo 25 finalice del siguiente modo: “...e)

servicio militar, el servicio civil de defensa y el servicio civil comunitario de sustitución”.

En el artículo 26 propongo que a continuación de: “El servicio militar es el que cumplen los argentinos...”, se agregue: “...que opten por hacerlo en las fuerzas armadas...”.

Asimismo, propongo que al final del artículo 27 conste este agregado: “El servicio civil comunitario de sustitución es la obligación de prestar servicios en actividades destinadas al desarrollo y promoción de la comunidad que no estén relacionadas con las fuerzas armadas ni con las de seguridad cuya duración no podrá ser superior a la del servicio militar”.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Monjardín de Masci. — Señor presidente: observo dos errores gramaticales en el primer párrafo del artículo 25. En la versión del proyecto que tengo sobre mi banca el artículo comienza así: “Todas las personas de existencia visible y/o jurídica sujeta...”; debería decir “sujetas”, en plural.

Además, donde dice “podrán ser requeridas al cumplimiento”, debería decir “para el cumplimiento”, por una cuestión de mejor redacción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: creo que es defectuosa la alusión del artículo 25 a personas de existencia visible y/o jurídica. Debería decir “personas de existencia visible o ideal”; o si no, “personas de existencia visible o jurídicas”, en plural.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiri. — Señor presidente: quiero referirme principalmente al planteo efectuado por el señor diputado Aramouni.

Lo que él pretende introducir son, lisa y llanamente, modificaciones a la ley de servicio militar. Como esto será tratado en su momento, nos oponemos a sus propuestas, sin perjuicio de que las consideremos en su oportunidad.

Por otra parte, los autores del proyecto aceptamos la sustitución de la expresión “al cumplimiento” por “para el cumplimiento”. En cuanto al error señalado en primer término por la señora diputada por Buenos Aires, no figura en el texto original del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 25 con las modificaciones gramaticales aceptadas por el señor diputado Zubiri.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 26, 27 y 28.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 29.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no comprendo bien lo que expresa este artículo.

Dice que las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones. Esto no parece dudoso; pero a continuación se agrega: “situación que sólo hallará excepción en la aplicación del artículo 6º de la Constitución Nacional”, que se refiere a la intervención federal a provincias.

El de interventor federal es un cargo previsto en la Constitución Nacional, así que no es ésa una salvedad. La provincia podría hallarse intervenida con anterioridad o podría haber sido intervenida con motivo de los sucesos pertinentes, gozando el interventor de todas las facultades constitucionales inherentes a su cargo; por lo tanto, no es una salvedad.

Asimismo, observo que al final del artículo se dice: “En la hipótesis de adoptarse la medida referida, el Poder Judicial mantendrá la plenitud de sus atribuciones”. Esto también resulta algo obvio, pero es posible que se intervenga el Poder Judicial en una provincia determinada, como ha ocurrido alguna vez.

Por lo tanto, creo que este artículo resulta superfluo, en parte porque es obvio, y además porque la intervención federal es un remedio constitucional. Por ello, propongo su supresión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: intentaré aclarar al distinguido colega, señor diputado Durañona y Vedia, el sentido de este artículo que no considero redundante.

En cuanto a las hipótesis del artículo 6º de la Constitución Nacional, el artículo que proponemos en este proyecto constituye una reafirmación de las autonomías locales. El único sentido que tiene es señalar lo que de alguna manera establece el artículo 105 de la Constitución. La no intervención es el principio, y la intervención, la excepción.

Sr. Durañona y Vedia. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Vanossi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Entonces, podríamos hacer referencia a las autoridades locales o provinciales, porque el interventor también es constitucional.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Aclaro al señor diputado que autoridades constitucionales son todas, las nacionales y las provinciales, y el gobierno de la Nación comprende al gobierno federal y a los provinciales.

En cuanto al Poder Judicial, la aclaración del último párrafo del artículo es importante porque significa que no existe una lisa y llana exclusión de los jueces naturales. Dada la hipótesis del artículo 6º de la Constitución, se mantiene en pie el principio de los jueces naturales.

Distinta es la hipótesis de que la intervención pueda incluir al Poder Judicial. Esto no significa un desplazamiento automático de los civiles hacia los tribunales militares sino el mantenimiento del principio de la jurisdicción y la competencia propia de los tribunales nacionales y la de los provinciales, frente a los abusos que han existido en nuestra historia a raíz de la aplicación de la ley marcial.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 29 del proyecto.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 30 y 31.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 32.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en virtud de lo establecido en el artículo 48 del proyecto de ley, los artículos 32 al 37 pasarán a constituir disposiciones transitorias, por lo que solicito su inclusión en el Título VIII.

Por otro lado, el artículo 32 dispone que los planes de movilización estarán a cargo del Ministerio de Defensa. Sobre este particular propongo que la elaboración de dichos planes sea realizada en cada ministerio, para luego ser aprobados por el presidente de la Nación, siendo coordinados por el Ministerio de Defensa. Esto es consecuente con lo que ya hemos planteado acerca de que en esta cuestión intervienen distintos factores y no exclusivamente lo que sería el de la defensa estrictamente hablando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con comercio interior, comercio exterior, justicia, propiedad enemiga y tantas otras cuestiones a que he hecho referencia durante el debate en general, justamente sosteniendo la tesis de Roque Carranza?

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 32 del proyecto.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 33.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en este artículo se establece que el presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa civil. Entiendo que cuando más adelante se refiere a la disminución de los efectos de la guerra habría que agregar "violencia o enfrentamientos internos".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 33 del proyecto.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 34.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en este artículo se habla de "caso de guerra". Creo que se ha olvidado colocar la expresión "conflicto armado".

A lo largo del debate ha quedado en claro que no todo conflicto armado significa una guerra. Por ejemplo, cuando tuvimos el conflicto con Gran Bretaña, en ningún momento se le dio la denominación jurídica de guerra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 34 del proyecto.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 35.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: hay una vieja cuestión que muchas veces se ha presentado en el derecho argentino y en la jurisprudencia de los tribunales sobre la expresión "no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante".

Me parece que esto se refiere exclusivamente a la prestación de servicios o a la requisición temporaria de bienes, pero no puede comprender la pérdida de bienes de un patrimonio particular afectados por esa requisición.

Esta cuestión sería salvada si en lugar de colocar "no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante", se dijera "no reconociéndose el lucro cesante, salvo en caso de pérdida de bienes".

Es muy distinto que un particular no pueda reclamar el lucro cesante por lo que deje de percibir por un breve tiempo durante el cual es privado de sus bienes, de que el bien se pierda con motivo de la afectación: en este caso el particular tiene derecho a reclamar el lucro cesante.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: es muy plausible la inquietud del señor diputado preopinante, pero también lo es el criterio del proyecto, que es más justo y razonable. Aquí está previsto lo fundamental: la persona será indemnizada, y en caso de desacuerdo el monto de la indemnización se fijará judicialmente. Lo referido al lucro cesante es lógico dada la enorme gravedad y emergencia de los conflictos o situaciones de guerra. De modo que dentro de la carga pública que soportan los habitantes estará incluido, desde ya, el riesgo de perder un lucro cesante, lo que será solidariamente soportado por toda la sociedad que estará sufriendo una situación de guerra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 35 del proyecto.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 36 a 45.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 46.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiri. — En el inciso a) de este artículo se ha deslizado un error. Donde dice "planeamiento logístico", debe decir "planeamiento, logística".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 46 con la corrección señalada por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 47 y 48.

— El artículo 49 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. (*Aplausos.*)

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde que la Honorable Cámara se expida acerca del pedido de inserción formulado por el señor diputado Zubiri.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se hará la inserción solicitada².

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4802.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 4807.)

MEDIDAS PARA REGULAR LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, remitido mediante el mensaje 704, por el que se establecen medidas destinadas a una mejor regulación de la actividad vitivinícola (expediente 5-P.E.-87).

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá efectuar un censo de la totalidad de los viñedos existentes en el país, con verificación efectiva en los lugares de ubicación de los mismos que permita conocer extensión, composición varietal, estado vegetativo y productividad probable de cada uno, como asimismo, si la explotación del viñedo constituye actividad principal o secundaria del productor.

El organismo podrá contratar personal temporario, debiendo gestionar la aprobación de la planta de personal temporario que le permita el cumplimiento de las obligaciones que en esta ley se le asignan, con cargo a los créditos que oportunamente se le habiliten.

El Poder Ejecutivo invitará a las provincias en las que se efectúe el censo a participar con el Instituto Nacional de Vitivinicultura en su realización.

Art. 2º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura será la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas número 20.247, en lo concerniente a la producción, comercialización e importación de plantas de vid y/o sus partes, como también ejercerá el control de los viveros de vid en lo concerniente a la selección de variedades, pureza de las mismas, controles fitosanitarios y todo lo que tienda a la seguridad de la futura implantación, quedando facultado para efectivizar las sanciones previstas en el capítulo VII y establecer y percibir los aranceles referidos en el artículo 31 de la citada ley.

Art. 3º — Exclúyese la simple tenencia de vino averiado sin fraccionar en bodega, de los presupuestos de punibilidad del artículo 24, inciso f) de la ley 14.878, sin perjuicio de la efectivización del destino que para tales productos determina el artículo 23 de la misma.

Art. 4º — Fíjase para la elaboración de vino, mosto natural y mosto sulfatado, la utilización de una cantidad no menor de ciento veintidós kilogramos (122 kg) de uva para la obtención de cien litros (100 l) de vino o mosto, al descubre. Todo volumen que exceda este rendimiento será considerado en infracción. Artículo 23,

¹ Véase el texto del mensaje 704, mediante el que se remite el proyecto de ley, en el Diario de Sesiones del 15 y 16 de mayo de 1987, página 734.

6

APENDICE

A. SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

PROYECTO DE LEY QUE PASA EN REVISION
AL HONORABLE SENADO*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

TITULO I

Principios básicos

Artículo 1º — La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional.

Art. 2º — La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Art. 3º — La defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda.

Art. 4º — Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial.

Art. 5º — La defensa nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para casos de guerra o conflicto armado.

Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacio aéreo internacional.

Art. 6º — La defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos, en la forma y términos que establecen las leyes.

TITULO II

Finalidad del sistema

Art. 7º — El funcionamiento ordenado del sistema de defensa nacional estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las

necesidades del país, así como a su permanente actualización.

Art. 8º — El sistema de defensa nacional tendrá por finalidad:

- a) Determinar las hipótesis de conflicto y las que deberán ser retenidas como hipótesis de guerra;
- b) Elaborar las hipótesis de guerra, estableciendo para cada una de ellas los medios a emplear;
- c) Formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda la Nación para el eventual conflicto bélico;
- d) Elaborar los planes para la conducción de los niveles de defensa nacional, correspondientes a la estrategia militar y a la estrategia operacional;
- e) Dirigir la guerra en todos sus aspectos, desde el nivel de la estrategia nacional;
- f) Conducir las fuerzas armadas y los esfuerzos de los sectores del país afectados por el conflicto bélico, en el nivel estratégico militar y en el estratégico operacional;
- g) Preparar y ejecutar las medidas de movilización nacional;
- h) Asegurar la ejecución de operaciones militares conjuntas de las fuerzas armadas y eventualmente las operaciones combinadas que pudieran concretarse;
- i) Establecer las hipótesis de confluencia que permitan preparar las alianzas necesarias y suficientes, para resolver convenientemente la posible concreción de la hipótesis de guerra;
- j) Controlar las acciones de la posguerra.

TITULO III

Estructura del sistema de defensa

Art. 9º — Los integrantes del sistema de defensa nacional serán los siguientes:

- a) El presidente de la Nación;
- b) El Consejo de Defensa Nacional;
- c) El Congreso de la Nación, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Nacional para el tratamiento de cuestiones vinculadas a la defensa y permanentemente a través de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras;
- d) El Ministerio de Defensa;
- e) El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas;
- f) El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Argentina;

- g) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en los términos que prescribe la presente ley;
- h) El pueblo de la Nación mediante su participación activa en las cuestiones esenciales de la defensa, tanto en la paz como en la guerra de acuerdo a las normas que rijan la movilización, el servicio militar, el servicio civil y la defensa civil.

Art. 10. — Compete al presidente de la Nación en su carácter de jefe supremo de la misma y comandante en jefe de las fuerzas armadas, la dirección de la defensa nacional y la conducción de las fuerzas armadas, en los términos establecidos por la Constitución Nacional.

Con el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional dispondrá el contenido y las pautas para la realización del planeamiento para la defensa nacional, controlando su confección y ejecución.

El presidente ejercerá:

- a) La conducción integral de la guerra con el asesoramiento y asistencia del Consejo de Defensa Nacional;
- b) La conducción militar de la guerra con la asistencia y asesoramiento del ministro de Defensa, del jefe del Estado Mayor Conjunto y de los jefes de Estados Mayores Generales de cada una de las fuerzas armadas, constituidos en Comité de Crisis.

Art. 11. — Sin perjuicio de las competencias que le son asignadas en la ley de Ministerios, el ministro de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias de la defensa que no se reserve o realice directamente el presidente de la Nación o que no son atribuidas en la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.

El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional, ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.

Art. 12. — El Consejo de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra así como también en la adopción de las estrategias, en la determinación de las hipótesis de confluencia y en la preparación de los planes y coordinación de las acciones necesarias para su resolución.

Art. 13. — Para dar cumplimiento a la función de asesoramiento al presidente de la Nación el Consejo de Defensa Nacional tendrá en cuenta un programa de mecanismos de alerta, que contempla las situaciones de conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas, para cada situación, conforme con el cuadro aclaratorio anexo que forma parte de la presente ley.

A los efectos del planeamiento en todos los niveles y de la asignación de misiones y funciones a los órganos y organismos del área de Defensa, incluyendo las fuerzas armadas, las situaciones de desastre contempladas en el cuadro anexo se tendrán en cuenta exclu-

sivamente en los términos de las leyes que norman la defensa civil.

Art. 14. — El Consejo de Defensa Nacional estará presidido por el presidente de la Nación quien adoptará las decisiones en todos los casos.

Estará integrado por el vicepresidente de la Nación, los ministros del gabinete nacional y el responsable del organismo de mayor nivel de inteligencia. El ministro de Defensa podrá ser acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto y los jefes de Estados Mayores Generales cuando el ministro lo considere necesario. Los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación y dos integrantes de dichas comisiones, uno por el bloque de la mayoría y otro por la primera minoría quedan facultados para integrar el Consejo de Defensa Nacional.

El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

Art. 15. — El organismo de mayor nivel de inteligencia proporcionará la información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacional de la defensa.

La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo de inteligencia que se integrará con los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y que dependerá en forma directa e inmediata del ministro de Defensa.

Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.

Art. 16. — El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá del ministro de Defensa; estará integrado por personal de las tres fuerzas armadas y su jefe será designado por el Poder Ejecutivo nacional de entre los oficiales superiores con máximo rango en actividad.

Art. 17. — El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asistirá y asesorará al ministro de Defensa en materia de estrategia militar.

Entenderá asimismo en:

- a) La formulación de la doctrina militar conjunta;
- b) La elaboración del planeamiento militar conjunto;
- c) La dirección del adiestramiento militar conjunto;
- d) El control del planeamiento estratégico operacional y la eficacia del accionar militar conjunto.

El presidente de la Nación, por sí, o por intermedio del ministro de Defensa, dispondrá las pautas a que deberá ajustarse el ejercicio de las funciones conferidas por la presente ley al Estado Mayor Conjunto y controlará el cumplimiento de estas funciones.

Art. 18. — El Estado Mayor Conjunto realizará el planeamiento estratégico militar de acuerdo a orientaciones dadas por el presidente de la Nación, a través del ministro de Defensa.

El planeamiento estratégico militar, podrá prever el establecimiento de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados, y comandos terri-

toriales, cuyos comandantes serán designados por el presidente de la Nación, de quien dependerán en caso de guerra o conflicto armado. A efectos del planeamiento y adiestramiento, dependerán del ministro de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Art. 19. — El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del Comité de Crisis.

TÍTULO IV

Organización de las fuerzas armadas

Art. 20. — Las fuerzas armadas son el instrumento militar de la defensa nacional y se integran con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados.

Estarán sometidas a un régimen de disciplina interna, y ajustarán su proceder al derecho nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.

Art. 21. — Las fuerzas armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán del planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios de organización y eficiencia conjuntos, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.

Art. 22. — Los componentes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea de la República Argentina, se mantendrán integrando sus respectivos agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes de Estado Mayor. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de estos componentes o parte de ellos, bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados o comandos territoriales.

Art. 23. — Los jefes de Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas dependerán del ministro de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las fuerzas armadas y mantendrán relación funcional con el Estado Mayor Conjunto, a los fines de la acción militar conjunta.

Los jefes de Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas serán designados por el señor presidente de la Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.

Art. 24. — Los jefes de Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas, ejercerán el gobierno y administración de sus respectivas fuerzas.

Dirigirán la preparación para la guerra de los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y su apoyo logístico. Asesorarán el Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar conjunto, acerca de la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como sobre los aspectos del referido planeamiento.

TÍTULO V

Servicio de Defensa Nacional

Art. 25. — Todas las personas de existencia visible y/o jurídica sujetas a las leyes argentinas, podrán ser requeridas para el cumplimiento de obligaciones destinadas a asegurar la defensa nacional.

Estas obligaciones deberán ser consideradas como un servicio de defensa nacional y comprenderán, entre otras, el servicio militar y el servicio civil de defensa.

Art. 26. — El servicio militar es el que cumplen los argentinos incorporados a las fuerzas armadas en el servicio de conscripción o en la reserva, convocados por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional y los voluntariamente incorporados a la conscripción, de acuerdo con las normas que rigen en la materia y a las que oportunamente se sancionen para contribuir a una mayor continuidad y profesionalidad de este servicio.

Art. 27. — El servicio civil de Defensa es la obligación de prestar servicios no militares, que deben cumplir los habitantes del país, a fin de satisfacer necesidades de preparación del potencial nacional para la eventualidad de una guerra, o para sostener el esfuerzo bélico ante el conflicto ya declarado.

TÍTULO VI

Organización territorial y movilización

Art. 28. — Para el caso de guerra o conflicto armado internacional el presidente de la Nación podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.

El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las fuerzas armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa e inmediata.

Art. 29. — En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación del artículo 6º de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable. En la hipótesis de adoptarse la medida referida, el Poder Judicial mantendrá la plenitud de sus atribuciones.

Art. 30. — El Poder Ejecutivo nacional con aprobación previa del Congreso de la Nación, podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la defensa nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección militar.

En caso de guerra o conflicto armado de carácter internacional o ante su inminencia, tal declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.

Art. 31. — Como integrantes del Sistema de Defensa Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, desarrollarán en sus respectivas estructuras orgánicas, los medios humanos y materiales necesarios para el debido y permanente control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos, así como para el cum-

plimiento de las demás funciones emergentes de esta ley y otras disposiciones legales que se le aplicuen.

La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánica y funcionalmente del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de lo cual, en tiempo de guerra, sus medios humanos y materiales o parte de ellos, podrán ser asignados a los respectivos comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.

Art. 32. — Los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la defensa nacional serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados por el presidente de la Nación.

Art. 33. — El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa civil. Se entiende por defensa civil el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.

Art. 34. — En caso de guerra o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades de la defensa nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.

Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la obligación, limitada a las necesidades de la defensa nacional, de proporcionar la información, facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. La información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer esas necesidades.

Art. 35. — La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si ese aporte implicara gastos o prestación de servicios se determinará administrativamente la indemnización o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante. En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada.

Art. 36. — El que denegare, retaceare, falseare o proporcionar con demora los informes requeridos por la autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición, será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de un delito más grave.

Las personas jurídicas de existencia ideal que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.

Art. 37. — Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que entorpecieren el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que

TÍTULO VII

Disposiciones generales

Art. 38. — Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194, el decreto 1.975/86 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 39. — Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.

Art. 40. — Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:

Artículo 16. — El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria a un oficial superior de las fuerzas armadas, quien dependerá del Ministerio de Defensa.

Art. 41. — Sustitúyese en los artículos 49, inciso 2º, 63 y 85, inciso 5º, de la ley 19.101, la expresión "Comandante en Jefe" por la de "Jefe de Estado Mayor General".

Art. 42. — Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:

Artículo 4º — Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.

Art. 43. — Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:

d) Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad, para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las disposiciones que, directa o indirectamente, se refieren a la defensa nacional.

Art. 44. — Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:

Artículo 9º — La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deban solicitar para autorizar la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de la opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía o industrias de cualquier índole que interesen a los fines de la defensa nacional e intervenir, asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen como personas de derecho privado.

TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias

Art. 45. — Sin perjuicio de las funciones establecidas precedentemente, el Consejo de Defensa Nacional, tendrá como función transitoria que deberá cumplimentar en un lapso no mayor de 365 días, la elaboración de anteproyectos de leyes que serán elevados a la consideración del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 46. — Los anteproyectos legislativos aludidos en el artículo precedente serán como mínimo los siguientes:

- a) Leyes orgánicas de las fuerzas armadas que contemplen las disposiciones de la presente ley relativas al planeamiento, logística, educación militar y accionar conjunto de las fuerzas, su reestructuración y modernización;
- b) Ley orgánica de producción para la defensa;

- c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa, que incluye las disposiciones relativas al servicio militar y civil;
- d) Leyes orgánicas para la Gendarmería Nacional y para la Prefectura Naval Argentina;
- e) Ley sobre el sistema nacional de información e inteligencia, que contemple el control parlamentario;
- f) Ley de secreto de Estado.

Art. 47. — Hasta tanto se sancione y promulgue la ley pertinente, los organismos de inteligencia mantendrán la misión, integración y funciones determinadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 48. — Las disposiciones de los artículos 32 a 37 regirán hasta la sanción de la legislación definitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la presente ley.

Art. 49. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CUADRO ANEXO

	SITUACIONES																																						
	INTERNACIONAL														NACIONAL																								
	Diplom.			Econ.			Polít.			Militar			CSL			CSG			AI			AM			Inund.			Terr.			Epidem.			Incen.			Hambre		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
MEDIOS																																							
Fuerzas armadas																																							
Fuerzas seguridad																																							
Defensa civil																																							
Sistema de información e inteligencia no militar																																							
Movilización, producción y servicios públicos																																							
Movilización, producción y servicios privados																																							

Referencias

Alerta: 1 Mínimo
2 Medio
3 Grave

CSL: Conflicto social localizado
CSG: Conflicto social generalizado
AI: Agresión interna
AM: Agresión militar

X: Medio vedado en su utilización

MECANISMOS DE ALERTA - DEFENSA NACIONAL

CODENA - CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

B. INSERCION

INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ZUBIRI

Conclusiones de la Comisión de Defensa Nacional de la Mesa de Consenso Democrático

Los representantes del gobierno nacional y de los partidos políticos reunidos en la Comisión de Defensa Nacional han llegado a las siguientes conclusiones que serán elevadas a la Mesa de Consenso Democrático:

1. — Es necesario sancionar las normas legales que provean a la defensa común y a garantizar la paz interior.

2. — El instrumento militar debe estar subordinado a la decisión y comando del poder político de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 86, incisos 15, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

3. — El poder político de la Nación debe ser asesorado y asistido, en materia de defensa nacional, por las fuerzas armadas.

4. — La naturaleza política y jurídica del actual orden internacional impone la necesidad de contar con un instrumento militar idóneo, eficaz y eficiente para garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y para proteger la vida y libertad de sus habitantes.

5. — La idoneidad, eficacia y eficiencia del instrumento militar está vinculado al proceso de modernización y reestructuración de las fuerzas armadas.

6. — El proceso de modernización y reestructuración de las fuerzas armadas requiere de leyes específicas y de un respaldo presupuestario y financiero para su ejecución.

7. — La naturaleza política y jurídica del estado de derecho otorga al poder constitucional la facultad de disponer de todos los recursos humanos y materiales para consolidar la paz interior, resguardando la vida, el honor y el patrimonio de todos los habitantes.

8. — Para el cumplimiento del precepto constitucional de consolidar la paz interior se deberá dictar una ley específica que contemple las posibles agresiones contra la seguridad interior.

9. — Es una preocupación constante de las fuerzas políticas aquí representadas, desalentar y oponerse a toda acción, cualquiera fuera su origen, que tienda a provocar o mantener diferencias entre los sectores civiles y militares de la comunidad nacional.

10. — Finalmente los partidos políticos coincidimos en declarar que en el espíritu de la unidad nacional y en el marco de las pautas sintetizadas en esta comisión del consenso se oriente el tratamiento parlamentario de la legislación referida a la defensa nacional.